

TRIBUNAL DE CONTAS

BOLETIM TRIMESTRAL





Sumário

NOTA DE ABERTURA

DOCTRINA

JURISPRUDÊNCIA

DADOS ESTATÍSTICOS

LEGISLAÇÃO

ARQUIVO HISTÓRICO

INFORMAÇÃO BIBLIOGRÁFICA

PUBLICAÇÕES RECEBIDAS

JURISPRUDÊNCIA (ficheiro de)

Nota de Abertura

A crescente divulgação e interesse demonstrados pelo Boletim do Tribunal, decidiu-me a aceitar e impulsionar as sugestões feitas pela Direcção-Geral no sentido de melhorar a sua apresentação e conteúdo.

Preliminar ao eventual lançamento de uma revista do Tribunal, creio que o Boletim Trimestral poderá constituir veículo adequado quer para o conhecimento exterior da actividade do Tribunal e dos seus Serviços de Apoio, quer para a formação e informação de todos quantos nele trabalham ou por ele são fiscalizados.

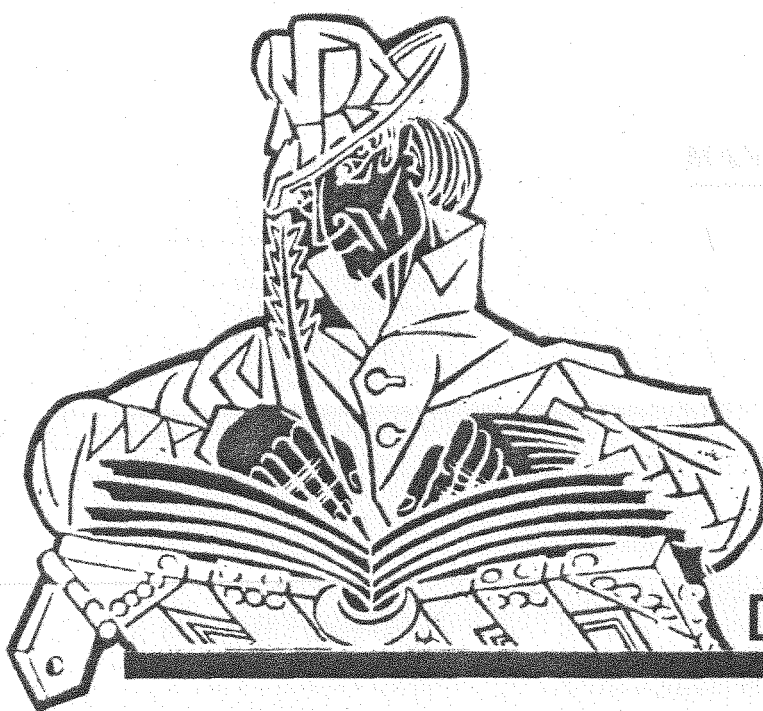
Por isso e tendo já determinado o alargamento da distribuição do Boletim, dirijo agora convite, em especial aos senhores Conselheiros e funcionários da Direcção-Geral, para colaborarem activamente no enriquecimento do seu conteúdo.

João de Deus Pinheiro Farinha

João de Deus Pinheiro Farinha

Conselheiro-Presidente



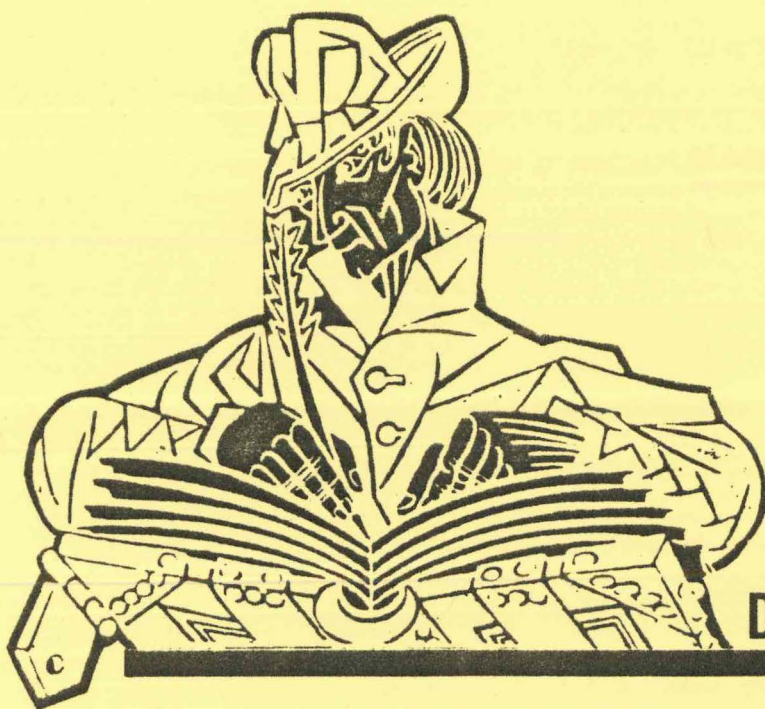


El Control Fiscal en el Estado Moderno

MANUEL RAFAEL RIVERO

Quinto de Beberes
de la República

DOCTRINA



DOCTRINA

El Control Fiscal en el Estado Moderno

MANUEL RAFAEL RIVERO

**Contralor General
de la República**

El Control Fiscal en el Estado Moderno

MANUEL RAFAEL RIVERO

Contralor General
de la República

Señores:

Señoras:

Profundamente reconocido por la distinción que se me ha otorgado al invitarme a concurrir a este senado, cumplo con verdadero agrado el elemental deber de cortesía al hacer presente a sus miembros, especialmente a su Presidente, el Dr. Tomás Enrique Carrillo Batalla, la complacencia con la cual la he atendido.

Considero un privilegio, — en el caso mío muy inmerecido, por cierto, — el disertar en el seno de tan ilustre corporación. Estimo que al disfrutar tal beneficio se alcanza una meta altamente apreciada para todo aquel que ha escogido el estudio de las disciplinas jurídicas o sociales como instrumento de orientación de su vida.

Como Contralor General de la República entiendo que es de saludable correspondencia el significar que la institución que me cabe en honra representar y dirigir, se complace en el hecho de que sea por intermedio de esta generosa invitación de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales y con este acto, que se inicie el ciclo de informaciones que se han previsto cumplir, con destino a la opinión calificada del país, acerca de los proyectos de reorganización del organismo superior de control externo. En ese proyecto, en sitio principalísimo, se ubican aquellos foros en los cuales la ciencia jurídica, en sus diversas especialidades, constituye tema central de sus preocupaciones. Ninguno más distinguido ni con mayores credenciales que esta docta corporación.

El abrupto y casi sorpresivo cambio de objetivos y responsabilidades que se opera en el esquema definidor del Estado después de la primera guerra mundial y casi como secuela de la agitación social europea es, también, el punto de partida de una profunda reorientación del concepto inveterado acerca de la naturaleza de la acción fiscalizadora sobre la administración pública. Al perder el Estado su característica tradicional, que lo hacía exclusiva y excluyentemente un resguardador y responsable del orden público y asumir funciones de servicio comunitario, incluso algunas de ellas con carácter monopolístico, se amplía en forma tal el radio de su actividad cotidiana que se hace absolutamente necesario instrumentar fórmulas adecuadas para asegurarse el control de su cumplimiento. Para lograr tales objetivos era necesario utilizar procedimientos y medios que nada tenían que hacer con los antiguos y ya sobregirados, los cuales, en alguna forma y manera eran los mismos creados y utilizados para resguardar los intereses públicos desde tiempo inmemorial.

Esta situación va a producir un elemento de distorsión de la tesis tradicionalista, ordenadora o clasificadora de las actividades de la sociedad, establecida en base a los intereses económicos, vigente en toda su fuerza a partir de la llamada "revolución industrial". En efecto, al asumir el Estado funciones empresariales e iniciar con ello una actividad generadora de bienes destinados al juego económico, todo con el propósito de originar ingresos diferentes a aquellos que tradicionalmente y casi con exclusividad habían servido para sustentarlo, es decir, los impuestos y contribuciones, alteraba en su esencia el orden heredado e iniciaba la gran transformación de la sociedad tradicional, para la cual se había creado el modelo aceptado de control fiscal. Una vez en marcha ese proceso de transformación se iniciaba el desarrollo de una extendida cadena de complejidades de orden social, económico, administrativo y conceptual que iban a repercutir hondamente en el ejercicio del control que ha de ejercerse sobre la acción cumplida por el administrador de bienes y fondos públicos, su forma de aplicación y el objetivo perseguido.

La aparición de estos fenómenos en la escena de la actividad política europea, su desarrollo y las repercusiones que generan en el ámbito de la administración pública, concretamente en aquel referido a la actividad fiscalizadora, apenas son conocidos en Venezuela por reducidos grupos de estudios. El país permanece sometido a una férrea situación de aislamiento.

A pesar de esa realidad, sin embargo, ya en el año de 1928 aparecen las primeras manifestaciones de una política destinada a abarcar campos no integrados, hasta entonces, al esquema conocido del Estado. La creación del Banco Obrero, cuya función esencial era la de actuar como instrumento de financiamiento y, al mismo tiempo, ejecutor de un programa de construcción de viviendas destinadas a sectores con pocos recursos económicos; y del Banco Agrícola y Pecuário, cuyo

objetivo estaba dirigido a afrontar las exigencias crediticias de la agricultura y la ganadería, en marcado proceso de decadencia, son los elementos de referencia de mayor significación en tal sentido.

Tal vez sería conveniente apuntar, no solo en razón de respeto a la verdad histórica, sino con el fin de comprender bien las características que ofrece en nuestro país el proceso de estructuración de la actividad contralora del Estado, que el hecho material de la creación y puesta en marcha de esos dos organismos antes mencionados obedecía, fundamentalmente, a una decisión soberana y aislada del hombre que ejercía el poder, mas que a una resultante de cualquier proceso de modificación de estructuras sociales y políticas, como era el caso europeo. Es posible que fueran, eso sí, repercusiones muy aisladas e incipientes de otro fenómeno que conlleva condiciones muy específicas, de características casi estrictamente venezolanas, cual es la influencia del petróleo en la vida integral de la Nación. Ya para entonces los recursos provenientes de su explotación comenzaban a incidir determinadamente en la tradicionalmente escuálida hacienda pública.

Las referencias de contenido histórico que en forma muy sucinta hemos señalado las hemos traído a colación en beneficio de la comprensión de la evolución que acusa en nuestro país el desarrollo de la actividad contralora del Estado. Como conclusión de todo ese proceso pienso que sería válido referirnos a tres etapas que encerrarían el periplo dentro del cual se ha cumplido.

La primera se originaría desde el nacimiento mismo de nuestra nación, al tiempo de su estructuración como unidad fiscal dentro del imperio español. Casi sin mayores alteraciones se prolonga hasta el año de 1938, fecha de creación de la Contraloría General de la Nación, — denominación inicial de la institución, en mi opinión menos propia que la actual, — cuando se van a modificar profundamente los conceptos, aún cuando no enteramente las actitudes y las prácticas. A través de las llamadas Salas de Centralización y Examen, adscritas al Ministerio de Hacienda, se practicaba el control numérico-legal, de origen colonial, fundamentalmente dirigido al ajuste de partidas en la contabilidad del presupuesto de ingresos y gastos, realizado con posterioridad al acto administrativo. No se trataba, ciertamente, de la aplicación de un sistema cualquiera de control externo, similar en alguna forma al que llevan a cabo organismos como las Contralorías o los Tribunales de Cuentas.

La segunda arranca con el nacimiento del organismo superior de control, cuando realmente se puede hablar en Venezuela de la práctica de un control fiscal externo, cumplido por un ente no sujeto a la administración, con capacidad legal para establecer comparaciones de resultados en base a la constatación del control en dos tiempos: el previo y el posterior. Con altibajos en la real aplicación de su autonomía funcional, — muy escuálida en el tiempo de la dictadura perezjimenista, — conservando muchas de las antiguas fórmulas de acción y concepción del control fiscal, se extiende hasta el año de 1975, cuando se aprueba la Ley Orgánica que le otorga su efectiva autonomía y le configura su estructura de funcionamiento en base al rango constitucional de órgano del Estado que le concedió la Constitución de 1961.

La tercera etapa, que es la actual, realmente se origina como consecuencia de la conmoción que se sucede en el cuerpo social de la Nación al multiplicarse, intempestivamente, la fuente de ingresos públicos en razón al aumento de los beneficios petroleros. Esta última etapa se diferencia fundamentalmente de las anteriores por el hecho de que no nace en virtud de una decisión administrativa, de una planificación oportuna, sino de una conjunción de hechos no previstos, lo que obliga a la institución a adecuar sus estructuras a las realidades que conmueven y trastornan todo el andamiaje administrativo del país.

De una manera u otra, bajo una forma u otra, el objetivo del control externo se había fijado y se circunscribía a la determinación del uso correcto, por parte del administrador público, de fondos que le habían sido confiados, o de bienes que debía atender y conservar, todo ello dentro de un marco de referencias perfectamente especificado en la Ley. Factores tan indeterminados como el alea o el riesgo, no entraban dentro del ámbito de las consideraciones posibles que debía tener presente, tanto el administrador como el funcionario de control, al momento de tomar sus decisiones o evaluar los resultados. Es evidente que frente a la dimensión tan colosal que ha adquirido la ingerencia del Estado en el campo empresarial, cuya inversión supera ampliamente el monto de mas de un presupuesto ordinario, este principio se modifica en forma radical.

La concepción que del control tuvieron los legisladores del año 1938 y aún los del año 1975, siguió la orientación ortodoxa y tradicional, entre otras razones válidas, por el hecho de que la estructura fiscal del Estado no había variado. Aun cuando estaba planteado todo un amplísimo programa de contenido político, cuya base es la propia Constitución Nacional, en la práctica, a pesar del mejoramiento de los ingresos, todavía el origen de estos seguía circunscrito a la percepción de la renta impositiva. El Estado no había emprendido

aún la gran aventura de financiar y gerenciar los gigantescos complejos industriales, presumiblemente ideados para generar nuevos ingresos, distintos de los tradicionales, ni tampoco a subsidiar los fabulosos programas de asistencia de muy variada índole, incluyendo aquellos referidos al costo de la política social, todo lo cual se hace materia de control fiscal.

El aumento de los precios de los hidrocarburos en los mercados internacionales, acontecimiento no derivado del mecanismo económico del país, lo cual va a determinar el fenómeno inmediatamente subsecuente de su casi total incapacidad para absorber en forma progresiva y equilibrada los recursos cuantiosísimos que prodiga; y lo que tal extraordinaria bonanza genera de manera secuencial, la nacionalización de la industria petrolera y especialmente la decisión de acelerar el desarrollo de otras, calificadas como básicas, en razón al consumo de materias primas nacionales de origen minero y a la tesis de industrialización forzada, se lleva a cabo en un lapso absurdamente reducido. Para fundamentar el programa se adoptó un supuesto teóricamente valedero, aún cuando inconsistente en la práctica, como fue el tratar de justificar el aceleramiento en razón al tiempo perdido por el país en la estructuración de su desarrollo. Como argumentos de fondo para proceder en tal forma, se planteaba la urgencia de solucionar problemas de muy alta prioridad para el Estado, tales como la reinversión de los beneficios petroleros extraordinarios en industrias básicas, que no solamente se harían reproductivos, sino que se convertirían en soportes de la cadena de industrialización del país, todo lo cual tiene un contenido y vigencia permanente. Pero, al mismo tiempo, se incluyó en las acciones implícitas en la consecución de esas metas otros aspectos de la problemática nacional, tales como el desempleo que, de haber representado realmente una presión social importante, lo era francamente coyuntural. Esto generó, en definitiva, la situación crítica que hoy deben confrontar esas empresas, la cual pareciera se prolongará al menos durante un largo período cuya duración no es fácil pronosticar.

Esa aceleración de intensidad tan manifiesta, múltiple e intrínsecamente concebida en base a parámetros sumamente costosos y de alta y muy sofisticada tecnología, ha ido generando una clara situación de incoordinación entre la Contraloría General de la República y muchos de los mas importantes entes en donde el Estado adelanta su acción empresarial. Tal situación se ha materializado en las limitaciones a las cuales debe hacer frente el organismo para cumplir allí eficientemente sus responsabilidades en razón a la carencia de personal suficientemente especializado para ello, pues de lo que se trata, ya lo subrayamos, no es sólo de recibir libros de contabilidad y verificar comprobantes, sino pronunciarse sobre la operación técnica en sí y analizar los reales resultados obtenidos.

Entre otras muchas consecuencias anotables a simple vista al hacer un análisis objetivo del panorama que ofrece el ámbito en donde se ha estructurado y actúa el Estado venezolano en los actuales momentos, podríamos constatar como esos cambios presentaron al sistema de control externo, con carácter de perentoriedad, un reto muy duro y altamente peligroso, el cual, si es cierto que se ha tratado de afrontar, también lo es que no ha sido posible resolver satisfactoriamente en muchos de sus puntos álgidos. Con toda responsabilidad debo hacer y hago esta afirmación dada la significación que tiene.

Una última observación queda por hacer, íntimamente relacionada con el aspecto que hemos venido tratando de toda esta problemática, ciertamente compleja. Me refiero al hecho de que, si es cierto que el desarrollo del país se avala con un porcentaje válido de continuidad, respetada por los distintos gobiernos de turno, prácticamente desde el año de 1936, también es cierto que esa continuidad no está sustentada por un mínimo de condiciones armónicas valederas, entre otras razones, por haber carecido de metas precisas, adecuadamente sectorizadas. Solo parece que ha existido y ha estado presente una sola condición para hacerle frente al reto impuesto por el desarrollo: ganar el tiempo perdido y abarcar el mayor número de aspectos dentro del variadísimo espectro que proponen las crecientes aspiraciones de todos. Esta carencia de metas precisas y adecuadamente clarificadas, que, se nota tanto a nivel macroeconómico como en los sectores y componentes secundarios o de soporte, representa un inconveniente de considerable magnitud para la ejecución de un control sincero de la gestión que los administradores adelantan en los diversos sectores en donde se ubican las gestiones específicamente comprometidas con la construcción de la infraestructura del país.

Esa ausencia de metas y la carencia de una mínima coordinación entre los organismos comprometidos en un mismo programa, han sido responsables de inmensos daños para el país, los cuales, desafortunadamente, no es posible cuantificar y muy difícil atribuir a funcionarios concretos, lo cual ha generado esas graves responsabilidades innominadas.

Siguiendo el análisis del asunto sobre esa misma línea que traemos, antes de proseguir, es absolutamente necesario aclarar que la incidencia de la bonanza fiscal corrió pareja por todos los distintos sectores y áreas del Estado, aumentándose en forma realmente desmesurada la dimensión de su influen-

cia y el crecimiento acelerado de aportes, los cuales no siempre han recibido como respuesta un claro mejoramiento de los servicios adscritos a los tradicionales Despachos Ministeriales, es decir, a la llamada Administración Centralizada.

Tanto en un sector como en el otro el Organismo Superior de Control Externo ha debido atender las exigencias que le presentan las administraciones de servicios, de empresas, de Institutos Autónomos y de una serie muy variada de personas jurídicas en las cuales el Fisco tiene interés. Las de estas dimensiones en el orden puramente físico y evidentemente económico y, al mismo tiempo, la complejidad en cuanto se refiere a sus estructuras y funcionamiento, técnicas a emplearse y fórmulas de gerencia a cumplirse, desbordan considerablemente las posibilidades reales con las cuales puede contar la Contraloría para cumplir sus encargos. Al menos dentro del esquema que se le tiene asignado actualmente, de acuerdo a la Ley.

Por último, no olvidemos que ya a otro nivel, el que corresponde a las administraciones de los Estados y Municipios, en donde la Contraloría, igualmente, tiene obligaciones que cumplir, también se presenta el fenómeno de la hipertrofia presupuestaria, con iguales derivaciones hacia la diversificación de funciones y actividades a desarrollarse en el campo de la actividad empresarial.

Al modificarse tan sustancialmente la base estructural del Estado y al haberse ello cumplido en forma tan inarmónica, menospreciándose, permitaseme el término, el problema que significaba adelantar un tan ambicioso programa de reformas en el plano económico sin adecuar al mismo los recursos con los cuales se contaba para practicar su control, esta función quedó atrapada entre lo que la ley le encomienda y exige cumplir, concebido en base a una situación que ya no existe pues ha sido profundamente alterada y lo que realmente puede llevar a cabo de acuerdo a sus posibilidades materiales, incluso, capacidades legales.

Valga aquí una digresión la cual justifico en el interés de hacer lo mas clara y explícita esta exposición. El problema de la aceleración, incluso desmedida, en el crecimiento de las administraciones públicas no es, ciertamente, exclusivo de Venezuela. Todos nosotros lo sabemos. Mas bien es un fenómeno universal y, en todo caso, muy común en los países de desarrollo relativo como el nuestro. En el caso específico de Venezuela, sobre este problema ha incidido la cuestión de los ingresos petroleros, a lo cual antes me referí. Lo que trato, pues, no es de presentar el asunto con caracteres de exclusividad venezolana. Sin embargo, creo que lo realmente interesante ahora es analizarlo dentro del contexto integral de la problemática nacional a fin de encontrar una solución acorde con ella y, en forma alguna, aislada, escrupulosamente técnica. Esa posición la consideraría absolutamente contraproducente, pues daríamos entrada a un sistema de control alejado de la realidad, como consecuencia de lo cual, generador de calamidades antes que ajustador de desafueros.

Al retomar el hilo de lo que he venido exponiendo, me parece conveniente insistir en el asunto referente al desfaseamiento que existe entre las obligaciones que la Ley impone al Organismo Superior de Control Externo y la realidad que ofrece la estructura y comportamiento de la actual administración pública venezolana.

Utilizando una imagen muy del gusto de los técnicos en organización, creo que podría decir con propiedad que la Contraloría General de la República ofrece un perfil vertical, mientras la Administración Pública lo presenta en sentido horizontal. Este símil nos permitiría señalar que la contradicción que ya supone esta diferencia esencial, se hace mas evidente y hasta desproporcionada por el hecho de que el crecimiento del plano horizontal ha sido tan sobredimensionado que la visión general que antes se podía percibir desde el perfil vertical ha quedado mutilada y tan sólo permite captar una panorámica parcial.

Con esto lo que se pretende explicar es que al haberse tenido de referencia, como efectivamente fue lo que se tuvo para el momento de la creación de la institución, en el año de 1936, un modelo de estructura tradicional, resultaba acertada la tesis en virtud de la cual se formaba un organismo de control externo de naturaleza similar, fuertemente centralizado en su actividad y esencialmente destinado a vigilar la correcta manipulación del gasto público partiendo de la aplicación del control numérico-legal como elemento básico, practicado con anterioridad a la consumación del hecho de administración, lo cual debería ser posteriormente comprobado, cuando ese fuere el caso.

Fue idea central, férreamente defendida por los promotores del organismo y lealmente compartida por aquellos que le han dado forma a la institución, la de que el control así concebido y practicado en dos tiempos, —control previo y posterior,— constituía una insuperable solución de salvaguarda.

Todos estos supuestos han quedado inmersos en la mayor obsolescencia en la Venezuela receptora de los pingües beneficios petroleros. Muchas de las previsiones de entonces, aún vigentes, a pesar de las valiosísimas innovaciones y aportes que trajo la novísima Ley Orgánica que rige la institución, resultan realmente risibles, por no decir perjudiciales al ma-

nejo moderno de la función contralora. Tomemos como ejemplo las disposiciones relativas a la contabilidad fiscal en el aspecto referente a los asientos. Las magnitudes dentro de las cuales se prevé entonces que se produciría el gasto, en concordancia con los ingresos, resultaban factibles de ser manejadas mediante la aplicación de procedimientos contables tradicionales, todos ellos derivados de concepciones arcaicas del control, algunas, incluso, con orígenes tan remotos como las Leyes de Indias. De esa tradición aún conservamos el corte de cuentas semestral que se fundamenta en una previsión tan poco vigente como que guarda correspondencia con el lapso dentro del cual normalmente arribaba y partía el convoy con destino a España, portador de los papeles que informaban de las cuentas elaboradas por los Oficiales Reales.

Es necesario producir, pues, los ajustes que esta situación exige. Pienso que ellos no deberían limitarse al simple hecho de modificar los textos legales. Eso hay que hacerlo, claro está, pero sin olvidar que lo que realmente interesa es generar fórmulas de acción eficaces para atender las exigencias de una nueva realidad en el manejo de los fondos públicos y en la guarda y custodia de los Bienes Nacionales a fin de poder cumplir con los encargos de la ley y con los reclamos de la colectividad, la cual se siente defraudada y desatendida.

Los redactores de la vigente Ley Orgánica que rige el funcionamiento del Organismo, por fortuna, desarrollaron con suficiente amplitud previsiones sabias y precisas, adecuadamente amplias como para permitir, con toda justedad, la posibilidad de poner en marcha programas revisados que permiten ajustar procedimientos y rectificar conceptos que así lo ameriten en fuerza a la imposición de las circunstancias.

Un primer señalamiento que consideramos de importancia en este orden de cosas, es aquel que se refiere al desarrollo de un efectivo control de la gestión en las empresas e institutos autónomos en cuyas manos se encuentra la administración de los intereses mas determinantes del porvenir de Venezuela. El control del gasto público, cuya sustentación es el llamado control previo, base fundamental del quehacer actual de la Contraloría, constituye una importantísima actividad cuyos créditos en beneficio del país son abundantes. Creo no exagerar si señalo que en mucho ese control ha contribuido al mantenimiento de la Administración Pública sobre bases de legalidad y de orden, que posiblemente no se hubieran podido sostener de no haber existido tal providencia.

Una vez señalado eso, es necesario considerar que dicha previsión se ha ejercido, tan sólo, en lo que corresponde al manejo de los fondos presupuestarios destinados a ser utilizados por la administración centralizada, dejándose afuera, por razones inherentes a la condición misma que se le atribuye a su gerencia, el control de los inmensos fondos destinados a ser invertidos por la variada gama de institutos autónomos, empresas y otros entes que integran la administración descentralizada.

La adecuación de este asunto no pensamos que se va a encontrar estableciendo un procedimiento de control previo al gasto en ese sector de la Administración Pública. De hacerse así se desvirtuaría de manera absoluta la razón de ser de esta fórmula, propuesta para satisfacer la condición esencial de toda empresa en actividad, cual es la capacidad de agilización de sus negocios. Sin embargo, si creo que la Contraloría debe prepararse para cumplir una efectiva acción que le permita enterarse oportunamente de las decisiones de gerencia que se toman y de los resultados obtenidos, manteniendo muy claro el criterio de que los beneficios de una empresa estatal no sólo pueden medirse a base del simple análisis del balance, destinado a producir un control puramente numérico-legal.

Lo que está planteado para ser cumplido por la Contraloría en ese sector de la Administración Pública, en nuestra opinión, es la formación de los cuadros adecuados y la creación de los sistemas convenientes que permitan al Organismo Superior de Control Externo el poder conocer los reales resultados que se obtengan en la gestión empresarial que adelanta el Estado. Es decir, el desarrollo del control de la gestión. Mucho mas que la apertura de una averiguación administrativa y la secuela factible de un juicio por responsabilidad penal o civil, lo que la opinión pública reclama es el logro de una efectiva eficiencia en el manejo de los negocios de contenido económico que el Estado se ha reservado para sí.

Diríamos que aún cuando en medio de la apasionada discusión política pareciera solicitarse que toda la actividad del control se dirija a la determinación de las culpabilidades, al señalamiento de los responsables de ellas y a la real imposición de castigos ejemplares, al país lo que mejor resultado le depara es instrumentar los medios adecuados para evitar errores, negligencias, fallas, que son los instrumentos que mas directamente conducen al delito. En este sentido, entendemos que el control fiscal debe cumplirse de manera realmente participativa, sin mezclarse ni comprometerse con la función administradora, pero sin levantar fronteras infranqueables entre ambos.

Para lograr esto pienso que se hace necesario comenzar a aclarar conceptos que hoy en día parecen olvidados o, en el mejor de los casos, seriamente confundidos. No sería posi-

ble, claro está, abarcarlos todos en una exposición como esta. Veamos, pues, tan solo algunos.

La prédica generalizada en el sentido de someter al Administrador de bienes públicos a la tabla de medidas preestablecida para catalogar y calificar al gerente en la actividad privada ha generado la creencia de que la eficiencia de éste debe medirse por los grados —absolutamente convencionales, no lo olvidemos,— que en el campo privado se le asignan a la celeridad en la toma de decisiones y la ejecución de propósitos. Se olvida o se confunde la circunstancia de que este cuasi postulado aceptado allá sin asomo de duda, no puede tener aquí el mismo acatamiento ni la igual posibilidad de resultados exitosos, en razón a que la actividad empresarial del Estado es tan solo una cuasi condición similar a la otra, a la privada, pero jamás una reproducción o sustitución de ella.

Otro elemento que se hace necesario aclarar suficientemente a fin de que tanto mandantes como mandatarios mantengan una actitud de adecuada santidad, es aquel que guarda relación con la naturaleza misma de las empresas estatales.

La ficción jurídica que las hace aparecer como entes enteramente calcados en la personalidad que el derecho mercantil les acuerda a las sociedades de capital y la ficción económica de que por esa vía está garantizada su eficiencia es la idea impulsora de su formación e integración al ámbito del derecho administrativo. En la realidad esta concepción no ha sido mantenida en su justo término por el Estado ni por los Administradores de estos entes. El Gobierno ha actuado frente a ellas, cada vez que alguna coyuntura determinada se ha presentado, realmente con la mentalidad tradicional del detentador del poder, aplicando la fórmula del *jus imperator*, pura y simplemente. El respeto a la gestión de la Gerencia debe ser mantenido de manera clara y precisa, pues de otra manera se hace imposible, en un momento dado, fijar y determinar responsabilidades.

Por otra parte, se observa que muchos gerentes se han considerado absolutamente asimilados a la condición que tienen sus correspondientes en la empresa privada y en ese sentido, a la hora de tomar las decisiones, han perdido de vista la especialísima característica que reviste la responsabilidad que han asumido, la cual les obliga a actuar con la diligencia de un buen padre de familia pues, en definitiva, se trata de bienes pertenecientes a la Nación, que la Ley asimila al menor.

Hay en esta situación una particular condición que mas que en la letra de la Ley se encuentra definida en el campo de lo conceptual. Allí es donde principios de contenido ético, de responsabilidad ciudadana, juegan un papel decisivo. Es un punto álgido que genera no pocas confusiones, razón por la cual toda la teoría del Derecho Administrativo se encuentra actualmente en trance de redefinir y clarificar la cuestión con miras a su integración en el cuerpo legal. Es esta una de las cuestiones que mayor significación genera, hoy por hoy, a los fiscalistas, muy específicamente al estudio del control fiscal.

La responsabilidad que se le asigna al funcionario público tradicional queda perfectamente definida y establecida mediante la aplicación de una normativa precisa. El gerente de empresas públicas, encargado de manejar bienes —desproporcionadamente mas significativos en valor, generalmente, que los que manejan los funcionarios públicos,— debe ser ubicado por el contralor de su gestión en una situación muy especial, que le lleva a examinar, no solo la justificación numérico-legal de sus actuaciones, sino, al mismo tiempo, tal vez con mayor incidencia, el real y efectivo resultado de su gestión como tal en el puro orden de los beneficios. En otras palabras: la aplicación del control de la gestión, pero no ya bajo el concepto tradicional que, de alguna manera, parte de la idea de una acción cumplida dentro de ciertos moldes muy concretos y definidos, sino mas bien con el criterio amplio y fluctuante que caracteriza a la gerencia ordinaria en la empresa privada.

Como vemos, pues, para el agente de control fiscal, la situación presenta una evidente dicotomía nada exenta de contradicciones. Por una parte, ha de considerar y tener muy en cuenta las limitaciones dentro de las cuales debe actuar el gerente de una empresa estatal, dada su condición de administrador de bienes públicos; y por la otra, debe, igualmente, no perder de vista, que su actuación tiene que tener como referencia, en el establecimiento de su juicio, la obligación de aquel de lograr que los intereses que le han sido confiados generen la máxima rentabilidad y beneficio, tal como un gerente privado.

Esta situación, por último, es bueno dejarlo bien claramente señalado, no se presenta con exclusividad en el solo ámbito de la empresa del Estado, en el Instituto Autónomo y en los otros repartimientos en los cuales se encuentran presentes bienes públicos. Lo que sucede es que allí la cuestión adquiere una evidencia absoluta por la sencilla razón de que al copiar el esquema de la sociedad privada resalta con mas facilidad la cuestión de los resultados o beneficios logrados. En el campo que encierra la llamada Administración Centralizada, la dimensión de las inversiones que se han llevado a

cabo para atender los distintos servicios que presta, muy especialmente en el sector educativo y asistencial, han ido estimulando la formación de grandes núcleos, los cuales, por su propio dinamismo, van creando una actividad cuyo control requiere la aplicación de parámetros absolutamente semejantes a aquellos que se aplican para medir y evaluar los resultados de una empresa cualquiera de características privadas. Ese es el caso patente de los hospitales y de los planteles educacionales.

Toda la complejidad que se genera en esta variada situación es lo que nos ha llevado a la conclusión de que la real posibilidad existente de ajustar la acción contralora a las exigencias de la comunidad nacional, —las cuales, quizás, pudiéramos sintetizar en: mayor alcance de la vigilancia, en profundidad y en atención y mayor precisión oportuna para impedir los desajustes en todas sus manifestaciones,— es lograr que el control externo se cumpla dentro de un programa de acción mancomunada. Esta la concebimos a distintos niveles de jurisdicción, territorial y/o de actividades; dentro de una unidad de acción y bajo condiciones idénticas de autonomía funcional; asegurándose a cada uno de los organismos que ejerza el control externo su integración dentro de un sistema nacional que concrete unidad en la acción y capacitación adecuada al personal que se reclute para su servicio.

El objetivo prioritario a alcanzarse con la puesta en marcha de esta idea, sería el de lograr el establecimiento de una cadena de acciones que permitieran, en un primer paso, descartar al Organismo Superior de la ejecución directa del control a nivel de Estados y Municipios. Allí esa función la seguirían cumpliendo los organismos contralores designados por los cuerpos deliberantes respectivos, Asambleas Legislativas y Concejos Municipales, los cuales colaborarían directamente con la Contraloría General de la República en el cumplimiento de su cometido. La factibilidad de esa colaboración, a llevarse a cabo con toda validez, se piensa posible en razón al establecimiento y respeto de las condiciones mínimas antes enunciadas, sin que ello fuese óbice para que, a su vez, el Organismo Superior, llevase a cabo sus propias investigaciones y constataciones, pero ya con sentido puramente selectivo.

Es necesario reconocer que los organismos de control regional y municipal, que debían haber adquirido ante sus respectivas comunidades toda la jerarquía que les ofrece la alta y delicada misión que se les confía, han visto mermada y oscurecida su representatividad e importancia. Cuanto ha privado en el acto de su elección, de su organización y de su actividad ha sido tradicionalmente la componenda política circunstancial y aldeana, el amiguismo y la ignorancia mas escandalosa de las graves responsabilidades que se adquieren cuando se escoge y se acepta un cargo de esa significación. Por esa lamentable realidad la Contraloría General de la República no ha podido contar con ese apoyo que tan útil le hubiera sido.

Esa unificación de acción que sería base del proyecto no podría lograrse con el solo fundamento de su legalización. Mas que todo eso lo que realmente haría la efectividad de esa forma de actuar sería el compromiso político que permitiría realmente la estructuración de fórmulas destinadas a la formación de personal y a la implantación de procedimientos de acción comunes.

Dentro de los límites conceptuales del Estado tradicional la presencia activa de un organismo de control, suficientemente amparado por una autonomía funcional efectiva, se concibe con el solo y único propósito de asegurar el buen y correcto manejo de los fondos públicos. Fue esa la idea primigenia que se tuvo sobre el asunto, de allí que resultara perfectamente razonable y casi inevitable que, desde el primer momento, afloraran posiciones entre el común de las gentes referidas a catalogar y mantener las funciones cumplidas por el contralor externo como implícitamente inmersas dentro de la naturaleza de aquella que se le asignan a los cuerpos pesquizadores. Y como consecuencia de esta actitud, claro está, al funcionario contralor se le estableció como dogma que sus relaciones con el administrador debían quedar absolutamente precisadas dentro de un código no escrito de suspicacias, el cual debería tener como objetivo el mantenimiento de la sospecha, de la duda, sobre la corrección con la cual el administrador cumplía su función, salvo prueba en contrario.

La situación como debe ser concebida en un Estado Moderno debe ser absolutamente diferente. Al menos, no parece razonable dejarla limitada a ese solo y único encargo. Lo que el funcionario de control ha de buscar como meta no es la necesidad de inculpar sino la posibilidad de evitar fallas, culpabilidades y delitos.

La administración de un Estado moderno no es posible concebirla ni realizarla con criterio sectorial, como si sus diversos órganos representaran los antiguos departamentos estancos. La inter-relación entre unos y otros la impone la naturaleza y condición misma de la técnica, que domina el quehacer del hombre y de la sociedad de nuestro tiempo. No es concebible hoy administrar sin controlar. Pero tampoco es posible controlar sin que, de alguna manera, se co-administre.

Esa posición podría dejarnos algunas conclusiones muy precisas. Yo propondría las siguientes: Primero: es absolutamente necesario adecuar el instrumento jurídico que poseemos a fin de que nos permita poder practicar un control en concordancia con la nueva estructura que ha adoptado el Estado; Segundo: mas que ubicar esa puesta al día en una determinada reforma de textos legales, a lo cual ciertamente hay que proceder en su oportunidad, el problema debería enfocarse hacia un cambio de actitud, tanto del funcionario que ejerce el control, como aquel que va a ser controlado; Tercero: el ejercicio del control, en una administración como la nuestra, solo es posible realizarlo con efectividad mediante la cooperación adecuadamente establecida entre los distintos organismos de control, externo e interno, que funcionan en las diferentes ramas de la Administración Pública; Cuarto: la creación del Sistema Nacional de Control podría convertirse en un adecuado instrumento para la realización de estos propósitos.

Señoras,
Señores:

De ninguna manera es posible en una exposición como ésta dejar de lado el gravísimo problema que tan duramente afecta el sentimiento de lealtad al país, a sus tradiciones, a sus responsabilidades ante las generaciones futuras, originando por los índices de inmoralidad delictiva que amenazan a toda la Administración Pública venezolana. A pesar de tantas mujeres y hombres honestos que la sirven, pareciera ser que no escaparían a ese incalificable y bochornoso mercadeo de la infamia ninguna de las variadas capas que componen la nómina de funcionarios al servicio del Estado. Hay como un pavoroso contubernio entre la incapacidad manifiesta, la ambición por el disfrute fácil del dinero, que lleva al individuo a desconocer cualquier nivel de decencia y la traición de los dirigentes que se disponen a convertirse en cómplices para conservar prebendas y disfrutar de poder. Es un tiempo lleno de presagios y congojas el que cubre a Venezuela. Al menos para los ojos y el corazón de quienes la amamos por ella misma.

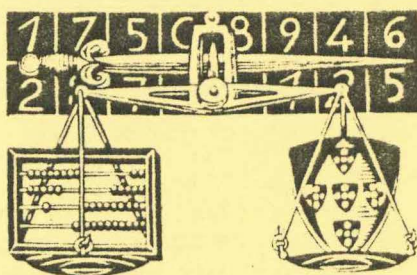
Para un organismo como la Contraloría General de la República la constatación de hechos como los mencionados no puede generar otra cosa que una honda y permanente angustia. Quienes la servimos tenemos la obligación de velar por la superación de situaciones como las mencionadas. Sin embargo, sabemos que carecemos de los elementos indispensables para adelantar positivamente cualquier acción en ese sentido. No se trata, como tan ingenuamente o tan falazmente pregonan muchos, de dar comienzo a algo así como una cruenta cruzada cuyo objetivo fuera el ajusticiamiento que practican hoy en día ciertos pueblos fanatizados. Una vez cumplido el programa en cualquier San Bartolomé tropicalizada, nos tocaría contar los cadáveres y ahogarnos de dudas por no saber si realmente la poda ha sanado al cuerpo enfermo.

Muy sinceramente pensamos que la única solución posible al problema, que la sola válida respuesta al desafío infamante, que la exclusiva y honrada actitud frente a la cruel intención de destrucción, es el enfrentamiento de quienes seguimos creyendo en los valores esenciales del individuo con aquellos que ya no piensan, ni quieren sobrevivir, que se han hecho escoria y guñapo, en fin, que no son ya hombres de bien, ni de futuro, que carecen de fe, de principios y de fin. No es posible que en este grave desafío nos separen banderías o intereses circunstanciales. Es el país en su integridad quien nos reclama, es su destino, el de nosotros, el de nuestros hijos y el de los hijos de ellos.

Con arrebatada pasión por Venezuela, con la porción intacta de fe que aún me resta, con la esperanza de que el país es el mismo de sus grandes horas de prueba, hago este llamado sincero para la lucha contra aquellos que con su negligencia, con sus trampas, con sus infamias quieren destruirlo.

Hay que creer que aún está de pie el bravo pueblo. Con su gloria y con su fuerza.

JURISPRUDÊNCIA



AUTOS DE RECLAMAÇÃO

(Lei nº 8/82, de 26 de Maio)

INGRESSO NA CARREIRA DE ESCRITURÁRIO-DACTILÓGRAFO

Sumário:

1. A nomeação como escriturário-dactilógrafo, prevista no artº 12º do Decreto-Lei nº 191-C/79, de 25 de Junho, está condicionada à realização de concurso de prestação de provas.

2. A exigência de tal requisito resulta do artº 28º do Decreto-Lei nº 49 410, de 24 de Novembro de 1969, preceito este que não foi revogado pelo artº 12º do Decreto-Lei nº 191-C/79.

3. Posteriormente à entrada em vigor do Decreto-Lei nº 171/82, de 10 de Maio, essa mesma exigência do concurso está expressamente confirmada no nº 2 do seu artº 3º.

Relator: Exmº Sr. Cons.
António Rodrigues Lufinha

Autos de Reclamação
nº 4/82
Sessão de 6/10/82

1. O Subsecretário de Estado do Orçamento, pelo seu ofí -
cio nº 2 649, Procº 06, de 28 de Julho de 1982, solicitou nos
termos dos artºs 1º e 2º da Lei nº 8/82, de 26 de Maio, a rea -
preciação da Resolução deste Tribunal, de 6 de Maio anterior que
recusou o Visto aos diplomas de provimento que, com fundamento
nos artºs 66º nº 1 e 85º do Decreto-Lei nº 513/80, de 28 de Ou -
tubro, bem como no artº 12º do Decreto-Lei nº 191-C/79, de 25
de Junho e ainda nos artºs 3º nºs 2 e 3 e 15º nº 1 do Decreto -
-Lei nº 146-C/80, de 22 de Maio, nomeavam provisoriamente Manuel
Domingos Pires, Maria da Piedade Dias, Maria Manuela Carvalho
Fernandes Coelho e Paula Catarina Mendes Rosa para os cargos de
escriturário-dactilógrafo de 2ª classe do Instituto Geográfico

e Cadastral, do Ministério das Finanças e do Plano. Diplomas esses que fazem parte dos processos nºs 5 151, 5 153, 5 155 e 5 156, respectivamente, todos de 1982.

2. Do referido pedido de reapreciação constam as razões de facto e de direito que fundamentam a respectiva reclamação a apresentada em tempo oportuno e por quem para tanto tinha legitimidade para o fazer; pelo que foi proferido o competente despacho a admiti-la e a ordenar vista dos autos nos precisos termos fixados no nº 1 do artº 5º da citada Lei nº 8/82.

3. O Digno Magistrado do Ministério Público junto deste Tribunal emitiu parecer no sentido de se lhe afigurar que o pedido de reapreciação deve ser julgado procedente e, consequentemente, revogada a mencionada Resolução, concedendo-se o visto aos referidos diplomas de provimento, por entender que resulta da documentação junta, a qual não constava dos processos aquando da recusa do visto, terem sido efectuadas provas de selecção exigidas de forma genérica para o ingresso nas carreiras estruturadas pelo Decreto-Lei nº 191-C/79, entre as quais se conta a de escriturário-dactilógrafo, como se dispõe na alínea a) do nº 1 do artº 2º daquele diploma legal.

4. Corridos os vistos legais cumpre apreciar e decidir.

A reclamação apresentada fundamenta-se, resumidamente nas seguintes razões:

A - de facto

a)- terem sido realizadas provas práticas de dactilo - grafia como forma de comprovação das habilitações e selecção dos candidatos, "as quais constavam de ditado de um texto que os candidatos manuscreveram e depois dactilografaram, da dacti-lografia de um quadro a partir do manuscrito, de cópias dactilo grafadas de textos em francês e inglês e redacção de um texto", tudo comprovado pela documentação junta;

b)- e no que respeita à interessada Maria Manuela Carvalho Fernandes Coelho, já ser titular da categoria de escriturário-dactilógrafo de 2ª classe no quadro a que pertencia ao tempo da abertura do concurso conforme se comprova documentalmente;

B)- de direito

a) o disposto no artº 28º do Decreto-Lei nº 49 410, de 24 de Novembro de 1969, dever considerar-se tacitamente revogado pelo disposto no artº 12º do Decreto-Lei nº 191-C/79 uma vez que este último diploma legal "redefinindo os princípios gerais a que deve obedecer a estruturação de carreiras da Administração Pública, substituiu as anteriores regras que, para cada carreira, eram definidas no Decreto-Lei nº 49 410";

b)- ter resultado daquela revogação tácita passarem a ser condição de ingresso na carreira de escriturário-dactilógrafo apenas a habilitação mínima da escolaridade obrigatória e a prática comprovada da dactilografia como se dispõe no nº 2 do artº 12º do citado Decreto-Lei nº 191-C/79 e não já a de o recrutamento para o ingresso nessa carreira se fazer pela realização de concurso de prestação de provas como se dispunha no nº 2 do artº 28º do também já citado Decreto-Lei nº 49 410.

5. A Resolução do Tribunal que se pretende seja revogada assenta fundamentalmente na consideração de que o artº 28º nº 2 do Decreto-Lei nº 49 410 se encontra em vigor e é aplicável ao ingresso na carreira de escriturário-dactilógrafo.

6. Daqui resulta que a decisão do problema posto pela Reclamação em apreço dependa essencialmente de apurar se o nº 2 do artº 28º do Decreto-Lei nº 49 410 foi ou não revogado pelo artº 12º do Decreto-Lei nº 191-C/79.

Não havendo uma declaração expressa a determinar tal revogação, esta só poderia resultar da verificação de qualquer das duas circunstâncias a que o artº 7º nº 2 do Código Civil a-

tribui efeito revogatório tácito, isto é, haver incompatibilidade entre o artº 28º nº 2 do Decreto-Lei nº 49 410 e o artº. 12º do Decreto-Lei nº 191-C/79 ou ter este último preceito regulado toda a matéria contida no referido artº 28º nº 2.

Ora, em primeiro lugar, não existe tal incompatibilidade, sendo, antes, perfeitamente conciliáveis estes dois preceitos, pois enquanto o artº 28º nº 2 dispõe que o recrutamento se efectuará "mediante concurso de prestação de provas, entre indivíduos com habilitação correspondente à escolaridade obrigatória" o artº 12º nº 2 estabelece que "o ingresso é condicionado à habilitação mínima da escolaridade obrigatória e prática comprovada de dactilografia". Não se vê que exista aqui a mencionada incompatibilidade a que o Código Civil confere poder de revogação tácita.

E, em segundo lugar, a nova lei (artº 12º) também não regula toda a matéria contida na lei anterior (artº 28º). A lei anterior regula dois pontos bem definidos como requisitos de ingresso: realização prévia de concurso de prestação de provas e que os concorrentes detenham determinada habilitação escolar. A nova lei limita-se a regular o segundo destes dois pontos e a exigir prática comprovada de dactilografia, silenciando o meio de prova exigível. No entanto a razão de ser deste silêncio encontra-se no artº 2º nº 1 do mesmo Decreto-Lei nº 191-C/79, onde se estabelece que "o ingresso efectuar-se-á mediante provas de selecção na categoria mais baixa de cada carreira, observados os requisitos habilitacionais previstos no presente diploma". E, acrescentando o artº 3º imediato "os princípios gerais que informarão as provas e métodos de selecção serão estabelecidos em decreto-regulamentar", porque este decreto-regulamentar ainda não foi publicado, veio o Decreto-Lei nº 377/79, de 13 de Setembro, no seu artº 8º, esclarecer que até à publicação de tal decreto regulamentar "manter-se-ão em vigor os critérios fixados na legislação aplicável aos diferentes serviços e organismos da Administração Pública sobre matéria de recrutamento e

selecção". A legislação aqui referida aplicável ao caso da Resolução sujeita a reapreciação é precisamente o artº 23º nº. 2 do Decreto-Lei nº 49 410. Logo não se encontra revogado.

Daí ter-se firmado a jurisprudência uniforme e constante do Tribunal invocada na referida Resolução no sentido de que o ingresso na carreira de escriturário-dactilógrafo está condicionado à aprovação em concurso de provas a que se refere o nº. 2 do artº 23º do Decreto-Lei nº 49 410, Jurisprudência esta que veio, recentemente, a obter plena confirmação legislativa ao instituir-se o sistema de concurso como forma de provimento em lugares da função pública, com excepção dos cargos de direcção, como resulta dos artºs 3º, 8º, 16º e 18º do Decreto-Lei nº 171/82 de 10 de Maio, indicando-se, de entre os princípios gerais a que tais concursos deverão obedecer, as provas de selecção.

Aliás, é o próprio Director-Geral do Instituto Geográfico e Cadastral que reconhece ser o concurso de prestação de provas o adequado quando, na informação de 9 de Novembro de 1981 junta aos autos, propõe e obtem despacho concordante do dia 16 imediato do membro do Governo que subscreve a presente redacção autorizando, juntamente com a homologação do resultado do concurso documental efectuado, que seja aberto "novo concurso de prestação de provas para escriturário-dactilógrafo de 2ª classe". E o certo é que se encontrava em vigor igual legislação tanto nessa data como na altura do despacho de 22 de Junho anterior em que o mesmo membro do Governo autorizou a abertura do concurso documental que precedeu os diplomas de provimento em causa na Resolução agora reclamada, como se vê do aviso publicado no Diário da República, II Série, nº 170, de 27 de Julho seguinte.

Concurso de prestação de provas e concurso documental são realidades bem diferenciadas. Cada um tem o seu condicionamento próprio para ser observado fielmente, não sendo legítimo fazer a abertura de uma daquelas modalidades de concurso e seguidamente adoptar arbitrariamente o condicionalismo da outra. Se

a lei permitisse a realização do concurso documental, conforme foi aberto no caso em apreço, era porque pretendia que a selecção dos concorrentes fosse feita com base tão somente em prova documental. Por isso procedimento diferente, nomeadamente, realizando provas não previstas no concurso documental implicará, primeiro, violação da lei e, depois, prejuízo das legítimas expectativas dos concorrentes, além do mais na medida em que tal alteração dos processos de selecção poderá, eventualmente, desvirtuar os resultados finais desse concurso.

7. Pelos fundamentos expostos, tendo a Resolução reclama da feito rigorosa interpretação e aplicação da legislação em vigor, o Tribunal de Contas, em sessão de 30 de Julho de 1982, julgou improcedente a reclamação apresentada, confirmando a Resolução de 6 de Maio anterior que recusou o "Visto", aos aludidos diplomas de provimento que nomeavam provisoriamente Manuel Domingos Pires, Maria da Piedade Dias, Maria Manuela Carvalho Fernandes Coelho e Paula Catarino Mendes Rosa para os lugares de escriturário-dactilógrafo de 2ª classe do Instituto Geográfico e Cadastral, do Ministério das Finanças e do Plano.

Não são devidos emolumentos.

Devolva-se a documentação que não pertence ao arquivo do Tribunal.

Lisboa, 6 de Outubro de 1982

(aa) - João de Deus Pinheiro Farinha
- António Rodrigues Lufinha (relator)
- Orlando Soares Gomes da Costa
- Luís de Almeida
- José Castelo Branco
- Mário Valente Leal (vencido pelas razões aduzidas no projecto de acórdão que apresentei e que são em síntese:

A Resolução reclamada fundamentou-se, no essencial, na

consideração de que o requisito ou condição da "prática comprovada de dactilografia", exigida no nº 2 do artº 12º do Decreto-Lei nº 191-C/79, de 25 de Junho, se processa "mediante concurso de prestação de provas", conforme se dispunha no nº2 do artº 28º do Decreto-Lei nº 49 410, de 24 de Novembro de 1969, o que não foi cumprido por apenas ter sido realizado um concurso documental, não satisfazendo por isso aquela exigência legal.

Daí resultou que o ponto fulcral a resolver é o de saber se o disposto naquele citado artº 28º do Decreto-Lei 49410 se deve ou não considerar como tacitamente revogado pelo disposto no também já citado artº 1º e seus números do Decreto-Lei nº 191-C/79.

A revogação tácita de uma lei resulta ou da incompatibilidade entre as novas disposições e as regras precedentes ou da circunstância de a nova lei regular toda a matéria da lei anterior, como se dispõe no nº 2 do artº 7º do Código Civil.

Sabido que a carreira de escriturário-dactilógrafo é horizontal como resulta quer do disposto no artº 12º quer no nº 4 do artº 19º ambos do citado Decreto-Lei nº 191-C/79, ficando-se naquele primeiro preceito legal as condições ou requisitos exigíveis para o respectivo ingresso nela e para a respectiva mudança de categoria (acesso na mesma carreira), é de todo evidente o haver-se regulado na nova lei toda a matéria que era tratada nos nºs 1 e 2 do artº 28º do Decreto-Lei nº. 49 410.

Por outro lado, acusa ainda a circunstância de existir manifesta incompatibilidade entre aquelas mencionadas disposições legais, designadamente no que respeita às condições ou requisitos exigíveis para o acesso na dita carreira, isto é, o disposto no nº 1 daquele citado artº 28º não é adaptável a uma carreira horizontal, dado que nesta a mudança de categoria se opera através e apenas pela verificação do decurso de um cer

to módulo temporal exigido pela lei e de uma classificação de serviço não inferior a Bom e nunca por um concurso de prestação de provas.

Assim, em corolário lógico e necessário do que se dei xa referido, haverá que concluir não ser legalmente possível e correcto aplicar o disposto nos nºs 1 e 2 do artº 28º do Decreto-Lei nº 49 410 a uma carreira horizontal, espécie não existente no direito administrativo português à data da promulgação e publicação daquele mencionado diploma legal, não sendo por isso legal a sua como que repristinação através da aplicação do disposto no artº 8º do Decreto-Lei nº 377/79 de 13 de Setembro.

Por estes fundamentos votei no sentido de se julgar procedente a presente reclamação).

- Pedro Amaral (vencido pelas razões aduzidas no douto voto de vencido que antecede).

- Antero Alves Monteiro Dinis (vencido pelas razões expostas no voto do Exmº Conselheiro Mário Leal).

Fui presente

(a) - João Manuel Neto

RECLAMAÇÃO CONTRA A FIXAÇÃO EMOLUMENTAR

Sumário

1. As receitas correntes na sua definição generalizada, têm de haver-se por próprias para efeitos de cálculo emolumentar, como resulta da evolução legislativa das normas que disciplinam esta matéria e da contraposição do artº 1º da Tabela anexa ao Decreto-Lei nº 356/73, de 14 de Julho, ao artº 1º da Tabela nº 2, anexa ao Decreto nº 22 257, de 25 de Fevereiro de 1933, pois que enquanto o texto de 1933 se reportava a receita cobrada, o diploma legal de 1973, alude a receita própria resultante de participação.

2. Os "juros de moratória" e os "juros de empréstimo" recebidos pelo Fundo de Renovação da Marinha Mercante, tendo em atenção a sua própria orgânica definida no Decreto-Lei nº 58/74, de 16 de Fevereiro assumem a natureza de receitas de participação independentemente do destino que lhes venha a ser atribuído, contando assim para efeitos de fixação do "quantum" emolumentar.

Relator: Exmº Sr. Cons.
Antero Monteiro Dinis

Proc. nº 1 178/80
Sessão de 16/11/82

Por acórdão de 20 de Julho de 1982, tirado no processo nº 1 178/80, foi julgada por este Tribunal de Contas a gerência da Comissão Administrativa do Fundo de Renovação da Marinha Mercante respeitante ao ano de 1980, tendo sido fixados como emolumentos devidos nos termos do artº 18º do Decreto-Lei nº 667/76, de 5 de Agosto, a quantia de 20 022\$00.

Notificado o acórdão respectivo e recebidas as guias para pagamento dos emolumentos correspondentes, veio a Comis -

são Administrativa através do ofício-reclamação de fls. 51 solicitar a rectificação do cálculo emolumentar, aduzindo em abono da sua posição as razões e argumentos seguintes:

a) O Tribunal de Contas para cálculo dos emolumentos controvertidos utilizou o montante de "Receitas Correntes" (2 002 173\$70) inscrito a débito da conta de gerência;

b) Todavia naquele montante incluiu-se a verba "juros-ou tros sectores" no valor de 986 918\$40, que não constitue receita própria do Fundo;

c) Com efeito esta verba é composta de "juros de moratória" e "juros de empréstimos" que o Fundo recebe dos armadores para posterior entrega ao Tesouro e à Caixa Geral de Depósitos, e embora inscritos em "Receitas Correntes", não são mais do que a contrapartida de uma responsabilidade do Fundo, dado o papel de mero intermediário que desempenha nas respectivas operações;

d) Assim aqueles "juros de moratória" e "juros de emoréstimo" constituem em realidade uma fonte de receita para as en - tidades que aplicaram os seus capitais (Tesouro e Caixa Geral de Depósitos) e, nessa medida, têm a classificação orçamental de "Receitas Correntes" classificação de acordo com as instru - ções da Direcção-Geral da Contabilidade Pública;

e) Em reforço desta posição destaca-se que os quantitativos correspondentes a "juros de moratória" e "juros de empréstimos" quando recebidos dos armadores são integralmente canaliza - dos para os credores do Fundo não lhe cabendo qualquer aplica - ção daqueles dinheiros em outras aplicações;

f) Assim, conclue-se, no sentido de a matéria colectável que serviu de base ao cálculo do emolumento dever ser deduzida do montante de 986 918\$40 passando a ser apenas de 1 015 255\$30 e não de 2 002 173\$70.

Determinou-se a audição da Contadoria respectiva que produziu a informação de fls. 61 e juntou os documentos de fls. 62 a 74, mantendo-se o rigor e a correcção com que os emolumentos em causa foram calculados.

Idêntica posição foi assumida pelo Exmº Magistrado do Ministério Público no seu douto parecer de fls. 75.

Corridos os vistos legais cabe decidir.

Decidindo:

Aquando do julgamento da conta nº 1 370/76, respeitante à gerência da Comissão Administrativa do Fundo de Renovação da Marinha Mercante, de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 1976 foi impugnado o cálculo dos emolumentos devidos com base em argumentação similar à agora produzida.

Por acórdão de 17 de Abril de 1979, junto de fls. 62 a 66, o Tribunal indeferiu a reclamação apresentada confirmando o montante emolumentar estabelecido.

Talqualmente então sucedeu, aliás na esteira de uma bem elaborada informação da Contadoria Geral (fls. 71 a 74), também agora se salienta que as "receitas correntes" na sua definição generalizada, têm de haver-se por próprias para efeitos do cálculo emolumentar.

Aliás, este entendimento, resulta da própria evolução legislativa sobre a matéria, pois que o artº 1º da tabela anexa ao Decreto-Lei nº 356/73, de 14 de Julho, por contraposição ao artº 1º da Tabela nº 2, anexa ao Decreto nº 22 257, de 25 de Fevereiro de 1933, não pode deixar de assim ser interpretada quando se tem presente que a liquidação dos emolumentos agora é feita sobre o valor da receita própria ou resultante de participação. (O sublinhado é nosso)

Enquanto no preceito de 1933 se falava em receita co -

brada - e daí a ideia existente em determinados sectores de que só deveriam ser considerados para fins emolumentares, as receitas cobradas directamente e dispendidas em prol do serviço - no texto de 1973, alude-se expressamente a receitas resultantes de participação, no âmbito das quais cabem aquelas que a reclamante intenta afastar da matéria colectável.

Que assim é ou deve ser resulta da própria orgânica do Fundo e das atribuições e competências que a lei lhe confere (Decreto-Lei nº 58/74, de 16 de Fevereiro), das quais resulta que os chamados "juros de moratória" e "juros de empréstimos" não podem deixar de se considerar receitas por participação, pese embora o destino que depois lhes venha a ser dado.

Do que acaba de dizer-se, aliás na esteira da jurisprudência fixada com o citado acórdão de 17 de Abril de 1979, desatendem a reclamação formulada pela Comissão Administrativa do Fundo de Renovação da Marinha Mercante contra o cálculo dos emolumentos estabelecido no processo nº 1 178/80, que assim por inteiro se mantém.

Emolumentos devidos - - - - 600\$00

Lisboa, 16 de Novembro de 1982

(aa) - Antero Alves Monteiro Dinis
 - António Rodrigues Lufinha
 - Orlando Soares Gomes da Costa

Fui presente

(a) - João Manuel Neto

AUTOS DE RECLAMAÇÃO

(Lei nº 8/82 de 26 de Maio)

PRIMEIROS PROVIMENTOS

Sumário:

O Decreto-Lei nº 59/80, de 3 de Abril, contém uma Série ordenada, sistemática e seguida de normas e regras de primeiro provimento por integração em quadros de todo o pessoal mencionado no seu artigo 23º. A partir desta disposição, vêm contempladas normas de carácter transitório, como são os artigos 24º a 29º do mesmo diploma legal, passando, portanto, pelo artigo 26º.

A ressalva do artigo 4º do Decreto-Lei nº 410/80, de 27 de Setembro, só se dirige às regras de primeiro provimento e de transição, represtinando-as.

Relator: Exmo. Sr. Consº
Orlando Gomes da Costa

Autos de Reclamação
nº 17/82
Sessão de 7/12/82

1 - O Ministro da Cultura e Coordenação Científica, pelo seu ofício nº 4 985, de 16 de Agosto do corrente ano, veio solicitar, nos termos dos artigos 1º e 2º da Lei nº 8/82, de 26 de Maio, a reapreciação dos actos administrativos que nomearam provisoriamente Maria Antónia Correia Ribeiro Fiadeiro e Ana Maria Madeley de Portugal Pessanha de Oliveira, respectivamente, técnico superior de 2ª classe e técnico de 2ª classe da Direcção-Geral dos Serviços Centrais da Secretaria de Estado da Cultura, provimentos a que o Tribunal de Contas recusou o "Visto" por Resolução de 17 de Novembro de 1981 (processo nº 85 196/81).

2 - Apresentada em tempo e deduzida pelo membro do Governo competente, em rigorosa observância dos preceitos legais, foi admitida a mencionada Reclamação.

3 - No seu parecer, o Digno Magistrado do Ministério Público expressa-se no sentido de que o pedido de reapreciação deve ser julgado improcedente porque nele "não se aduzem razões fácticas que alterem o condicionalismo em que foi tomada a resolução reclamada, nem a fundamentação jurídica invocada invalida os doutos considerandos de tal resolução".

4 - Corridos os vistos legais, cumpre apreciar e decidir.

5 - Não sofrendo contestação, a matéria factual sobre que assentou a Resolução reclamada, o fundamento do pedido da sua reapreciação baseia-se essencialmente não tanto na interpretação do artº 26º do Decreto-Lei nº 59/80, de 3 de Abril, como em especial no seu alcance e aplicação que o Reclamante considera como contendo não uma regra de primeiro provimento "mas, sim, uma regra de excepção da aplicação permanente no âmbito dos orgãos e Serviços deste Ministério".

6 - Como bem diz o Exmº Magistrado do Ministério Público, o pedido de reapreciação não menciona resposta concreta a contrariar qualquer dos fundamentos sobre que assentou a Resolução reclamada. Na realidade, os provimentos em causa invocaram, como lei permissiva, o artº 26º do Decreto-Lei nº 59/80, de 3 de Abril e o artº 48º do Decreto Regulamentar nº 19/80, de 26 de Maio.

Ora a Resolução, no seu primeiro e fundamental "considerando", depois de aludir ao conteúdo daqueles preceitos legais, conclui que nos textos dos diplomas de provimento "se não cita qualquer disposição legal que regule e permita os provimentos em apreciação". E tem razão. Estes provimentos não se fundamentam em normas jurídica que os autorize, como se exige na alínea a) do artº 3º do Decreto nº 26 341, de 7 de Fevreiro de 1936.

A primeira das disposições citadas reporta-se à possibilidade de os provimentos na carreira técnica superior serem sem habilitações adequadas e a segunda dessas mesmas disposições alude à forma que deverão revestir os provimentos-nomeação provisória-.

Faltava, assim, a indicação, aliás indispensável, de uma disposição legal de natureza substantiva adequada que tornasse viáveis os provimentos em causa, como seriam, por exemplo, o artº 24º do Decreto-Lei nº 59/80, os artºs 8º e 9º do Decreto-Lei nº 410/80, de 27 de Setembro ou os artºs 50º a 55º do Decreto-Regulamentar nº 19/80 consoante a situação jurídico-funcional dos interessados, se as mesmas, ou parte delas, fossem as disposições próprias e adequadas a essa situação.

Convidados a suprir tal lacuna, os Serviços expraiaram-se em considerações conducentes à demonstração de que o artº 26º do Decreto-Lei nº 59/80 estava correctamente citada, desviando desse modo, o âmbito do problema com que foram afrontados. É é nessa mesma linha que vem fundamentado o pedido de reapreciação, defendendo-se a opinião, que não é a perfilhada por este Tribunal, de que a citada disposição contém uma regra de excepção de aplicação permanente.

Pesem, embora, os argumentos aduzidos na defesa dessa tese, esta não tem apoio expresso na lei.

O Decreto-Lei nº 59/80 contém uma série ordenada, sistemática e seguida de normas e regras de primeiro provimento por integração em quadros de todo o pessoal mencionado no seu artº 23º. A partir desta disposição, vêm contempladas normas de carácter transitório para integração nos quadros respectivos, como são os artºs 24º a 29º do mesmo diploma legal, passando, portanto, pelo artº 26º.

Na realidade, não se pode desinserir esta disposição legal daquele corpo de normas do qual faz parte. Trata-se de um

conjunto sistemático de regras de primeiro provimento. Só assim se compreendem as regras posteriormente fixadas no nº 1 do artº 53º e nº 1 do artº 55º do Decreto-Regulamentar nº 19/80. Estas regras é que são nitidamente de aplicação permanente. Designadamente é elucidativa, na confirmação da jurisprudência seguida pelo Tribunal, a norma do nº 2 da primeira das disposições citadas, em relação aos domínios das artes plásticas, áudio-visuais e outras actividades da Direcção-Geral da Acção Cultural. Nesses domínios, sim, é que poderão ser admitidos indivíduos habilitados com licenciatura e com curriculum adequado à respectiva área funcional, sem prejuízo do disposto no artº. 26º do Decreto-Lei nº 59/80.

Seria óbvia a desnecessidade desta ressalva se o artº 26º contivesse uma norma de aplicação permanente.... A situação pareceria clara!

Mas como os diplomas legais sobre reestruturação de serviços e carreiras públicas eram constantes e nem sempre harmonizáveis entre si, surge o Decreto-Lei nº 410/80, de 27 de Setembro, que no seu artº 4º contém a regra confirmativa dos preceitos já citados dos artºs 53º e 55º do Decreto-Regulamentar nº 19/80 no sentido de que

" O ingresso e progressão relativos às carreiras de pessoal técnico superior, pessoal técnico, pessoal técnico-profissional e administrativo e pessoal operário e auxiliar far-se-ão de harmonia com o disposto no Decreto-Lei nº. 191C/79, de 25 de Junho, sem prejuízo prejuízo do disposto no Decreto-Lei nº. 59/80, de 3 de Abril".

Disse-se na resolução tomada em sessão de 24 de Outubro de 1981 não ser viável, no plano legal, a aplicação simultânea e cumulativa ou mesmo sucessiva das regras de transição para as categorias mencionadas no artº 8º e seguintes daquele Decreto-Lei nº 410/80 com as do primeiro provimento estabeleci

das no artº 24º e seguintes do Decreto-Lei nº 59/80 que aquele primeiro diploma repristinou, mas só em relação às categorias nele não abrangidas.

Por outro lado, contendo este último diploma somente normas de transição e de primeiro provimento, como já se salientou e não normas de aplicação permanente e constante, a ressalva estabelecida no artº 4º do Decreto-Lei nº 410/80 não pode deixar de se interpretar no sentido dela se dirigir às regras de transição e primeiro provimento, repristinando aquelas normas e apenas aquelas normas, pelo que se mantém de pé e em vigor os preceitos do Decreto-Regulamentar nº 119/80 por conterem as regras de aplicação permanente reguladoras dos provimentos nos lugares dos quadros dos mapas que lhe são anexos.

A repristinação era necessária e justificável se se tiver presente que os Decretos-Lei nºs 180/80, de 3 de Junho e 288/80, de 16 de Agosto, fixavam um limite temporal de aplicação das regras de primeiro provimento aos servidores da Administração Central - 31 de Dezembro de 1980 -, havendo porém serviços e organismos que não tinham movimentado a tempo os seus quadros. e, dentre eles estavam os das então Secretarias de Estado das Comunicação Social e Cultura. Os processos de provimentos de integração nos quadros começaram a dar entrada na parte final do ano de 1980 e a grande maioria foi apresentada durante o ano de 1981. Só a repristinação salvou estas situações, afastando delas o limite temporal fixado nos diplomas legais acima citados. Mas a repristinação só se dirigia às regras de transição do Decreto-Lei nº 59/80.

7 - Do mesmo modo, o pedido de reapreciação não contém matéria de facto ou de direito susceptível de pôr em causa os demais fundamentos em que se baseou a Resolução reclamada.

Já se viu que, a considerarem-se provimentos normais aqueles que estão em apreciação, não podem os mesmos beneficiar da aplicação da norma do artº 26º do Decreto-Lei nº 59/80, que é uma regra de simples transição. Nesse caso, as disposições e eventualmente a aplicar seriam as dos artºs 53º e 55º do Decreto Regulamentar nº 19/80. Mas essas conduzem à inviabilidade dos provimento por não possuírem as habilitações próprias, as referidas interessadas.

Se se tomassem como primeiros provimentos ser-lhes-iam aplicáveis as regras de transição. Destas no entanto não podem socorrer-se os servidores da função pública que já tenham beneficiado "da aplicação de regras de primeiro provimento" nos termos do nº 3 do artº 1º do Decreto-Lei nº 180/80.

Nesta situação se encontram as interessadas Maria Antónia e Ana Maria.

Daí o embaraço compreensível na resposta dos Serviços à solicitação do Tribunal.

Diz a Resolução quanto à primeira interessada, que esta, pelo processo nº 99 427/80 visado em 13 de Maio de 1981 e arquivado neste Tribunal, foi provida na categoria de técnico de 2ª classe, com base na alínea b) do artº 23º, nº 1 alínea c) do artº 24º, ambos do Decreto-Lei nº 59/80, e nº 1 do artº 48º. e artº 67º do Decreto-Regulamentar nº 19/80 e, quanto à segunda interessada, pelo processo nº 75 054/80, visado em 19 de Novembro de 1980 e também arquivado neste Tribunal, foi provida na categoria de 1º oficial, com base nos mesmos preceitos, excepto a alínea do artº 24º do Decreto-Lei nº 59/80, que é agora a alínea d).

Como se vê, qualquer das interessadas já beneficiou das regras de primeiro provimento, não se aceitando a afirmação de que os lugares agora a prover são de primeiro provimen-

to porque nunca foram preenchidos. Mas o que importa para o caso é se as referidas interessadas já beneficiaram das regras de transição. Se sim, essas regras são para elas simultaneamente regras de transição e de primeiro provimento. Este não se equaciona em relação a lugares mas sim a pessoas, a funcionários e agentes. Para eles é que se põe o problema de saber se se trata de regras de transição e de primeiro provimento ou de provimento normal.

8 - Dir-se-á, portanto, que os fundamentos legais em que se baseou a Resolução reclamada se mantêm inalteráveis.

Pelos fundamentos expostos, acórdam os juizes do Tribunal de Contas em julgar improcedente a Reclamação apresentada, confirmando, assim, a Resolução de 17 de Novembro de 1981 que recusou o "Visto" aos diplomas de provimento que nomeiam provisoriamente Maria Antónia Correia Ribeiro Fiadeiro e Ana Maria Madley de Portugal Pessanha de Oliveira, respectivamente, técnico superior de 2ª classe e técnico de 2ª classe da Direcção-Geral dos Serviços Centrais da Secretaria de Estado da Cultura. Só por manifesto lapso se escreveu na Resolução "técnico superior de 1ª classe" quando queria dizer-se "técnico superior de 2ª classe".

Não são devidos emolumentos.

Devolva-se a documentação que não pertença ao arquivo deste Tribunal.

Lisboa, 7 de Dezembro de 1982.

- (aa) - João de Deus Pinheiro Farinha
- Orlando Soares Gomes da Costa, relator
- José Castelo Branco
- Mário Valente Leal, com a declaração de não aceitar como correcta a fundamentação de o disposto no artº 26º do Decreto-Lei nº 59/80 re -

vestir natureza transitória

- Pedro Amaral
- António Rodrigues Lufinha

Fui presente

(a) - João Manuel Neto

AUTOS DE RECLAMAÇÃO

(Lei nº 8/82, de 26 de Maio)

CARREIRA TÉCNICA SUPERIOR

Sumário:

A transição para a carreira técnica superior tem de fazer-se com rigoroso cumprimento das formalidades prescritas nos arts 4º e 5º do Decreto-Lei nº 377/79.

Com a criação da referida carreira pelo Decreto-Lei nº 191-C/79, de 25 de Junho, surgiram duas situações: a do ingresso normal, só para os licenciados e a de transição para estes e para os diplomados com curso superior adequado e com determinado nível remuneratório.

Relator: - Exmº Cons.
Orlando Soares Gomes da Costa

Autos de Reclamação
nº 47/82
Sessão de 7/12/82

1 - O Ministro dos Assuntos Sociais, por ofício nº 17 523, de 19 de Agosto de 1982, veio solicitar ao abrigo do disposto nos arts 1º e 2º da Lei nº 8/82, de 26 de Maio, a reapreciação do acto administrativo que proveu Gilberta Maria Tomé Alambre como técnico superior de 2ª classe do quadro da Direcção-Geral da Organização e Recursos Humanos, provimento esse a que o Tribunal de Contas recusou a concessão do "Visto" por Resolução de 28 de Julho de 1981, tirada no processo nº 8 484/81.

2 - Apresentada em tempo e deduzida pelo membro do Governo competente, em rigorosa observância dos preceitos legais, foi admitida a mencionada Reclamação.

3 - No seu parecer, o Digno Magistrado do Ministério Público sustenta, pelas razões nele explanadas, a opinião que é, aliás,

AUTOS DE RECLAMAÇÃO

(Lei nº 8/82, de 26 de Maio)

CARREIRA TÉCNICA SUPERIOR

Sumário:

A transição para a carreira técnica superior tem de fazer-se com rigoroso cumprimento das formalidades prescritas nos arts 4º e 5º do Decreto-Lei nº 377/79.

Com a criação da referida carreira pelo Decreto-Lei nº 191-C/79, de 25 de Junho, surgiram duas situações: a do ingresso normal, só para os licenciados e a de transição para estes e para os diplomados com curso superior adequado e com determinado nível remuneratório.

Relator: - Exmº Cons.
Orlando Soares Gomes da Costa

Autos de Reclamação
nº 47/82
Sessão de 7/12/82

1 - O Ministro dos Assuntos Sociais, por ofício nº 17 523, de 19 de Agosto de 1982, veio solicitar ao abrigo do disposto nos arts 1º e 2º da Lei nº 8/82, de 26 de Maio, a reapreciação do acto administrativo que proveu Gilberta Maria Tomé Alambre como técnico superior de 2ª classe do quadro da Direcção-Geral da Organização e Recursos Humanos, provimento esse a que o Tribunal de Contas recusou a concessão do "Visto" por Resolução de 28 de Julho de 1981, tirada no processo nº 8 484/81.

2 - Apresentada em tempo e deduzida pelo membro do Governo competente, em rigorosa observância dos preceitos legais, foi admitida a mencionada Reclamação.

3 - No seu parecer, o Digno Magistrado do Ministério Público sustenta, pelas razões nele explanadas, a opinião que é, aliás,

a da Procuradoria-Geral da República, já expressa em muitos pareceres, de que deve ser julgada procedente a Reclamação deduzida, revogando-se a Resolução reclamada e concedendo-se o respectivo "Visto", e isto pela interpretação dada ao artigo 25º do Decreto-Lei nº 191-C/79, de 25 de Junho.

4 - Corridos os vistos legais, cumpre apreciar e decidir

5 - A interessada possui o curso industrial e curso complementar incompleto do Liceu. Originada da Federação das Caixas de Previdência e Abono de Família, onde entrou como adjunto técnico de 2ª classe em 1 de Abril de 1976, passando a técnico de 2ª classe a partir de 15 de Julho do mesmo ano, por reclassificação feita ao abrigo dos artigos 7º e 26º da Portaria nº 38-A/78, tudo conforme consta da sua nota biográfica.

Já a merecer reparo que adiante se desenvolverá, esta termina por atribuir, como última categoria possuída pela interessada, a de técnico superior de 2ª classe desde 13 de Fevereiro de 1980, data agora rectificada por intervenção deste Tribunal, pois a inicialmente era a de 1 de Abril de 1976.

Pretende-se com base na atribuição à interessada desta categoria a sua nomeação para igual categoria no quadro da Direcção-Geral da Organização e Recursos Humanos.

6 - Emprestaria o Reclamante a sua total concordância ao entendimento e posição tomada pelo Tribunal "se se tratasse de ingresso na carreira do pessoal técnico superior, tal como refere o nº 4 do artigo 8º do citado Decreto-Lei nº 191-C/79"; "no entanto", continua o Reclamante, "no caso concreto está-se perante uma transição, na mesma categoria e carreira, do quadro da Federação das Caixas de Previdência e Abono de Família para o quadro da Direcção-Geral da Organização e Recursos Humanos, porquanto a interessada possui a categoria funcional de técnico superior de 2ª classe com antiguidade reportada a 1 de Abril de 1976, data da sua integração na carreira técnica. Com efeito, em 30 de Julho de 1979 estava provida na categoria de técnica de 2ª classe, sendo-lhe aplicável o disposto no nº 7º, alínea 1) da Portaria nº 38-A/80, de 12 de Fevereiro: - transição para técnica superior de 2ª classe".

Toda esta matéria de facto e de direito, que se transcreve, estava já no conhecimento do Tribunal quando este tirou a Resolução reclamada e foi apreciada e considerada na dita Resolução. Nada de novo, portanto, traz a Reclamação que se reconduz, no fundo, a uma tomada de posição, respeitável sem dúvida, mas que não obteve acolhimento por parte do Tribunal.

Esta posição parte do erro de que cabe sem mais aos próprios Serviços efectuar a transição para as carreiras e letras de vencimento a que se referem os Decretos-Lei nº 191-C/79 e 377/79 sem se mostrar que foi dado rigoroso cumprimento e observância às formalidades prescritas nos artigos 4º e 5º do último dos diplomas citados e em especial sujeitar a "Visto" deste Tribunal as listas de pessoal que transita para as categorias e carreiras previstas no seu mapa anexo. Não basta invocar-se uma simples Portaria que não se harmoniza com os referidos diplomas legais, de grau hierárquicamente superior, para se afirmar, sem apoio legal, que a interessada detem a categoria que os Serviços lhe atribuíram: a de técnico superior de 2ª classe.

No caso presente trata-se, no fundo, da transição de uma carreira e o ingresso noutra carreira da função pública. Simplesmente, para essa transição e ingresso na nova carreira, a lei exige determinados requisitos, incluindo os habilitacionais aludidos no nº 4 do artigo 8º do Decreto-Lei nº 191-C/79 e no mapa anexo ao Decreto-Lei nº 377/79. Portanto, a interessada detendo a categoria de técnico de 2ª classe, só poderia transitar e ingressar na carreira técnica superior se possuísse o grau académico da licenciatura ou um curso superior adequado e um determinado esquema remuneratório praticado na carreira técnica pré-existente ao Decreto-Lei nº 191-C/79, tendo como textos definidores este diploma e o Decreto-Lei nº 377/79. Pela interpretação conjugada destes diplomas legais é que o Tribunal de Contas vem entendendo, em contrário da doutrina dos Pareceres da Procuradoria-Geral da República, que a transição e consequente ingresso apenas são consentidos aos licenciados e aos possuidores de cursos superiores adequados e com determinado nível remuneratório.

7 - Não abona também a tese do Reclamante quando vai buscar o seu apoio ao artigo 25º do Decreto-Lei nº 191-C/79.

Na verdade, não vê o Tribunal argumentação jurídica suficientemente válida e impressiva que o leve a alterar a sua jurisprudência constante e uniforme, embora maioritária, no sentido de atribuir ao texto da referida disposição não a consagração de quaisquer direitos de acesso mas a simples salvaguarda de direitos já adquiridos e o respeito pela situação que a funcionária já detem, a qual não pode de forma alguma ser prejudicada.

Consequentemente, sendo a interessada técnica de 2ª classe e não mostrando possuir licenciatura ou qualquer curso superior adequado, não pode transitar para carreira técnica superior.

Pelos fundamentos expostos, acordam os juizes do Tribunal de Contas em julgar improcedente a Reclamação apresentada, confirmando-se, consequentemente, a Resolução da recusa de 28 de Julho de 1981 ao provimento da interessada Gilberta Maria Tomé Alambre como técnico superior de 2ª classe da Direcção-Geral da Organização e Recursos Humanos.

Não são devidos emolumentos.

Desapense-se e remeta-se a quem de direito a documentação que não pertença ao arquivo do Tribunal de Contas.

Lisboa, 7 de Dezembro de 1982

- (aa) - João de Deus Pinheiro Faninha
- Orlando Soares Gomes da Costa, relator
- José Castelo Branco
- Mário Valente Leal, vencido, pois votei a procedência da Reclamação por considerar válidas e correctas as razões de direito invocadas, nomeadamente as que resultam da conjugação do disposto nos artigos 8º, § - 2 e 25º ambos do Decreto-Lei nº 191-C/79, de 25 de Junho.
- Pedro Amaral

- António Rodrigues Lufinha (vencido pelo mesmo fundamento, do voto do Sr. Conselheiro Mário Leal

Fui presente

(a) - João Manuel Neto

AUTOS DE RECLAMAÇÃO

(Lei nº 8/82, de 26 de Maio)

IMPOSSIBILIDADE DE SE REQUERER A REAPRECIAÇÃO DE UM ACTO QUANDO A ADMINISTRAÇÃO HOUVER JÁ PROFERIDO OUTRO DESPACHO AUTORIZADOR.

Sumário:

Recusado o "Visto" a um despacho autorizador de um provimento, se a Administração proferir novo despacho autorizador do novo provimento relativo ao mesmo interessado, terá de concluir -se que a Administração reconheceu que o primeiro acto administrativo se apresentava ferido das ilegalidades apontadas na recusa do "Visto".

Consequentemente não pode a Administração requerer a reapreciação do acto administrativo primeiramente proferido.

Relator: Exmo.Sr. Cons.
José Castelo Branco

Autos de Reclamação
nº 35/82
Sessão de 14/12/82

O Ministro da Cultura e Coordenação Científica, pelo seu ofício nº 5033, de 18/8/1982, veio solicitar, nos termos do artigo 15º da Lei nº 8/82 de 26 de Maio, a reapreciação das Resoluções proferidas nos Processos de visto nºs. 59.041/80 e 29.845/81 que recusaram o "Visto" aos diplomas de provimento de António Luís da Costa Santos Lima respectivamente como técnico superior principal, além do quadro, de técnico superior de 1ª classe eventual do Instituto Português de Cinema.

O presente processo diz respeito tão somente ao pedido de reapreciação da Resolução proferida no processo nº 59 041/80 que dizia respeito ao provimento do interessado como técnico superior principal, pois que quanto à outra Resolução com referência ao

provimento do mesmo interessado no lugar de técnico superior de 1ª classe, o pedido de reapreciação é objecto dos Autos de Reclamação nº 36/82.

No officio em que se formaliza o pedido de reapreciação alegam-se as razões de facto e de direito em que a reclamação se fundamenta.

Admitida a reclamação foi dada vista ao Digno Procurador Geral Adjunto que no seu douto parecer de fls. afirma que não se apontam razões de facto ou de direito relevantes no sentido de revogação da resolução reclamada.

Corridos os vistos legais cumpre decidir.

O pedido de reapreciação apresenta-se com uma praticularidade que é ade se solicitar no mesmo officio a reapreciação de duas Resoluções, a proferida em 21 de Outubro de 1980 no processo nº 59 041/80, e a proferida em 20 de Outubro de 1981 no processo nº 29 845/81.

Ambas as Resoluções reportam-se ao provimento do mesmo interessado.

No rigoroso quadro legal podia concluir-se que o meio utilizado não respeita o disposto no artigo 1º. nº 1 da Lei nº 8/82, dado tratar-se do pedido de reapreciação de dois actos administrativos e não de um acto administrativo.

Dentro da posição assumida pelo Tribunal, do aproveitamento útil, sempre que possível, da actividade da Administração Pública, na defesa dos seus interesses gerais e abstractos, o Tribunal organizou dois processos e irá apreciar separadamente cada um dos dois actos administrativos.

A concretização do provimento do interessado António Luís da Costa Santos Lima, como técnico superior foi procurada pelo Instituto Português de Cinema por dois actos administrativos distintos e autónomos, com apoios legais diferentes e distanciados no tempo, e até para lugares diferentes na carreira de técnico superior.

Na verdade enquanto no processo em apreciação o despacho autorizador foi proferido em 26 de Junho de 1980 pelo Secretário de Estado da Cultura, e este despacho citava como lei permissiva do provimento o artigo 2º do Decreto-Lei nº 184/73 de 25 de Abril, e o lugar a prover era o de técnico superior principal, além do quadro, verifica-se que no processo nº 29 845, o despacho autorizador do provimento foi proferido em 4 de Março de 1981 pelos Senhores Secretários de Estado da Cultura e da Comunicação Social, invocando-se como leis permissivas do provimento a alínea c) do artigo 8º do Decreto-Lei nº 410/80 de 27 de Setembro, sendo o lugar a prover o de técnico superior de 1ª classe, eventual.

Assim teremos de concluir que a prática ou a execução do segundo acto administrativo por parte da Administração representa o reconhecimento, por parte dela, que o acto anterior se apresentava ferido das ilegalidades apontadas na recusa, e que inviabilizavam a concessão do "Visto".

O mesmo é dizer que a Administração ao praticar o segundo acto administrativo aceitou a Resolução proferida pelo Tribunal em que se apreciou o primeiro dos dois actos, não lhe sendo legalmente possível agora vir requerer a reapreciação desse acto administrativo.

A própria Administração já se havia conformado com as razões invocadas na Resolução, e o processo não se poderá reabrir com fundamento na Lei nº 8/82.

Sòmente o acto administrativo objecto dos autos de reclamação nº 36, poderá ser agora reapreciado.

Nestes termos e pelas razões expostas os juízes do Tribunal de Contas decidem não conhecer do pedido de reapreciação.

Não são devidos emolumentos.

Devolva-se a documentação que não pertença ao arquivo deste Tribunal.

Lisboa, 14 de Dezembro de 1982

(aa) - João de Deus Pinheiro Farinha

- José Castelo Branco

- Mário Valente Leal

- Pedro Amaral

- Antero Alves Monteiro Dinis (vencido pelas razões a seguir expostas:

Não se tem por exacta a conclusão alcançada no douto acórdão pois que, a circunstância de se haver praticado um segundo acto administrativo respeitante ao mesmo interessado não precluiu a possibilidade de a Administração intentar por via de recurso/reclamação a abtenção da condição de eficácia (visto deste Tribunal) indispensável à sua executoriedade. Tem-se por muito duvidosa a construção desenvolvida no aresto a propósito da interpretação da vontade da Administração (o segundo acto significaria, erga omnes, a aceitação da ilegalidade do primeiro), pois que, além do mais, esquece-se que na data em que o segundo acto foi constituído (4 de Março de 1981) se encontrava já tacitamente revogado o artº 26º do Decreto nº 22 257, de 25 de Fevereiro de 1933, por força do disposto no artº 20º do Decreto-Lei nº 146-C/80, de 22 de Maio, e ainda não existia a Lei nº 8/82, de 26 de Maio, razão pela qual a Administração não podia reagir contra as decisões deste Tribunal. Fê-lo logo que a lei o consentiu e por forma a manifestamente repor a apreciação do primeiro acto administrativo).

- António Rodrigues Lufinha (com a seguinte declaração: Votei o acórdão por além dos fundamentos dele constan - tes, entender ainda, que o segundo despacho tem implícito em si a revogação do despacho anterior, revogação essa possível e compreendida na competência da entidade que proferiu um e outro.)

- Orlando Soares Gomes da Costa

Fui presente

a) - João Manuel Neto

AUTOS DE RECLAMAÇÃO

(Lei nº 8/82, de 26 de Maio)

PEDIDO DE REAPRECIAÇÃO. REQUISITOS ESTABELECIDOS NOS
NºS 1 E 2 DO ARTº 2º DA LEI 8/82

Sumário:

No ofício em que se solicite a reapreciação do acto a
dministrativo a que foi recusado o "visto", ofício esse que te
rá de ser assinado pelo membro do Governo competente, terão de
constar expressamente as razões de facto ou de direito em que a
reclamação se fundamenta.

Consequentemente não serão de admitir pedidos de rea-
preciação nos quais e em referência às razões de facto ou de
direito o ofício de interposição remete para outros documentos
anexos ao processo ainda que o membro do Governo refira que os
aceita, que com eles concorda ou até que os homologa.

Relator: Exmº Sr. Cons.
José Castelo Branco

Autos de Reclamação
nº 9/82

Sessão de 4/1/983

Pelo ofício nº 4 499, de 14 de Julho de 1982, o chefe
de Gabinete do Senhor Ministro da Indústria, Energia e Exporta-
ção, vem, encarregado pelo Ministro, solicitar, nos termos da
Lei nº 8/82, de 26 de Maio, a reapreciação dos provimentos como

técnicos superiores dos técnicos da Direcção-Geral do Comércio Externo, Fernando Santos Fernandes, Francisco Figueira Salgueiro e José Soares de Albergaria Salazar Antunes, aos quais o Tribunal recusara o "Visto".

A este ofício foram juntos documentos.

A forma como o pedido de reapreciação foi apresentado, manifestamente, não dava cumprimento ao disposto nos artigos 1º e 2º da Lei nº 8/82.

Contudo a entidade competente foi convidada a apresentar o pedido de reapreciação de conformidade com o disposto na Lei nº 8/82.

Efectivamente o Senhor Ministro da Indústria e Exportação pelo ofício nº 0 511, de 12 de Agosto de 1982, por si subscrito, vem solicitar a reapreciação dos provimentos como técnicos superiores dos técnicos da Direcção-Geral do Comércio Externo, acima identificados.

Acrescentando que "o pedido fundamenta-se nas razões de facto e de direito constantes do requerimento do ofício e da informação nº 135/GORH/82 com os quais concorda e que foram enviados ao Tribunal de Contas com o ofício nº 04 499, de 14 de Julho de 1982, pelo chefe do Gabinete do Senhor Ministro da Indústria, Energia e Exportação."

Face ao decidido pelo Tribunal nos autos de Reclamação nº 3 o relator entendeu levantar a questão prévia de se decidir se a reclamação tal como foi apresentada - ofício 0 551 subscrito pelo Ministro - dá cumprimento ao nº 2 do artigo 2º da Lei nº 8/82.

Dada vista ao Digno Procurador-Geral Adjunto emitiu este parecer no sentido de que, na face do teor do despacho da admissão do pedido de reapreciação nº 13, e com vista à obtenção da desejável uniformidade de jurisprudência do Tribunal sobre o assunto, a presente reclamação deveria ser admitida.

Junta, por linha fotocópia do despacho de admissão referido na promoção, o processo correu os vistos legais.

Cumpre apreciar e decidir.

O pedido de reapreciação encontra-se formulado nos precisos termos atrás transcritos.

Nos termos do disposto do artº 4º da Lei nº 8/82, distribuída e autuada a reclamação o relator proferirá despacho admitindo-a ou indeferindo-a liminarmente.

Apesar da clareza da disposição entendeu-se levantar o problema da admissão ou indeferimento como questão prévia, porquanto se afigura que a jurisprudência do Tribunal quanto a este problema não se encontra perfeitamente definida.

Na verdade em sessão de 27 de Julho de 1982 ao apreciar os autos de reclamação nº 3 em que no ofício de interposição da reclamação o Secretário de Estado respectivo se limitava a referir que concordava com os fundamentos de um parecer anexo, houve votos de vencido por entenderem, esses juizes, que aquela remissão quanto aos fundamentos do pedido não se podia considerar como satisfazendo ao disposto no nº 2 do artº 2º da Lei nº 8/82.

Por outro lado em 11 de Outubro de 1982 nos autos de reclamação nº 18, o Pelator desses autos admitiu o pedido de reclamação embora afirmando "não pode considerar-se como dele (ofício) contendo uma reclamação elaborada em perfeita harmonia e observância com o disposto no nº 2 do artº 2º da Lei nº 8/82, de 26 de Maio, dado que nesse ofício não constam as razões de facto ou de direito em que a reclamação se fundamenta, mas tão somente com a referência feita na sua parte final em que o reclamante diz concordar com os fundamentos do "parecer" anexo que homologa".

Acrescentando, como razão da admissão do pedido de reapreciação, o argumento que "essas concordâncias e homologação representam como que ter o respectivo membro do Governo tomado como suas as razões de facto e de direito em que assenta o dito "parecer" que acompanha o mesmo ofício".

Do exposto verifica-se que estão assumidas posições divergentes quanto ao entendimento e clareza do nº 2 do artº. 2º da Lei nº 8/82.

Por um lado uma posição, que chamaremos de mais rígorista, entende que o próprio ofício assinado pelo membro do Governo competente tem necessariamente de conter as razões de facto ou de direito em que o pedido de reapreciação se fundamenta.

Uma outra posição entende que é suficiente que no ofício de interposição o membro do Governo refira que as razões de facto e direito estão expostas noutro documento que remete e que com elas concorda e ou homologa.

Como o despacho de admissão ou de indeferimento liminar, nos termos da lei, cabe ao Relator, atribue-se assim a este a possibilidade de por si só decidir matéria de importância capital como é o de admissão ou indeferimento.

Certo que este último ainda pode ser atacado por via de recurso (nº 2 do artº 4º da Lei nº 8/82), mas quanto à admissibilidade do pedido de reapreciação fica essa matéria decidida definitivamente sem qualquer possibilidade de a decisão vir a ser alterada.

Ora é esta circunstância e as posições já tomadas,

que conduzem directamente a soluções opostas, que levou o relator a suscitar a questão prévia.

O nº 2 do artº 2º da Lei nº 8/82 parece muito clara sua redacção, contendo requisitos muito precisos.

- A reclamação é feita por ofício.

- Deste ofício deve constar as razões de facto e de direito em que a reclamação se fundamenta.

- A reclamação tem de dar entrada na Direcção-Geral do Tribunal de Contas no prazo de 30 dias contados da data do ofício que comunicou a recusa.

Quanto ao primeiro dos requisitos o Tribunal de Contas tem entendido, sem qualquer divergência, que o ofício necessariamente tem de ser assinado pelo membro do Governo competente, isto pela conjugação do disposto no nº 2 do artº 2º com o disposto no nº 1 do artº 1º ambos da Lei nº 8/82.

E o Tribunal não tem aceite os pedidos de reapreciação solicitados por ofícios assinados por Directores-Gerais ou chefes de Gabinete, que referem fazê-lo por encargo ou determinação do membro do Governo, transcrevendo até por vezes despachos deste concebidos nestes termos ou semelhantes:

"Solicito a reapreciação".

"Envie-se ao Tribunal de Contas".

Quer dizer, quanto ao primeiro dos requisitos referidos no nº 2 do artº 2º da Lei nº 8/82, o Tribunal tem assumido a posição de entender necessário o cumprimento rigoroso do formalismo estabelecido na Lei nº 8/82, entendendo não ser suficiente a transmissão por outro meio, da vontade expressa por um membro do Governo, através do despacho, a solicitar a reapreciação.

Desta forma, até por razão de coerência, o Tribunal não poderá aceitar que no pedido de reapreciação não constem as razões de facto ou de direito em que a reapreciação se fundamenta e consequentemente não poderá admitir pedidos de reapreciação nos quais e em referência às razões de facto ou de direito o ofício de interposição remeta para outros documentos, anexos ao processo, apesar de o membro do Governo referir que os aceita, que com eles concorda, ou até que os homologa.

Só decidindo desta forma o Tribunal de Contas dará uma interpretação coerentemente uniforme ao nº 2 do artº 2º da Lei nº 8/82 e não rigorista quanto a um e muito ampla quanto a outro dos requisitos fixados naquele preceito.

Decidida neste sentido a questão prévia suscitada, deverá o relator proferir o despacho a que se refere o nº1 do artigo 4º da Lei nº 8/32, dentro da orientação firmada.

Nestes termos decide-se que no ofício em que se solicita a reapreciação do acto administrativo, ofício esse que terá ser assinado pelo membro do Governo competente. Terá de contar expressamente as razões de facto ou de direito em que a reclamação se fundamenta. Rasurei "terá".

Não são devidos emolumentos

Lisboa, 4 de Janeiro de 1983

(aa)- João de Deus Pinheiro Farinha

- José Castelo Branco
- António Rodrigues Lufinha
- Mário Valente Leal
- Orlando Gomes da Costa
- Pedro Amaral
- Antero Alves Monteiro Dinis (vencido pelas razões a se

guir aduzidas: o nº 2 do artº 2º da Lei nº 8/82, de 26 de Maio, exige que a reclamação seja feita por ofício donde constem as razões de facto e de direito em que a mesma se fundamenta não impondo que a reapreciação daquelas razões seja necessária e obrigatoriamente feita de modo directo e concreto no ofício de petição; Entenda-se, com efeito, que o ofício poderá remeter para um texto anexo (parecer, informação, proposta) recebendo o seu conteúdo que, por esta via, adquire a mesma natureza da petição. Pelo exposto entendi que a reclamação devia ser recebida e ordenado o cumprimento do disposto no nº 1 do artº 5º da lei nº 8/82).

Fui presente

(a) João Manuel Neto

AUTOS DE RECLAMAÇÃO

(Lei nº 8/82, de 26 de Maio)

OFICIAIS ADMINISTRATIVOS - INGRESSO NA CARREIRA

Sumário:

I - O Decreto-Lei nº 191-C/79, de 25 de Junho distinguiu, de entre o pessoal administrativo, as carreiras de "oficiais administrativos" e de "escriturários-dactilógrafos".

II - O ingresso na carreira de "oficiais administrativos" está actualmente condicionado à habilitação do curso geral do ensino secundário ou equiparado.

Relator: Exmo. Sr. Cons.
Pedro Amaral

Autos de Reclamação
nº 24/82
Sessão de 11/1/83

I - O Chefe de Gabinete do Secretário de Estado do Ensino Superior, em ofício datado de 17 de Agosto de 1982 e dirigido ao Director-Geral deste Tribunal remeteu o presente processo transcrevendo, no mesmo ofício, o seguinte despacho daquele membro do Governo:

"Envie-se ao Tribunal de Contas para reapreciação".

II - Como não estavam preenchidos os requisitos que os artigos 1º e 2º da Lei nº 8/82, de 26 de Maio, claramente exige para a admissão do pedido de reapreciação, foi aquele membro do Governo convidado a completar e corrigir o mesmo pedido o que veio a fazer pelo ofício nº 2 312, de 9 de Novembro, dentro do prazo que lhe foi concedido.

III - Admitida a reclamação foi dado cumprimento ao disposto no nº 1 do artigo 5º da citada Lei nº 8/82.

IV - Na sua promoção de fls. o Digno Representante do Ministério Público é de parecer que deve ser confirmada a Resolução reclamada uma vez que no pedido de reapreciação não se apontam razões de facto ou de direito relevantes no sentido da sua revogação.

V - Cumpre decidir.

Na Resolução reclamada proferida em sessão de 15 de Julho de 1980, foi recusado o "Visto" a 18 diplomas de provimento de escriturários-dactilógrafos de 1ª classe da Secretaria-Geral da Universidade de Lisboa para os cargos de terceiros-oficiais da mesma Secretaria-Geral.

E fundamentou-se aquela decisão no facto de o artigo 43º-A do Decreto-Lei nº 536/79, de 31 de Dezembro, indicado como permissivo do acto, condicionar tais provimentos à posse de habilitações legais e os interessados não se encontrarem habilitados com o curso geral do ensino secundário ou equiparado como o exige o artigo 11º, nº 2 do Decreto-Lei nº 191-C/79, de 25 de Junho, para o provimento naqueles cargos e ainda na circunstância de os interessados não poderem beneficiar da faculdade concedida pelo artigo 5º do Decreto-Lei nº 180/80, de 3 de Junho.

Pretende, todavia, o reclamante essencialmente e com interesse para a discussão do problema que o nº 3 do artigo 11º do Decreto-Lei nº 191-C/79 permite que os actuais oficiais administrativos sejam providos nas categorias de terceiros e segundos oficiais ainda que não possuam as habilitações exigidas pelo seu nº 2.

Parte, todavia, o reclamante de um pressuposto errado qual seja o de que os escriturários-dactilógrafos e os oficiais administrativos se encontram inseridos na mesma carreira.

Ora quando foram proferidos os despachos autorizados dos provimentos - 2 de Junho de 1980 - já se encontrava em pleno vigor o Decreto-Lei nº 191-C/79 que distinguiu, de entre o pessoal administrativo, as carreiras de "oficiais administrati-

vos" desenvolvendo-se pelas categorias de primeiro-oficial, segundo-oficial e terceiro-oficial (artigo 11º) e de "escriturários - dactilógrafos" com as categorias de principal, de 1ª e de 2ª classe (artigo 12º).

E no nº 2 do artigo 11º estabelece-se, de forma clara, que o ingresso naquela primeira carreira e, portanto, como terceiro-oficial, fica condicionado à posse do curso geral do ensino secundário ou equiparado.

Cai, assim, pela base, toda a argumentação do reclamante.

Acresce que o invocado artigo 43º do Decreto-Lei nº 576/79 (aditado pelo artigo 1º do Decreto-Lei nº 118/80, de 13 de Maio), ao permitir o primeiro provimento nos lugares do quadro anexo àquele diploma legal, directamente para qualquer categoria independentemente do serviço prestado em categorias anteriores exige, expressamente, as habilitações legais necessárias para tais provimentos e que, nos casos em apreço são, como já referimos, o curso geral do ensino secundário ou equiparado.

E o argumento que se pretende extrair dos artigos 27º do Decreto-Lei nº 49 410, de 24 de Novembro de 1969 e 16º, nº 1 do Decreto-Lei nº 273/79, de 3 de Agosto com a nova redacção que lhe foi dada pelo artigo 1º do Decreto-Lei nº 250/80, de 24 de Julho não tem qualquer valimento não só porque, em ambos os casos se parte do princípio errado de que os escriturários-dactilógrafos e os oficiais administrativos se encontram inseridos numa mesma carreira como também por se esquecer que aquele artigo 27º do Decreto-Lei nº 49 410 se encontra revogado.

Como nenhum dos interessados possui as habilitações legais exigidas pelo nº 2 do artigo 11º do Decreto-Lei nº 191-C/79 para o ingresso na carreira de oficiais administrativos, não podia ter sido outra a decisão de que se reclama.

Pelos fundamentos expostos acordam os Juizes do Tribunal de Contas em julgar improcedente o pedido de reapreciação

apresentado confirmando assim, a Resolução de 15 de Julho de 1980 que recusou o "Visto" aos diplomas de provimento de Maria Eugénia Pereira Vicente, Maria dde Jesus Belo Leal, Maria Emilia da Silva Santos Casteleira, Maria Luisa Marques da Silva Cunha, Ester da Conceição Marques Trindade Gonçalves, Maria de Lourdes das Neves Calado Gonçalves, Maria Aldina Campos Carneiro, Conceição de Jesus Rodrigues, Alexandrina Maria Ferreira Candeias, Virgínia Aires Nunes Apolinário Martins, Maria Esmeralda de Moraes Salgueiro, Ivone Garcia de Barros, Olga da Conceição Soares Primo Mendes, Adelaide da Conceição Mendes da Costa Silva, Albertino Assunção Arimateia, Sofia Rodrigues Gonçalves Valentim, Maria Edwiges da Silva Carrido e Mário Silva Marques de Almeida, para os cargos de terceiros-oficiais da Secretaria Geral da Universidade de Lisboa nos processos nºs 50 221/80, 50 222/80, 50 224/80 a 50 235/80, 52 044/80, 53 135/80, 53 142/80 e 54 197/80.

Não são devidos emolumentos.

Devolva-se a documentação que não pertence ao arquivo deste Tribunal.

Lisboa, 11 de Janeiro de 1983

(aa) - João de Deus Pinheiro Farinha
- Pedro Amaral
- Antero Alves Monteiro Dinis
- José Castelo Branco
- António Rodrigues Lufinha
- Mário Valente Leal
- Orlando Soares Comes da Costa

Fui presente

(a) - João Manuel Neto

AUTOS DE RECLAMAÇÃO

(Lei nº 8/82, de 26 de Maio)

INDEFERIMENTO LIMINAR DA RECLAMAÇÃO

Sumário:

1. O regime jurídico da reapreciação dos actos pelo Tribunal de Contas, no caso de recusa de visto, criado pela Lei nº 8/82, de 26 de Maio, está aí perfeitamente fundamentado e disciplinado.

2. Assim, são princípios fundamentais e disciplinadores desse regime, que a entidade pública reclamante tenha capacidade e legitimidade para solicitar a reapreciação do acto (nºs. 1 e 2 do seu artº 1º), que o respectivo pedido seja feito mediante reclamação por ofício, devendo deste constar as razões de facto ou de direito em que se fundamenta e que a reclamação dê entrada na Direcção-Geral do Tribunal de Contas no prazo de 30 dias contados da data do ofício que comunicou a recusa (nºs 1 e 2 do seu artº 2º).

3. Não basta pois, por contrário à lei, a simples remessa para outros elementos (pareceres, informações, etc.) instrutórios da reclamação mesmo por acolhidos tácita ou expressamente pela entidade reclamante.

4. Assim não há lugar à aplicação do disposto no Código do Processo Civil sobre a matéria do indeferimento liminar da petição inicial nas acções cíveis, como direito subsidiário, dado não haver qualquer omissão ou lacuna a integrar.

Relator: Exmº Sr. Cons.
Mário Valente Leal

Autos de Reclamação
nº 58/82
Sessão de 18/1/83

I O Ministro da Cultura e Coordenação Científica, não se

conformando com o despacho de 28 de Outubro de 1982, proferido nos presentes autos, que indeferiu liminarmente a reclamação por si apresentada da recusa de visto de 16 de Fevereiro daquele mesmo ano respeitante ao provimento de Armino Mendes de Carvalho como técnico superior de 2ª classe da Direcção-Geral da Acção Cultural, veio, ao abrigo do disposto no nº 2 do artº 4º da Lei nº 8/82, de 26 de Maio, interpor recurso daquele mencionado despacho para o plenário deste Tribunal de Contas, o que fez legítima e tempestivamente.

II. O Recorrente, na sua douda alegação de recurso, sustenta que no despacho recorrido não se fez o melhor entendimento da lei, já por considerar que no normativismo da citada Lei nº 8/82 não se contém a exigência de expressamente se fazer constar do ofício em que é formulado o pedido de reapreciação a argumentação utilizada para o fundamentar, sendo bastante para o preenchimento dessa finalidade a simples remessa para os elementos que o acompanham, nomeadamente informações ou pareceres, cujo conteúdo tenha sido acolhido pelo membro do Governo competente.

Todavia, acrescenta o Recorrente que, mesmo tendo-se como correcto o entendimento de não haver sido cumprida aquela exigência legal, nem por isso se deveria ter decidido pelo indeferimento liminar da reclamação, pois que sendo a aludida Lei nº 8/82 omissa no tocante aos fundamentos de tal indeferimento liminar, se deveria ter recorrido às normas do processo civil, como direito subsidiário, tais como, ao disposto no artigo 474º do Código de Processo Civil para então se concluir que a falta de indicação expressa dos fundamentos do pedido não se integra em nenhum dos casos ali indicados, designadamente no da ineptidão da petição inicial", uma vez que tal ineptidão apenas ocorre nos casos taxativamente enumerados no artº 193º do mesmo Código e nenhum deles se verificar no caso em apreciação.

Mais ali se afirma que a indicação implícita dos fun-

damentos do pedido por remessa para os pareceres que o acompanham é apenas enquadrável como uma irregularidade da petição, com as consequências do disposto no artº 467º ainda do citado Código, ou seja, o convite à apresentação de nova petição, princípio este que o legislador também acolheu no Código Administrativo (artº 838º § 1º).

Termina o Recorrente formulando as conclusões seguintes:

1ª) - "A exigência legal do artº 2º nº 2, da Lei nº 8/82, de 26 de Maio, da indicação das razões de facto ou de direito em que a reclamação se funda, fica satisfeita com a remessa para pareceres anexos que contêm esses fundamentos";

2ª) - "Se assim se não entender, o vício de que enferma a petição é mera irregularidade que não acarreta o indeferimento liminar, devendo o reclamante ser convidado a suprir a deficiência, mediante a apresentação de nova petição".

E conclui pedindo que seja dado provimento ao recurso.

III- Admitido o recurso interposto, por apresentado em tempo oportuno e por quem para tal tinha legitimidade, foi cumprido o disposto no nº 1 do artº 5º da citada Lei nº 8/82.

O Digno Magistrado do Ministério Público, no seu douto parecer, defende igualmente a aplicação subsidiária das normas do Código de Processo Civil aos autos de reclamação criados pela citada Lei nº 8/82, dando a sua plena concordância à tese do Recorrente no sentido de que o indeferimento liminar do pedido de reapreciação só deva ter lugar quando se verifique qualquer dos casos enunciados no artº 474º do Código de Processo Civil e por que inexistem quaisquer desses casos, designadamente a ineptidão da petição inicial, achando-se o pedido feito em termos claros e inteligíveis e podendo defender-se a remissão feita para os pareceres enviados em anexo mediante a aplicação

analógica do disposto no nº 1 do artº 690º do Código de Processo Civil, na redacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei nº 224/82, de 8 de Junho, termina dizendo merecer o recurso provimento.

Corridos os vistos legais, cumpre apreciar e decidir.

IV- Com a promulgação e publicação da Lei nº 8/82 de 26 de Maio, criou-se o regime jurídico da reapreciação dos actos pelo Tribunal de Contas, no caso de recusa de visto, uma vez que já havia cessado a vigência do regime anterior estabelecido no artº 26º do Decreto com força de lei nº 22 257, de 25 de Fevereiro de 1933, pela sua revogação tácita operada pelo disposto no artº 20º do Decreto-Lei nº 146-C/80, de 22 de Maio.

Ora, na economia normativa daquela citada Lei nº 8/82, acham-se cabal e perfeitamente definidos os fundamentos e os princípios disciplinadores do mencionado regime de reapreciação

Com efeito, logo nela se começa por fixar taxativamente as Entidades Públicas que têm capacidade e legitimidade para solicitar a reapreciação do acto (nºs 1 e 2 do seu artº 1º) para de seguida precisar a forma por que deve ser feito o pedido de reapreciação dizendo-se ser por reclamação a fazer em ofício, donde constem as razões de facto ou de direito em que a mesma se fundamenta e fixando o prazo dentro do qual a dita reclamação deverá dar entrada na Direcção-Geral do Tribunal de Contas (nºs 1 e 2 do seu artº 2º).

Estes são os princípios legais e muito concretos a que sempre deverá obedecer a formulação de um qualquer pedido de reapreciação.

Apresentado aquele pedido é o mesmo distribuído, autuado e processado como reclamação, após o que os autos deverão ser conclusos ao respectivo relator que a admitirá ou indeferirá liminarmente (seus artºs 3º e 4º).

É adentro destes parâmetros legais que terá de ser apreciada e decidida a matéria constitutiva do objecto do presente recurso.

V- Vejamos, pois.

Começaremos por dizer, desde logo e em primeira linha, sem quebra do devido respeito pela opinião em contrário, que da globalidade normativa atrás descrita resulta que entendimento correcto dos citados comandos legais leva à conclusão de a dita Lei nº 8/82 exigir que a Entidade reclamante faça, no ofício em que formaliza a sua reclamação, a alegação expressa e concreta das razões de facto ou de direito em que a fundamenta, e isto até por que só poderá haver lugar ao respectivo pedido de reapreciação do acto a que foi recusado o visto, "desde que se verifiquem razões de facto ou de direito suficientemente relevantes", como expressamente se dispõe no nº 1 do seu artº 2º."

Temos ser este o melhor entendimento da lei sobre esta matéria, não sendo por isso lícito, por contrário à lei, a simples remessa para os elementos (pareceres, informações, etc.), que acompanhem a respectiva reclamação e cujo conteúdo haja sido acolhido tácita ou mesmo expressamente pela Entidade reclamante.

Pretende ainda o douto Recorrente sustentar a tese da aplicação ao caso vertente do disposto no Código de Processo Civil sobre a matéria do indeferimento liminar da petição inicial nas acções cíveis, como direito subsidiário.

Tal tese assenta na circunstância de, como refere na sua douda alegação de recurso, a Lei nº 8/82 ser omissa no tocante aos fundamentos do mencionado indeferimento liminar.

Mas verificar-se-à tal omissão?

Ainda aqui e sempre sem quebra do respeito pela douta opinião contrária, entendemos não existir tal omissão.

Com efeito e como já se deixou dito, a Lei nº 8/82 é bem explícita ao exigir, pelo disposto nos nºs 1 e 2 do seu artigo 2º que, no ofício em que se formaliza pela Entidade Pública legítima e competente o respectivo pedido de reapreciação, se terá e deverá invocar a fundamentação de facto ou de direito em que estrutura aquele pedido.

Em suma, a Entidade reclamante tem de expressa e concretamente indicar as razões de facto ou de direito que considera suficientemente relevantes para atacar a legalidade consignada na resolução de recusa do visto, muito embora possa fazer acompanhar essa sua reclamação dos elementos instrutórios que tenha por convenientes e necessários para provar, confirmar ou fortalecer aquelas razões por si invocadas.

E bem se compreende que seja assim.

Na verdade, não pode esquecer-se, ao fazer a elaboração interpretativa desta matéria legal, que o que está em causa e se pretende com a criação deste novo regime legal foi estabelecer ou fixar os mecanismos legais apropriados à solicitação, por parte da Administração, da reapreciação dos actos por parte do Tribunal de Contas, nos casos em que haja recusado o visto, por existirem razões suficientemente relevantes para a consecução dessa finalidade.

Por isso aquela apontada exigência legal é bem compreensível e aceitável uma vez que o que se pretende é atacar a validade legal de uma decisão ou resolução do Tribunal de Contas (com categoria de Tribunal Superior), tomada ou proferida em sua sessão plenária, o que só é aconselhável poder fazer-se nas circunstâncias bem definidas e exigidas pela lei e elas são a da invocação expressa e concreta das razões de facto ou de

direito em que se fundamenta a respectiva reclamação.

Na sequência lógica do que vem sendo dito, importa concluir não ser a Lei nº 8/82 omissa quanto aos fundamentos do indeferimento liminar da reclamação, pois ele será sempre legal e adequado nos casos em que não se verifiquem os pressupostos legais exigidos sobre competência, legitimidade e fundamentação explicitados naquele diploma legal, não havendo por isso lugar à aplicação das regras de direito fixadas no Código de Processo Civil sobre o indeferimento liminar da petição inicial como direito subsidiário, como se alega, dado não se verificar qualquer omissão ou lacuna a integrar e ainda não haver qualquer similitude ou analogia entre as duas respectivas situações objectivas processuais em apreço e a tramitação processual subsequente relativa a cada uma delas.

VI- Pelos fundamentos expostos e sem necessidade de outras considerações, acordam os Juizes do Tribunal de Contas, em plenário, em negar provimento ao recurso interposto e, consequentemente, em manter o despacho recorrido de 28 de Outubro de 1982 que indeferiu liminarmente a reclamação apresentada.

Comunicações necessárias.

Não são devidos emolumentos.

Devolva-se a quem de direito a documentação que não pertença ao Arquivo deste Tribunal de Contas.

Ressalvam-se as rasuras que dizem "solicitação" e "tramitação".

Lisboa, 18 de Janeiro de 1983

(aa)- João de Deus Pinheiro Farinha
- Mário Valente Leal, relator
- Orlando Gomes da Costa

- Pedro Amaral

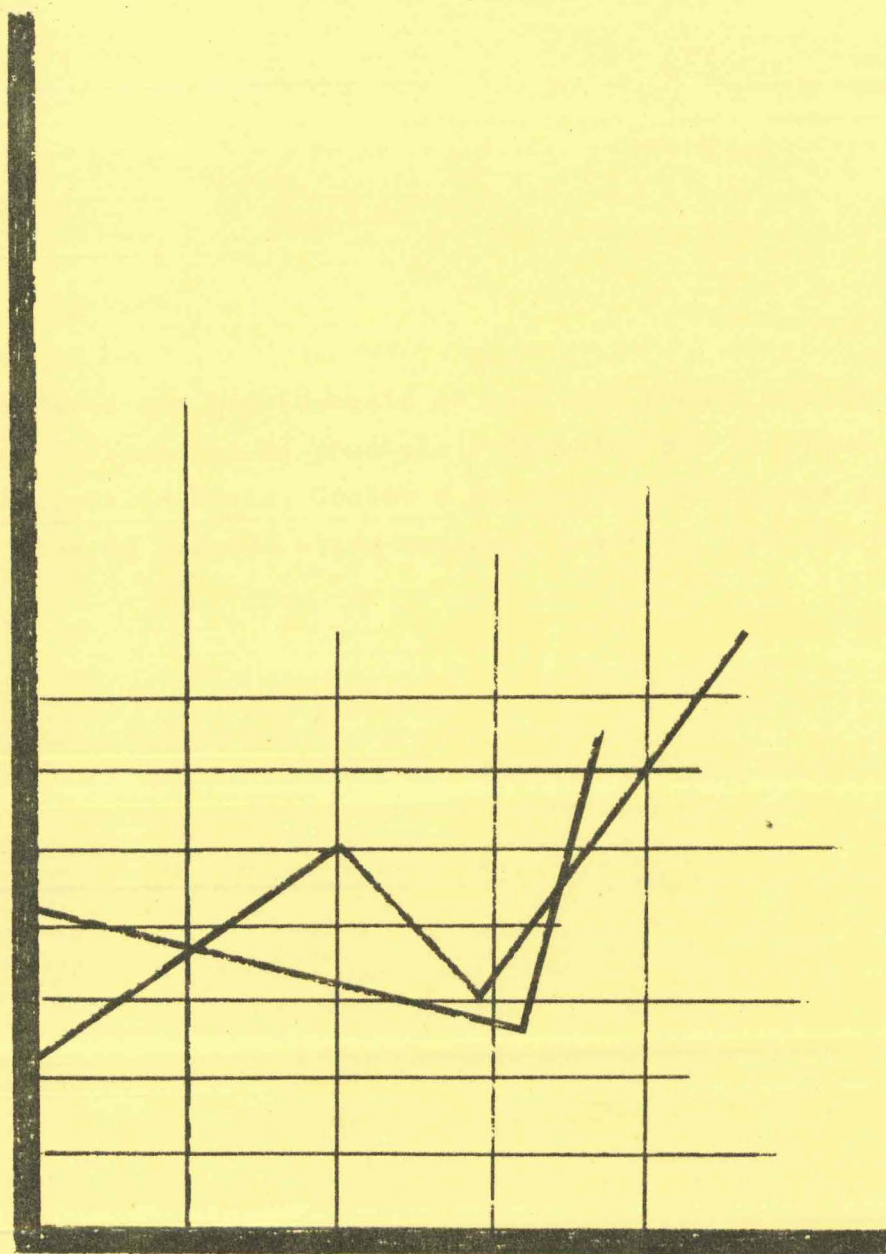
- Antero Alves Monteiro Dinis (vencido pelas razões seguintes: O pedido de reapreciação contemplado na Lei nº 8/82, de 26 de Maio, foi concebido como petição de um acto substancial e não propriamente como um recurso, considerando assim de aplicação subsidiária a disposição do artº 474º do Código de Processo Civil, a propósito do indeferimento liminar. De outro lado, a não inclusão no ofício de petição das razões de facto e de direito justificativas da reclamação não constituem, a nosso ver, causa de indeferimento liminar pois que os documentos que acompanhavam aquele ofício consideram-se por ele recebidos. Quando muito haveria lugar ao aperfeiçoamento da petição de reclamação nos termos do artº 477º do mesmo Código de Processo Civil. Pelas razões expostas, o recurso merecia provimento).

- José Castelo Branco

- António Rodrigues Lufinha

Fui presente

(a) - João Manuel Neto



DADOS ESTATÍSTICOS

N O T A

Os mapas que seguidamente se publicam contêm não só dados estatísticos como indicadores de produção referentes aos Serviços de Apoio técnico do Tribunal - Visto, Contas e Documentos de Despesa dos Ministérios -, por eles se podendo ainda comparar o ano de 1982 com o de 1981.

DIRECÇÃO-GERAL DO TRIBUNAL DE CONTAS

SERVIÇO DE VISTO

(INDICADORES DE PRODUÇÃO DE TRABALHO)

		Ano de 1981	Ano de 1982
PROCESSOS ENTRADOS		128 048	133 126
Processos Preparados	Visados sem dúvidas	67 212	70 210
	Anotados	24 264	19 664
	Duvidados	19 424	12 316
	Devolvidos	12 352	27 672
	TOTAL	123 252	129 862
Tempo verificado entre a entrada e saída de um processo sem dúvidas		3 dias	3 dias
Prazo legal estabelecido para despacho de um processo sem dúvidas		4 dias	4 dias
Variação relativa ao prazo legal		1 dia	1 dia
Ofícios expedidos		22 711	24 278
Dias de trabalho do pessoal executivo adstrito ao Serviço		5 608	5 681
Factor de produção de trabalho <u>Nº.de processos preparados</u> dias de trabalho		21,9	22,8

DIRECÇÃO-GERAL DO TRIBUNAL DE CONTAS
SERVIÇO DE LIQUIDAÇÃO DE CONTAS
 (INDICADORES DE PRODUÇÃO DE TRABALHO)

INDICADORES	ANO DE 1981	ANO DE 1982
CONTAS ENTRADAS	2 634	2 666
CONTAS LIQUIDADAS	1 518	1 628
DOCTS. DE DESPESA CONFERIDOS		
DE PESSOAL	172 428	196 221
OUTROS	760 288	937 969
OFÍCIOS DE LIQUIDAÇÃO EXPEDIDOS	6 916	9 725
RELATÓRIOS ELABORADOS COM DÚVIDAS	812	783
INFORMAÇÕES EM PROCESSOS COM DESPACHO DO RELATOR	320	492
DIAS DE TRABALHO EFECTIVO DO PESSOAL EXECUTIVO	12 932	13 384
TEMPO MÉDIO DE LIQUIDAÇÃO DE UMA CONTA	8,5	8,2
FACTOR DE PRODUÇÃO DE TRABALHO DIÁRIO= <u>Nº de contas liquidadas</u> dias de trabalho	0,11	0,12

DIRECÇÃO-GERAL DO TRIBUNAL DE CONTAS

Serviço de exame e verificação dos documentos relativos às despesas dos Ministérios autorizadas pela D.C.da Contabilidade Pública
(INDICADORES DA PRODUÇÃO DE TRABALHO)

Indicadores	Ano de 1981	Ano de 1982
Documentos conferidos	183 228	217 717
Montante de despesa verificada em contos	2 197 652	1 930 028
Mapas elaborados	708	815
Ofícios expedidos	8	10
Dias de trabalho efectivo do pessoal executivo	1 228	1 255
Factor de produção <u>Nº. de Docts. conferidos</u> Dias de trabalho	149,2 docts./dia	173,4 docts./dia

Quinta-feira 17 de Fevereiro de 1983



DIÁRIO DA REPÚBLICA

1.ª Série — Número 39

PREÇO DESTE NÚMERO — 32\$00

Quinta-feira 17 de Fevereiro de 1983



DIÁRIO DA REPÚBLICA

1.ª Série — Número 39

PREÇO DESTE NÚMERO — 32\$00

Anúncios		Anúncios	
Antes	Depois	Antes	Depois
1.ª	2.ª	1.ª	2.ª
2.ª	3.ª	2.ª	3.ª
3.ª	4.ª	3.ª	4.ª
4.ª	5.ª	4.ª	5.ª
5.ª	6.ª	5.ª	6.ª
6.ª	7.ª	6.ª	7.ª
7.ª	8.ª	7.ª	8.ª
8.ª	9.ª	8.ª	9.ª
9.ª	10.ª	9.ª	10.ª
10.ª	11.ª	10.ª	11.ª
11.ª	12.ª	11.ª	12.ª
12.ª	13.ª	12.ª	13.ª
13.ª	14.ª	13.ª	14.ª
14.ª	15.ª	14.ª	15.ª
15.ª	16.ª	15.ª	16.ª
16.ª	17.ª	16.ª	17.ª
17.ª	18.ª	17.ª	18.ª
18.ª	19.ª	18.ª	19.ª
19.ª	20.ª	19.ª	20.ª
20.ª	21.ª	20.ª	21.ª
21.ª	22.ª	21.ª	22.ª
22.ª	23.ª	22.ª	23.ª
23.ª	24.ª	23.ª	24.ª
24.ª	25.ª	24.ª	25.ª
25.ª	26.ª	25.ª	26.ª
26.ª	27.ª	26.ª	27.ª
27.ª	28.ª	27.ª	28.ª
28.ª	29.ª	28.ª	29.ª
29.ª	30.ª	29.ª	30.ª
30.ª	31.ª	30.ª	31.ª
31.ª	32.ª	31.ª	32.ª
32.ª	33.ª	32.ª	33.ª
33.ª	34.ª	33.ª	34.ª
34.ª	35.ª	34.ª	35.ª
35.ª	36.ª	35.ª	36.ª
36.ª	37.ª	36.ª	37.ª
37.ª	38.ª	37.ª	38.ª
38.ª	39.ª	38.ª	39.ª
39.ª	40.ª	39.ª	40.ª
40.ª	41.ª	40.ª	41.ª
41.ª	42.ª	41.ª	42.ª
42.ª	43.ª	42.ª	43.ª
43.ª	44.ª	43.ª	44.ª
44.ª	45.ª	44.ª	45.ª
45.ª	46.ª	45.ª	46.ª
46.ª	47.ª	46.ª	47.ª
47.ª	48.ª	47.ª	48.ª
48.ª	49.ª	48.ª	49.ª
49.ª	50.ª	49.ª	50.ª
50.ª	51.ª	50.ª	51.ª
51.ª	52.ª	51.ª	52.ª
52.ª	53.ª	52.ª	53.ª
53.ª	54.ª	53.ª	54.ª
54.ª	55.ª	54.ª	55.ª
55.ª	56.ª	55.ª	56.ª
56.ª	57.ª	56.ª	57.ª
57.ª	58.ª	57.ª	58.ª
58.ª	59.ª	58.ª	59.ª
59.ª	60.ª	59.ª	60.ª
60.ª	61.ª	60.ª	61.ª
61.ª	62.ª	61.ª	62.ª
62.ª	63.ª	62.ª	63.ª
63.ª	64.ª	63.ª	64.ª
64.ª	65.ª	64.ª	65.ª
65.ª	66.ª	65.ª	66.ª
66.ª	67.ª	66.ª	67.ª
67.ª	68.ª	67.ª	68.ª
68.ª	69.ª	68.ª	69.ª
69.ª	70.ª	69.ª	70.ª
70.ª	71.ª	70.ª	71.ª
71.ª	72.ª	71.ª	72.ª
72.ª	73.ª	72.ª	73.ª
73.ª	74.ª	73.ª	74.ª
74.ª	75.ª	74.ª	75.ª
75.ª	76.ª	75.ª	76.ª
76.ª	77.ª	76.ª	77.ª
77.ª	78.ª	77.ª	78.ª
78.ª	79.ª	78.ª	79.ª
79.ª	80.ª	79.ª	80.ª
80.ª	81.ª	80.ª	81.ª
81.ª	82.ª	81.ª	82.ª
82.ª	83.ª	82.ª	83.ª
83.ª	84.ª	83.ª	84.ª
84.ª	85.ª	84.ª	85.ª
85.ª	86.ª	85.ª	86.ª
86.ª	87.ª	86.ª	87.ª
87.ª	88.ª	87.ª	88.ª
88.ª	89.ª	88.ª	89.ª
89.ª	90.ª	89.ª	90.ª
90.ª	91.ª	90.ª	91.ª
91.ª	92.ª	91.ª	92.ª
92.ª	93.ª	92.ª	93.ª
93.ª	94.ª	93.ª	94.ª
94.ª	95.ª	94.ª	95.ª
95.ª	96.ª	95.ª	96.ª
96.ª	97.ª	96.ª	97.ª
97.ª	98.ª	97.ª	98.ª
98.ª	99.ª	98.ª	99.ª
99.ª	100.ª	99.ª	100.ª

Quinta-feira 17 de Fevereiro de 1983

IMPRESSA NACIONAL-CASA DA

Aviso

Por ordem superior e para co-
que não serão aceites quaisquer
nados ao «Diário da República»
gem aposte a competente
assinada e autenticada cor-
feito, a assinatura recor-
responsável, salvo que
manados de cartórios

Ministério

Decreto-Lei n.º 83
Altera o n.º
de 20 de
material
Armada
para a

Declaração

De

De

Ministério da Saúde
Decreto-Lei n.º 83/83
Altera o n.º 1 do
de 20 de Janeiro
material e move-
Armadas e le-
para a sua pr

Declaração
De ser
my

Declaração
De ser
my

Declaração
De ser
my

Declaração
De ser
my

Declaração
De ser
my

Declaração
De ser
my

Declaração
De ser
my

Declaração
De ser
my

Declaração
De ser
my

Declaração
De ser
my

Declaração
De ser
my

Declaração
De ser
my

Declaração
De ser
my

Declaração
De ser
my

Declaração
De ser
my

Declaração
De ser
my

Declaração
De ser
my

Ministério da Saúde
Decreto-Lei n.º 83/83
Altera o n.º 1 do
de 20 de Janeiro
material e move-
Armadas e le-
para a sua pr

Declaração
De ser
my

Declaração
De ser
my

Declaração
De ser
my

Declaração
De ser
my

Declaração
De ser
my

Declaração
De ser
my

Declaração
De ser
my

Declaração
De ser
my

Declaração
De ser
my

Ministério da Saúde
Decreto-Lei n.º 83/83
Altera o n.º 1 do
de 20 de Janeiro
material e move-
Armadas e le-
para a sua pr

Declaração
De ser
my

Declaração
De ser
my

Declaração
De ser
my

Declaração
De ser
my

Declaração
De ser
my

Declaração
De ser
my

Declaração
De ser
my

Declaração
De ser
my

Declaração
De ser
my

Ministério da Saúde
Decreto-Lei n.º 83/83
Altera o n.º 1 do
de 20 de Janeiro
material e move-
Armadas e le-
para a sua pr

Declaração
De ser
my

Declaração
De ser
my

Declaração
De ser
my

Declaração
De ser
my

Declaração
De ser
my

Declaração
De ser
my

Declaração
De ser
my

Declaração
De ser
my

Declaração
De ser
my

Ministério da Saúde
Decreto-Lei n.º 83/83
Altera o n.º 1 do
de 20 de Janeiro
material e move-
Armadas e le-
para a sua pr

Declaração
De ser
my

Declaração
De ser
my

Declaração
De ser
my

Declaração
De ser
my

Declaração
De ser
my

Declaração
De ser
my

Declaração
De ser
my

Declaração
De ser
my

Declaração
De ser
my

Ministério da Saúde
Decreto-Lei n.º 83/83
Altera o n.º 1 do
de 20 de Janeiro
material e move-
Armadas e le-
para a sua pr

Declaração
De ser
my

Declaração
De ser
my

Declaração
De ser
my

Declaração
De ser
my

Declaração
De ser
my

Declaração
De ser
my

Declaração
De ser
my

Declaração
De ser
my

Declaração
De ser
my

LEGISLAÇÃO

INFORMAÇÃO LEGISLATIVA

Principais normas publicadas no Diário da República, I Série, durante o 1º trimestre de 1983, que interferem com a área de actuação do Tribunal de Contas.

Mês de Janeiro

Portaria nº 6/83, de 3/1

- Alarga a área de recrutamento para os lugares de director de estabelecimento prisional e especial e chefe de divisão da Direcção-Geral dos Serviços Prisionais.

Despacho Normativo nº 6/83, de 4/1

- Esclarece dúvidas sobre vínculo à função pública do pessoal dos Serviços Médico-Sociais.

Decreto Regulamentar Regional nº 2/83/A, de 6/1

- Estabelece as dotações privativas do pessoal operativo e auxiliar dos estabelecimentos de ensino preparatório e secundário e das escolas do magistério primário e a forma de provimento.

Portaria nº 22/83, de 7/1

- Põe em execução os preceitos do Decreto-Lei nº 245/81, de 24 de Agosto, abrangendo categorias específicas da administração local e da área do ensino, bem como da magistratura judicial.

Declaração, de 8/1

- De ter sido rectificada a Portaria nº 6/83, do Ministério da Reforma Administrativa, que fixa normas que

permitam aferir das condições de cumprimento dos com
promissos assumidos no âmbito do regime de dedicação
exclusiva publicada no Diário da República, 1ª série,
nº 1, de 3 de Janeiro de 1983.

Decreto-Lei nº 3/83, de 11/1

- Define o regime a que deve obedecer a publicação,
identificação e formulário dos diplomas.

Portaria nº 47/83, de 17/1

- Aprova a nova regulamentação do formulário dos diplo
mas legais .

Decreto-Lei nº 9/83, de 17/1

- Possibilita o reingresso nos quadros do Ministério
dos Negócios Estrangeiros de funcionários que tendo
prestado serviço naqueles quadros pelo período míni-
mo de 10 anos deles hajam sido afastados por motivos
não disciplinares.

Decreto Regulamentar nº 3/83, de 22/1

- Transição do pessoal dos SMS para o regime jurídico
da função pública.

Decreto-Lei nº 28/83, de 22/1

- Altera a redacção de alguns artigos do Decreto-Lei nº
513-Z/79, de 27 de Dezembro (Lei Orgânica da Inspec-
ção-Geral de Finanças), bem como o quadro de pessoal
a ele anexo.

Decreto-Lei nº 39/83, de 25/1

- Estabelece o regime a que deve obedecer o registo cri-
minal e as condições de acesso à informação criminal.

Portaria nº 65/83, de 26/1

- Fixa os montantes das ajudas de custo a abonar ao pessoal militar da GNR e ao pessoal militar, militarizado e civil da PSP que se desloque em missão oficial de serviço ao estrangeiro ou no estrangeiro

Despacho Normativo nº 27/83, de 26/1

- Fixa as ajudas de custo a abonar ao pessoal em serviço nas missões diplomáticas e consulares no estrangeiro

Decreto-Lei nº 47/83, de 29/1

- Fixa o novo salário mínimo nacional

Despacho Normativo nº 36/83, de 29/1

- Altera a redacção do nº 27.2 do Despacho Normativo nº 11/83, de 11 de Fevereiro (normas sobre a concessão ou conservação da nacionalidade portuguesa e respectivos documentos)

Resolução do Conselho de Ministros nº 20/83, de 31/1

- Faz depender de prévia realização de concurso público a aquisição onerosa de imóveis por parte do Estado, de institutos públicos e de empresas públicas

Decreto-Lei nº 49/83, de 31/1

- Aprova a Lei Orgânica do Ministério da Qualidade de Vida

Mês de Fevereiro

Decreto-Lei nº 52/83, de 1/2

- Fixa o estatuto remuneratório das chefias militares

Portaria nº 109/83, de 1/2

- Actualiza os subsídios vitalícios e de sobrevivência concedidos aos funcionários e agentes da AGPL e APDL

Despacho Normativo nº 45/83, de 3/2

- Aprova as normas regulamentadoras da prestação de trabalho extraordinário e em regime de turnos pelo pessoal civil dos estabelecimentos fabris das Forças Armadas

Decreto-Lei nº 65/83, de 4/2

- Determina que os funcionários e agentes do Estado e os trabalhadores de serviços públicos personalizados ou de empresas públicas possam ser requisitados a essas entidades para desempenho de funções a tempo inteiro e remuneradas, de administração ou direcção em instituições reconhecidas como de utilidade pública

Decreto-Lei nº 75/83, de 8/2

- Altera o artº 121º do Decreto-Lei nº 498/72, de 9 de Dezembro, respeitante à base de cálculo das pensões

Decreto-Lei nº 76/83, de 8/2

- Reestrutura a Junta do Crédito Público

Portaria nº 150/83, de 14/2

- Extingue a Escola de Auxiliares Sociais de S. Pedro de Alcântara

Despacho Normativo nº 51/83, de 14/2

- Esclarece dúvidas quanto ao preenchimento de lugares

- de ingresso e de acesso dos quadros de pessoal dos serviços e organismos públicos.

Decreto-Lei nº 98/83, de 18/2

- Dá nova redacção ao Estatuto do Instituto António Sérgio do Sector Cooperativo.

Decreto-Lei nº 101/83, de 18/2

- Altera os arts 95º e 119º do Estatuto da Aposentação (Decreto-Lei nº 498/72, de 9 de Dezembro).

Decreto-Lei nº 102/83, de 18/2

- Altera o provimento dos lugares de algumas carreiras do quadro de Inspecção-Geral de Finanças.

Lei nº 2/83, de 18/2

- Aprova o Orçamento do Estado para 1983 (provisório).

Decreto-Lei nº 106-A/83, de 18/2

- Fixa a tabela dos vencimentos dos funcionários e a gentes da administração central, regional e local para 1983.

Despacho Normativo nº 57/83, de 23/2

- Introduce alterações aos Despachos Normativos nº 3/82 e 213/82 (habilitações próprias e suficientes para os ensinos preparatório e secundário).

Decreto-Lei nº 115/83, de 24/2

- Cria o Centro de Apuramento de Custos e Estatísticas na Direcção-Geral de Protecção Social aos Funcionários e Agentes da Administração Pública (ADSE).

Decreto-Lei nº 118/83, de 25/2

- Estabelece o funcionamento e o esquema de benefícios da Direcção-Geral de Protecção Social aos Funcionários e Agentes da Administração Pública (ADSE).

Mês de Março:

Portaria nº 172/83, de 1/3

- Cria a Região de Turismo do Centro e ratifica os respectivos estatutos

Portaria nº 237/83, de 3/3

- Cria a Região de Turismo do Nordeste Transmontano e ratifica os seus estatutos

Despacho Normativo nº 60/83, de 3/3

- Fixa o prazo para a entrega da documentação necessária à instrução dos processos para ingresso no quadro geral de adidos que se encontram pendentes na Direcção-Geral de Integração Administrativa

Portaria nº 260/83, de 7/3

- Regulamenta a Comissão Internacional de Utilizados (CIU)

Portaria nº 261/83, de 8/3

- Ratifica os estatutos da Região de Turismo do Douro Sul

Decreto-Lei nº 122/83, de 8/3

- Transfere a Comissão dos Explosivos da dependência do Ministério da Defesa Nacional para o Ministério da Administração Interna

Portaria nº 272/83, de 10/3

- Cria a Região de Turismo do Oeste e ratifica os respectivos estatutos

Decreto-Lei nº 128/83, de 12/3

- Altera vários artigos do Código de Processo Civil

Decreto-Lei nº 129/83, de 14/3

- Integra na DGPE a Central de Compras do Estado

Portaria nº 281/83, de 17/3

- Aprova as tabelas de equivalências referentes a categorias da antiga Administração Ultramarina para efeitos do disposto no artº 7º-B do Decreto-Lei nº 110-A/81, de 14 de Maio, aditado pelo Decreto- Lei 245/81, de 24 de Agosto

Portaria nº 284/83, de 17/3

- Extingue o Fundo do Fomento de Exportação a partir de 31 de Dezembro de 1982

Decreto-Lei nº 135/83, de 19/3

- Concede facilidades para o pagamento de impostos respeitantes a 1982 e a anos anteriores

Decreto-Lei nº 136/83, de 21/3

- Estabelece a orgânica dos centros regionais de segurança social

Portaria nº 296/83, de 22/3

- Ratifica os estatutos da Região de Turismo de São Mamede (Alto Alentejo)

Portaria nº 297/83, de 22/3

- Ratifica os estatutos da Região de Trismo da Serra da Estrela

Decreto Regulamentar nº 27/83, de 26/3

- Estabelece normas sobre a transição de pessoal administrativo do quadro dos estabelecimentos de ensino

Portaria nº 313/83, de 26/3

- Define como deve ser feita a equiparação dos lugares do quadro do Instituto de Assistência Psiquiátrica aos lugares correspondentes dos hospitais centrais

Decreto-Lei nº 139/83, de 28/3

- Extingue o serviço médico na periferia e altera o Decreto-Lei nº 310/83, de Agosto (regula as carreiras médicas)

Despacho Normativo nº 73/83, de 28/3

- Dota os centros de saúde integrados de médicos especialistas que já desenvolvessem a sua actividade com vínculo definitivo aos Serviços Médico-Sociais

Decreto-Lei nº 140/83, de 29/3

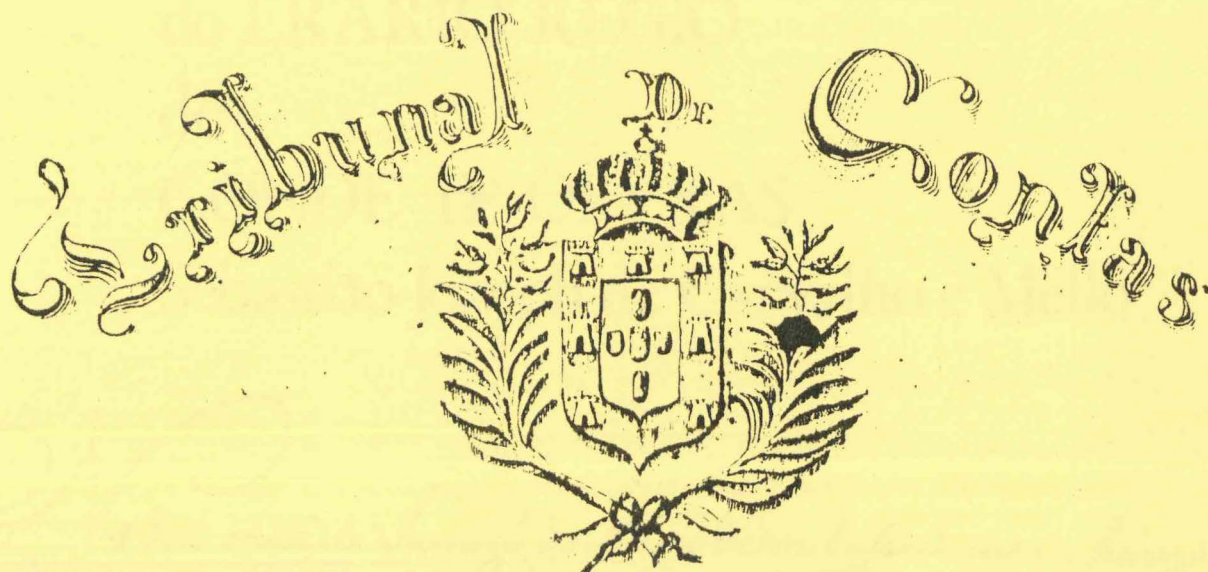
- Estabelece os vencimentos dos militares que prestam serviço militar obrigatório nos 3 ramos das Forças Armadas

Decreto-Lei nº 141/83, de 29/3

- Estabelece os vencimentos dos militares dos 3 ramos das Forças Armadas

Decreto-Lei nº 144/83, de 31/3

- Reorganiza o Registo Nacional de Pessoas Colectivas.



ARQUIVO HISTÓRICO

Tomou Posse
de Prezidente des
=te Erario Regio
o Ill.^{mo} e Ex.^{mo} S^{or}
Marques de An:
=geja, como consta
do Termo lançado
a f. 986

No dia onze de Janeiro, do Anno de mil e setecentos e sessenta e dous, nesta Cidade de Lisboa, e Caza do Thezouro Geral do Erario Regio, estabelecida no Arsenal Real; tomou posse o Ill.^{mo} e Exc.^{mo} S^{or} Conde de Oeyras, Sebastião Jozeph de Carvalho e Mello, Minis: tro e Secretario de Estado dos Negocios do Reyno; do Cargo de Inspector Geral do Erario Regio, e nelle Lugar Thenente immediato á Real Pessoa de Sua Magestade; a que foi promovido pelo mesmo Senhor, pelo Seu Real Decreto de vinte e nove de Dezembro proximo passado, copiado no Livro de Registo deste Thezouro. E de como o dito Ill.^{mo} e Ex.^{mo} Snr Inspector Geral, tomou a dita posse, assignou o prezente Termo, que eu João Henrique de Souza, Escrivão do referido Thezouro Geral escrevi e assignei.

Conde de Oeyras

João Henrique de Souza

No dia quatorze de Novembro, do Anno de Mil settecentos, e settenta e seis, nesta Cidade de Lisboa, e faza do Thezouro Geral do Erario Regio, Deo ppe o M.^{mo} e Ex.^{mo} Senhor Marques de Pombal, como Inspector Geral do dito Real Erario, a Joze Antonio Rebello, do Officio de Thezoureiro Geral das Juras, com o Ordenado de hum conto de reis por Anno, em que foi Provido por El. R. E. Y. V. Sso. Senhor, pelo seu Real Decreto de vinte, e nove de Outubro do presente Anno, copiado no Livro 6.^o do Registo Geral a f.^{ha} 44, com a obrigação de contribuir com a metade do mesmo Ordenado, ao Thezoureiro actual Antonio Ferreira da Silva, durante a sua vida: E de como o sobredito Joze Antonio Rebello, se obriga, e promete de baixo do juramento aos Santos Evangelhas, de cumprir bem, e fielmente as obrigações de seu Officio, na forma determinada pelo sobredito Real Decreto, assignou este Termo, também assignado por mim João Henrique de Souza, Escrivão da Thezouraria. Mor do Erario Regio. E em thedo juramento Marquez de Pombal.

João Henrique de Souza

Joze Antonio Rebello duvidoso

O MARQUÊS DE POMBAL
INSPECTOR GERAL DO ERÁRIO RÉGIO

Uma das figuras mais controversas da História portuguesa é sem dúvida o Marquês de Pombal que durante vinte e dois anos geriu com poderes discricionários a Nação no reinado de D. José.

Os historiadores, que se têm ocupado desta grande figura de estadista, dividem-se em duas facções antagónicas, sustentando uns que a sua acção foi prejudicial ao país e atentória dos mais nobres sentimentos humanos, dada a forma odiosa e desumana como administrou a justiça, defendendo outros que essa mesma actuação violenta foi ditada pelo veemente desejo de rapidamente fazer emergir a pátria do abissal atraso em que se encontrava, fazendo de Pombal o precursor das novas eras ligadas aos conceitos de despotismo iluminado, o cabouqueiro do progresso industrial e o grande reformador da instrução pública.

Sebastião José de Carvalho e Melo nasceu a 13 de Maio de 1699, oriundo de uma família de pequena nobreza e reduzida projecção, no palacete sito na antiga Rua Formosa, hoje Rua do Século, no edifício contíguo ao do jornal que deu o nome à rua.

Seu pai Manuel de Carvalho e Ataíde que morreu novo, tinha servido nas armadas da costa e fora capitão de cavalaria.

Até aos vinte anos esteve o futuro Marquês de Pombal a expensas de seu tio Paulo de Carvalho, arcipreste da Patriarcal e lente de Coimbra.

Aos vinte e sete anos assentou praça, mas a breve trecho reconheceu que no exército a selecção de valores estava condicionada a outros factores que não os méritos pessoais e por isso demitiu-se e após infrutíferas tentativas para ingressar no Conselho da Fazenda, foi viver para Soure, dedicando-se à administração dos seus bens rurais e ao estudo do Direito e da História, o que lhe valeu ser eleito sócio da Academia Real da História em 1733.

A partir de 1738 começam a surgir os primeiros documentos que atestam o início da sua vida pública, certamente apadrinhada por seu tio Paulo de Carvalho, que além duma profunda amizade que lhe votava, tinha reconhecido no sobrinho dotes superiores de inteligência, aliados a hábitos de estudo, apenas baseados no autodidatismo.

Em 1738 foi Carvalho e Melo nomeado ministro de Portugal em Londres. Contava então trinta e nove anos.

Instalado na capital londrina pode observar "in loco" o esforço empreendido pela Inglaterra para robustecer a sua estrutura económica, desenvolvendo toda a sua política nesse sentido.

Esta experiência terá mais tarde uma influência decisiva nos seus actos de estadista.

Desejoso de ver o seu país adoptar os novos processos mercantilistas e acertar o passo com as modernas potências, enviava para Portugal extensos e prolixos relatórios fruto da sua observação, que apenas mereciam de D. João V bocejos e gestos de enfado.

O monarca e os seus ministros receosos das teorias deste ousado diplomata que pretendia abalar o "statu quo" português, mandaram-no para Viena de Áustria, incumbido duma difícil e espinhosa missão diplomática, condenada "ab initio" ao insucesso, o que certamente contribuiria para destruir certas veleidades de reformador e estadista manifestadas pelo enviado português.

Durante dez anos viveu Carvalho e Melo no estrangeiro, tempo suficiente para alargar os horizontes do seu espírito e estabelecer confrontos entre esses meios evoluídos e a sua pátria onde pululava o atraso e a ignorância. Regressou em 1749.

Após a morte de D. João V ocorrida em 1750, a roda da fortuna girou bruscamente a favor de Carvalho e Melo, o qual foi nomeado por D. José para o cargo de Secretário de Estado do Reino.

Esta decisão do monarca deve ter sido muito influenciada por D. Luís da Cunha conhecido por Deão dos Embaixadores, que ao falecer deixara ao então príncipe D. José o seu "Testamento

Político", curioso documento no qual aconselha o futuro rei a escolher Carvalho e Melo para seu primeiro ministro.

A actividade e competência evidenciadas logo desde o início não desmentiram as esperanças que nele tinha depositado o velho embaixador e D. José confiante, verificando as extraordiná - rias qualidades do seu ministro, podia abandonar-se sem cuidados, o que muito o regozijava, aos seus prazeres favoritos: o teatro, a caça e a equitação.

A actividade de Pombal era estonteante: queria ver tudo, resolver tudo, mandar em tudo, concentrando nas suas mãos todo o poder, pretendendo remodelar numa acção brusca toda a vida do país.

A acção desenvolvida depois do terramoto de 1755 veio pôr à prova mais uma vez toda a sua capacidade organizativa.

Segundo Marcus Cheke, autor da obra "O Ditador de Portugal", "a actividade quase sobre-humanademonstrada por ele na ocasião do terramoto, pode justificar que se lhe chame génio na verdadeira acepção da palavra".

É para lamentar porém que a obra de Pombal, indubitavelmente grandiosa, seja ensombrada pelos requintes de crueldade que demonstrou no castigo infligido aos conjurados na tentativa de regicídio e ao pobre jesuíta Malagrida e mais tarde ao genovês João Baptista Pele, acusado de ter atentado contra a vida do próprio ministro.

Em 1760 é-lhe concedido o título de Conde de Oeiras e dez anos mais tarde o de Marquês de Pombal, passando o seu filho prímogénito a usar aquele primeiro título.

Por Carta de Lei de 22 de Dezembro de 1761 o então Conde de Oeiras extingue a Casa dos Contos que se revelara inoperante no decorrer dos anos para obviar à desordem que se estabelecera nos serviços da Fazenda, permitindo que os oficiais do Fisco enriquecessem escandalosamente à sombra do Tesouro e os contri - buíntes, usando de subterfúgios, se esquivassem ao pagamento dos impostos ou mesmo se eximissem a eles.

Em substituição do velho e ultrapassado organismo fiscalizador dos dinheiros públicos é criado o Erário Régio

Organizado segundo as normas orientadoras dos seus similares no estrangeiro, simbolizava bem o regime da centralização absoluta, pois todas as rendas da Coroa ali deviam dar entrada e dele sair também todas as despesas.

Presidia ao Erário, no cargo de Inspector Geral do Tesouro, o próprio Conde de Oeiras como "Lugar Tenente imediato à Real Pessoa de Sua Magestade", o qual tomou posse deste lugar a 11 de Janeiro de 1762, como se pode constatar pelo documento publicado em fac simile neste Boletim e cujo original se conserva inserto no livro de posses dos funcionários do Erário existente no Arquivo Histórico do Tribunal de Contas.

É curioso estabelecer o confronto, comparando os dois documentos publicados, entre a sua assinatura no primeiro, como Conde de Oeiras, que se manifesta firme, incisiva, traçada em 1762 e a outra irregular, incerta, acusando já a senilidade e decrepitude, traçada após 14 anos de trabalho extenuante, em que o estadista se empenhou a fundo, dando o melhor de si próprio no meio da incompreensão quase geral, apenas com o fito de transformar Portugal numa potência evoluída.

Pombal não auferia qualquer remuneração pelo cargo de Inspector Geral do Erário, limitando-se a receber apenas os honorários devidos como Secretário de Estado dos Negócios do Reino, que eram de 2. 400\$000 rs. por quartel.

Estabelecendo o regime de centralização das finanças públicas, no Erário, concentrava nas suas mãos todo o poder de expedir ordens no tocante a despesas, retirando aos tesoureiros e almoxarifes o direito de fazer pagamentos e aos Tribunais da Fazenda de arrecadar as receitas.

Enquanto anteriormente a Casa dos Contos se limitava a confrontar as receitas recebidas e as despesas pagas por cada agente do fisco, a partir da criação do Erário Régio o Tesouro recebia e pagava, tentando evitar descaminhos e nisto consistia a grande inovação introduzida.

Seguia-se, por ordem hierárquica, ao Inspector Geral o Tesoureiro Mór, sendo nomeado para este cargo o opulento argentário José Francisco da Cruz e como escrivão João Henriques de Sousa, Lente da Aula de Comércio, o qual elaborou o plano de escrituração do Erário em partidas dobradas, segundo o sistema mercantil usado no comércio, sendo-lhes confiadas as chaves do cofre.

Para efeitos fiscais era o Reino dividido em quatro contadorias, separadas e distintas, à frente das quais se encontrava um chefe ou contador-geral e quatro escriturários.

Como era necessário que fossem instruídos em cálculo mercantil, foram nomeados para contadores quatro negociantes: Antônio Caetano Ferreira, Luis José de Brito, Manuel Pereira de Faria e Baltazar Pinto de Miranda os quais, descurando por vezes a gerência dos seus próprios bens pessoais em prol dos interesses do Estado, apenas pelo módico ordenado de 4000 cruzados "deixarão hum exemplo bem digno de ser imitado por todos os seus successores".

Existia ainda um porteiro e 4 contínuos, perfazendo o quadro do pessoal um total de 33 unidades, o qual com o decorrer do tempo foi sendo aumentado por meio de novos escriturários e supranumerários, atingindo em 1827, 203 unidades.

Os lugares no Erário Régio deviam ser providos entre pessoas dotadas de boa índole e probidade, habilitadas com o curso da Aula de Comércio para possuírem os indispensáveis conhecimentos de Ciência do Cálculo, sendo cada conta entregue pelo menos a dois oficiais para liquidar.

Competia ao Tesoureiro Mór superintender no serviço das Contadorias Gerais e cada uma destas, todos os sábados, lhe apresentava um resumo da entrada e saída semanal, sendo a súmula das quatro feita pelo Escrivão e entregue no mesmo dia à noite ao Inspector do Erário que a apresentava por sua vez ao Soberano.

Traçámos em breves pinceladas o perfil desse famoso Marquês de Pombal cujo bi-centenário da sua morte foi comemorado no ano findo e que incontestavelmente apesar das sombras negras que

toldam o brilho da sua actuação tem um lugar à parte na galeria dos grandes estadistas europeus do seu tempo e foi o primeiro Inspector Geral do Erário, organismo avoengo do actual Tribunal de Contas.

Segundo a opinião abalizada de Jácome Ratton no seu livro "Recordações" o Erário Régio "foi um monumento que por si só eternizaria a memória d' El-Rei D. José" ou com mais veracidade do Marquês de Pombal.

Alzira Teixeira Leite Moreira

Chefe de Divisão do Arquivo-Geral e Biblioteca



ÍNDICE DE MATÉRIAS

0 GENERALIDADES

- 01 - Bibliografia. Catálogos - 1 e 2
- 02 - Bibliotecas - 3
- 07 - Jornais - 4

3 CIÊNCIAS SOCIAIS

- 31 - Estatística - 5 a 10
- 328 - Parlamento. Governo - 11 a 13
- 33 - Economia política - 14
- 331 - Trabalho. Emprego - 15 a 17
- 332 - Finanças privadas - 18
- 336 - Finanças públicas
- 336.126 - Execução do orçamento. Fiscalização - 19 a 23
- 34 - Direito. Legislação. Jurisprudência - 24 a 28
- 342 - Direito público. Direito constitucional - 29 e 30
- 35 - Administração pública - 31 e 32
- 351 - Legislação governamental. Serviços públicos. Legislação financeira
- 351.81 - Comunicações. Transporte - 33
- 351.85 - Cultura - 34
- 351.95 - Contencioso administrativo - 35
- 38 - Comércio
- 382 - Comércio externo - 36 e 37

6 CIÊNCIAS APLICADAS

- 625 - Estradas - 38
- 656 - Transportes - 39 e 40
- 657 - Contabilidade - 41
- 9 - Biografia. História
- 908 - Monografias regionais - 42

92 - Biografia - 43 a 45

946.9 - história de Portugal - 46 a 52

946.941 - História local - 53 e 54

PUBLICAÇÕES ENTRADAS NA BIBLIOTECA desde 1 de Janeiro
a 31 de Março de 1983

O GENERALIDADES

01 BIBLIOGRAFIA. CATÁLOGOS

1 - BOLETIM DE INFORMAÇÃO TÉCNICA.- Alfragide, 1982

Boletim de Informação Técnica/Instituto de Informática
do Ministério das Finanças e do Plano.- Alfragide:I.I.
M.F.P., Nov. 1982 (A.I, N.6)
B.T.C. E.20-98

2 - BOLETIM DE SUMÁRIOS E LEGISLAÇÃO - INSTITUTO DE INFORMÁTICA DO MINISTÉRIO DAS FINANÇAS E DO PLANO.- Alfragide, 1983

Boletim de sumários e legislação/Instituto de Informá
tica do Ministério das Finanças e do Plano.- Alfragide:
I.I.M.F.P., Jan.-Mar. 1983 (Nº 48)
B.T.C. E.20-98

02 BIBLIOTECAS

3 - FLORES, Alexandre Magno

Biblioteca Municipal de Almada: guia do leitor.- Alma
da: Câmara Municipal de Almada, 1982
B.T.C. E.4-179

07 JORNAIS

4 - BOLETIM INFORMATIVO - SECRETARIA REGIONAL DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. Açores, 1983

Boletim informativo/da Secretaria Regional da Adminis
tração Pública da Região Autónoma dos Açores.-
Açores: Centro de Informação e Documentação, Jan.1983
(A.I., Nº 1)
Bimestral
B.T.C. E.4-18D

3 CIÊNCIAS SOCIAIS

31 ESTATÍSTICA

- 5 - BOLETIM MENSAL DAS ESTATÍSTICAS DO COMÉRCIO EXTERNO. Lisboa, 1982

Boletim mensal das estatísticas do comércio externo.- Lisboa: Instituto Nacional de Estatística, 1982 (A.3, Nº 4-9)

B.T.C. E.5-128

- 6 - BOLETIM MENSAL DE ESTATÍSTICA. Lisboa, 1982

Boletim mensal de estatística: Continente, Açores e Madeira.- Lisboa: Instituto Nacional de Estatística, 1982 (A.54, N.8-10)

B.T.C. E.5-128

- 7 - BOLETIM TRIMESTRAL DAS ESTATÍSTICAS MONETÁRIAS E FINANCEIRAS. Lisboa, 1982

Boletim trimestral das estatísticas monetárias e financeiras: Continente, Açores e Madeira.- Lisboa: Instituto Nacional de Estatística, 1982 (A.VIII, N.2/3)

B.T.C. E.5-93/D

- 8 - Estatísticas das contribuições e impostos/Instituto Nacional de Estatística. Continente, Açores e Madeira, 1979.- Lisboa: I.N.E., 1980: - XXVII, 125 p.

B.T.C. E.5-93

- 9 - ESTATÍSTICAS MONETÁRIAS E FINANCEIRAS

Estatísticas monetárias e financeiras: Continente e Regiões Autónomas dos Açores e da Madeira, 1981.- Lisboa Instituto Nacional de Estatística (D.L. 1981).- XV, 135 p.

B.T.C. E.13-193

10 - INQUÉRITO PERMANENTE AO EMPREGO

Inquérito permanente ao emprego: Portugal (Continente)
2º semestre 1981.- Lisboa: Instituto Nacional de Est
atística, 1982.- XVII, 35 p.

B.T.C. E.5-137

328 PARLAMENTO. GOVERNO

11 - PORTUGAL. Provedor de Justiça à Assembleia da República,
1931 ((Eudoro Pamplona Corte-Real))

6º Relatório/do Provedor de Justiça à Assembleia da Re
pública.- Lisboa: Serviço do Provedor de Justiça, 1981
- 183 p.

B.T.C. E.12-182

12 - PORTUGAL. Vice-Primeiro Ministro, 1982 (Diogo Freitas do
Amaral)

A proposta do Governo sobre o estatuto do objector de
consciência: intervenção/do Vice-Primeiro Ministro e Mi
nistro da Defesa Nacional Prof. Diogo Freitas do Amaral
na Assembleia da República, em 5 de Janeiro de 1982. -
Lisboa: Ministério da Defesa Nacional, 1982.- 14 p.

B.T.C. E.13-184A

13 - PORTUGAL. Vice-Primeiro Ministro, 1982 (Diogo Freitas do
Amaral)

As forças armadas no estado democrático: intervenção/
do Vice-Primeiro Ministro da Defesa Nacional Prof.
Diogo Freitas do Amaral no programa "1ª página" da RTP
-1, em 5 de Novembro de 1981.- Lisboa: Ministério da
Defesa Nacional, 1982.- 33,1 p.

B.T.C. E.13-184A

33 ECONOMIA POLÍTICA

14 - ESTUDOS DE ECONOMIA. Lisboa, 1982

Estudos de Economia: revista do Instituto Superior de

Economia/dir. A. Simões Lopes, Jul.-Dez. 1982 (V.2, N.4, V.3, N.1)
B.T.C. S.S.

331 TRABALHO. EMPREGO

15 - BOLETIM DO TRABALHO E EMPREGO, 1982

Boletim do Trabalho e Emprego.- Lisboa: Serviço de Informação Científica e Técnica - Min. do Trabalho, Jan.-Março 1983 (1ª série, V.50, N.ºs 1-8, 10)
B.T.C. E.20-62

16 - PAIVA, João Miguel Sousa

Os salários convencionais em alguns sectores de actividade/João Miguel Sousa Paiva.- Lisboa: Min. do Trabalho, 1982.- 58 p.--(Col. Estudos - Série B "Rendimentos", 1)
B.T.C. E.20-64B

17 - RELATÓRIOS E ANÁLISES - MINISTÉRIO DO TRABALHO.- Lisboa: M.T., 1982.- 4 folhs.

1 folh.: Conflitos colectivos de trabalho, 1º trimestre de 1980.- 29 p.; diagr.

2 - 3 folhs.: Relatório de conjuntura, 2º - 3º trimestres de 1981.- 2 folhs.: diagr.

1 A folh.: Regulamentação colectiva do trabalho: análises dos processos dos instrumentos publicados em 1979: diagr.

B.T.C. E. 20-63

332 FINANÇAS PRIVADAS

18 - PORTUGAL. Leis, decretos, etc..

Legislação monetária, financeira e cambial, 1982. - Lisboa: Banco de Portugal, 1982 (3º trimestre)
B.T.C. E.13-165

336 FINANÇAS PÚBLICAS

336.126 EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO. FISCALIZAÇÃO

19 - BOLETIM DA INSPECÇÃO GERAL DE FINANÇAS. Lisboa, 1982

Boletim da Inspeção-Geral de Finanças.- Lisboa: I.G. F., Dez. 1982 (A.1, N.2)
B.T.C. E.1-141

20 - CRUJEIRA, Carlos A. e outros

Gestão pública: uma abordagem integrada/Carlos A. Crujeira, José M. de Lucena, Ivo Pinho, Alberto Camacho.- Lisboa: Editora Portuguesa de Livros Técnicos e Científicos, Lda, 1982.- 375 p.: 1 fl. desdobr. (Economia e Gestão, 1)
B.T.C. E.1-113

21 - DECLARACION DE LIMA SOBRE LAS LINEAS BASICAS DE LA FISCALIZACION

Declaracion de Lima sobre las lineas basicas de la fiscalizacion.- Viena: INTOSAI, (s.d.).- 52 p. Edição quadrilingue: inglês, francês, espanhol e alemão
B.T.C. E.1-114

22 - REVISTA DE CONTROL FISCAL. Caracas (Venezuela), 1982

Revista de control fiscal: organo de la Contraloria General de la Republica/dir. Manuel Rafael Fivero.- Caracas: Contraloria General de la República, Abril-Junio, 1982 (A.23, N.105)
B.T.C. S.S.

23 - REVISTA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO MUNICIPIO DE S. PAULO. S.Paulo (Brasil) 1982

Revista do Tribunal de Contas do Município de S. Paulo. S. Paulo: T.C., Dez. 1982 (A.12, N.36)
Quadrimestral
B.T.C. S.S.

34 DIREITO. LEGISLAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA

24 - BOLETIM DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA. Lisboa, 1982

Boletim do Ministério da Justiça.- Lisboa: M.J., Jul.
- Out. 1982 (N.318-319)
B.T.C. S.S.

25 - BOLETIM DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA. Lisboa, 1982

Boletim do Ministério da Justiça: Legislação.- Lisboa
M.J., Jun.-Ag.1982 (Supl. aos Bols. N.318-319)
B.T.C. S.S.

26 - Dicionário de legislação e jurisprudência (A.55, N^{os} 584-592)

B.T.C. S.S.

27 - ÍNDICE DE LEGISLAÇÃO (s.l.), 1982

Índice de legislação, ordenação por rubricas dos sumá
rios de todas as leis, decretos, portarias, assentos,
avisos, rectificações, etc.- (s.l.: s.n.) Jul.-Out.
1982 (A.17, N.209-212) (Viseu: Tip. Guerra)
Gab. Est.

28 - REVISTA DE LEGISLAÇÃO E JURISPRUDÊNCIA. Coimbra, 1982

Revista de legislação e jurisprudência/dir. João de
Matos Antunes Varela.- Coimbra: (s.n.), 1982 (Coimbra:
:Coimbra Editora, 15 Maio-1 Jul. 1982 (A.115, N.3699
-3703)
B.T.C. S.S.

342 DIREITO PÚBLICO. DIREITO CONSTITUCIONAL

29 - PORTUGAL. Comissão Constitucional

Pareceres/da Comissão Constitucional.- Lisboa: Impr.
Nacional-Casa da Moeda, 1982.- 1v.
12^o v.: Do n^o 10/80 ao n^o 19/80.- 1982.- 235 p.
B.T.C. E.13-217

347 DIREITO CIVIL

30 - PORTUGAL. Leis, decretos, etc.

Alterações ao Código Civil. Decreto-Lei nº 496/77, de 25 de Novembro.- Porto: Porto Editora, Lda.-Coimbra: Livr. Arnado, Lda.; Emp. Lit. Fluminense, Lda, 1977.- 168 p.

B.T.C. S.S.

35 ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

31 - ORGANIZAÇÃO & INFORMÁTICA. Lisboa, 1982

Organização & Informática: boletim informativo da Direcção-Geral da Organização Administrativa.- Lisboa: D.G.O.A., Jul.-Out. 1982 (A.7, N.3)

B.T.C. E.13-175

32 - REVISTA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. Lisboa, 1982

Revista da Administração Pública.- Lisboa: Secretaria de Estado da Administração Pública, Abr.-Jun.. 1982 (A.5, N.16)

Trimestral

Srs. Cons. Pres., Cons^{es}. M. Dinis, Luis de Almeida, Dir.-Ger., Sub-Dir. Ger. e Cont.res Gerais.

351 LEGISLAÇÃO GOVERNAMENTAL. SERVIÇOS PÚBLICOS.
LEGISLAÇÃO FINANCEIRA

351.81 COMUNICAÇÕES. TRANSPORTE

33 - LEGISLAÇÃO-DIRECÇÃO-GERAL DA MARINHA DE COMÉRCIO

Legislação-Dir.-Geral da Marinha de Comércio.- Lisboa: D.G.M.C., Centro de Documentação e Informação, Abr.-Maio 1982 (V.6, N.8, 10-11)

B.T.C. E.20-84

351.85 CULTURA

34 - PORTUGAL. Leis, decretos, etc.

Legislação sobre cultura: 25 de Abril de 1974 a 31 de Dezembro de 1980.- Lisboa: Min. da Cultura e Coordenação Científica - Dir. Geral dos Serviços Centrais - Divisão de Documentação, 1982.- 174,1 p.

B.T.C. E.1-113

351.95 CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

35 - ACÓRDÃOS DOUTRINAIS DO SUPREMO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO.
Lisboa, 1982

Acórdãos doutrinais do Supremo Tribunal Administrativo:

Índice geral alfabético, ano XXI/dir. António Simões Correia. - Lisboa: A.S.C., (s.d.) (A.20, N.251)

B.T.C. S.S.

38 COMÉRCIO

382 COMÉRCIO EXTERNO

36 - COMUNIDADE EUROPEIA. Lisboa, 1982

Comunidade europeia/Bureau de imprensa e de informação da Comissão das Comunidades Europeias em Lisboa.- Lisboa: B.I.I.C.O.E.L., Dez. 1982 (A.III, Nova série, N.2) Mensal

B.T.C. E.1-35

37 - DOSSIER, O, DA EUROPA-COMISSÃO DAS COMUNIDADES EUROPEIAS.
Lisboa: Bureau da Comissão das Comunidades Europeias, 1982.- folhs.

5 folh.: As instituições da Comunidade Europeia, 1982

6 folh.: A indústria textil na Comunidade, 1982

7 folh.: Uma estratégia europeia para a energia, 1982

8 folh.: A Comunidade e os auxílios de Estado às empresas, 1982

9 folh.: A política social da Comunidade, 1982

10 folh.: A Comunidade e a fome no mundo, 1982

11 folh.: A política europeia do aço, 1982

12 folh.: A Comunidade e os países e regiões do Mediterâ
râneo, 1982

B.T.C. E.1-93

6 CIÊNCIAS APLICADAS

625 ESTRADAS

38 - BOLETIM DA JUNTA AUTÓNOMA DE ESTRADAS.- Lisboa, 1982

Boletim da Junta Autónoma de Estradas.- Lisboa, Min .
da Habitação e Obras Públicas, Set. 1982

Mensal

B.T.C. E.20-145

656 TRANSPORTES

39 - ADMINISTRAÇÃO GERAL DO PORTO DE LISBOA

Relatório e elementos estatísticos 1981/Administração
Geral do Porto de Lisboa.- Lisboa: A.G.P.L., (s.d.).-
139 p.

B.T.C. E.7-134A

40 - BOLETIM DO PORTO DE LISBOA, 1982

Boletim mensal do Porto de Lisboa.- Lisboa: Administraç
ção-Geral do Porto de Lisboa, Maio-Dez. 1982 (N^{os} 251-
-254)

B.T.C. E.7-134

657 CONTABILIDADE

41 - BORGES, A.e outros

Elementos de Contabilidade Geral/A. Borges, A. Rodri -
gues e R. Rodrigues.- 3^a ed.- Lisboa: Rei dos Livros,
1982

Gab. Estudos

9 BIOGRAFIA. HISTÓRIA

908 MONOGRAFIAS REGIONAIS

42 - BEIRA ALTA. Viseu, 1982

Beira Alta: revista trimestral para a publicação de documentos e estudos relativos às terras da Beira Alta/dir. Alexandre Alves.- Viseu: Assembleia Distrital, 3º trim. 1982 (V.XLI, Fasc. 3)

B.T.C. E.10-268

92 BIOGRAFIA

43 - DEMOCRACIA E LIBERDADE. Lisboa, 1982

Democracia e Liberdade/dir. Eugénio Anacoreta Correia.- Lisboa: Instituto Amaro da Costa, Nov.-Dez. 1982 (N.25)

Bimestral

B.T.C. S.S.

44 - ELOGIO DO PROF. DOUTOR RUI DE AZEVEDO

Elogio do Prof. Doutor Rui de Azevedo.- Lisboa: Academia Portuguesa da História, 1981.- 92,1 p.: il.

B.T.C. E.10-570

45 - MARQUÊS DE SÁ DA BANDEIRA

Marquês de Sá da Bandeira: 1º centenário da sua morte.- Lisboa: Academia Portuguesa da História, 1981.- 73,1 p.

B.T.C. E.10-569

946.9 HISTÓRIA DE PORTUGAL

46 - ANAIS.- Lisboa, 1981

Anais/Academia Portuguesa da História.- Lisboa: A.P.H., 1981 (II série, v.27)

B.T.C. E.Preta-9

47 - ANIVERSÁRIO, 850º, DA BATALHA DE SÃO MAMEDE

850º Aniversário da batalha de São Mamede (24 de Junho de 1128): comemoração académica.- Lisboa: Academia Portuguesa da História, 1981.- 64,2 p.: map.; il.

B.T.C. E.10-574

48 - BRÁSIO, Pe. António, compil. e anot.

Monumenta Missionária Africana: África Ocidental (1656-1665)/coligida e anotada pelo Pe. António Brásio.- Lisboa: Academia Portuguesa da História, 1981.- XXXV, 610 p. V. 12: 1656-1665

B.T.C. E.6-443

49 - CASTELO-BRANCO, Fernando

Fontes para a História do Antigo Ultramar Português: Arquivo Histórico Ultramarino e Nacional da Torre do Tombo, Bibliotecas da Ajuda, Nacional, da Sociedade de Geografia de Lisboa e da Academia das Ciências de Lisboa/Fernando Castelo-Branco.- Lisboa, Academia Portuguesa da História, 1982.- 264,1 p.

2º v.: S. Tomé e Trindade

B.T.C. E.10-572

50 - PAIXÃO, V.M. Braga

A terceira imperatriz/V.M. Braga Paixão

"Anais da Academia Portuguesa da História, Lisboa (II série, V.27) 1982, p. 181-192

B.T.C. E. Preta 9

51 - PRESENÇA DE PORTUGAL NO MUNDO. Lisboa, Out. 16-20, 1978

Actas do Colóquio.- Lisboa: Academia Portuguesa da História, 1982.- XII, 554,3 p.

B.T.C. E.10-572

52 - ZURARA, Gomes Eanes de

Crónica dos feitos notáveis que se passaram na conquista da Guiné por mandado do Infante D. Henrique/por Gomes Eanes de Zurara; versão actualizada do texto (por) Torquato de Sousa Soares.- Lisboa: Academia Portuguesa da História, 1981.- 610 p.

B.T.C. E.10-573

946.941 HISTÓRIA LOCAL

53 - CAETANO, Marcelo

A administração municipal de Lisboa durante a 1ª dinastia (1179-1383) /Marcelo Caetano.- Lisboa: Academia Portuguesa da História, 1981.- 2,179 p.: il.

B.T.C. E.10-571

54 - CASTELO BRANCO, Fernando

Lisboa vista pelos estrangeiros (até aos fins do século XVIII)/Fernando Castelo Branco

"Presença de Portugal no Mundo: actas do Colóquio, p. 355-390

B.T.C. E.10-572

Porquê uma Comunidade Europeia?

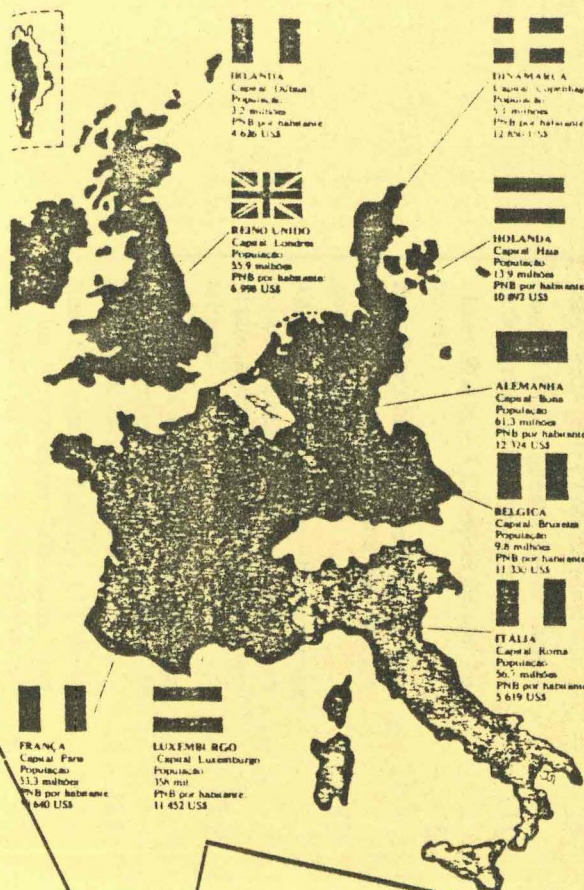
A criação da Comunidade deveu-se a Homens de Estado que quiseram assegurar à Europa uma paz duradoura e a reconstrução da economia depois das destruições da II Guerra Mundial.

Hoje, depois de mais de duas décadas de experiência, os países membros da Comunidade consolidaram já o hábito da cooperação em todos os domínios, e encaminham-se decididamente para formas mais estreitas de trabalho em comum.

Mas num mundo em plena mutação, numa época de declarada crise económica, encontramos-nos colocados diante de novos desafios. Como reduzir o desemprego, e a inflação? Como garantir os abastecimentos em energia e matérias-primas? Como assegurar o futuro da nossa indústria e agricultura? Como reduzir as desigualdades regionais e sociais? Como proteger os consumidores dos abusos da sociedade de consumo?

E mais: Como lutar contra a poluição que degrada o ambiente? Em que bases assentar as relações da Europa com os outros países industrializados e com os países em vias de desenvolvimento?

A Comunidade, hoje composta de nove membros, dez em 1 de Janeiro de 1981, num futuro breve doze, considera que só agindo em conjunto poderá responder cabalmente a estes desafios.



BIBLIOTHEQUE DE DROIT PUBLIC
pour le service de
MARCEL WAINE
Tome 100

L'AGENT JUDICIAIRE
DU TRÉSOR PUBLIC
par
GERARD ROUSSEAU
Président du Tribunal
de Commerce de Paris

PARIS
LIBRAIRIE GÉNÉRALE DE DROIT ET DE JURISPRUDENCE
R. PICHON ET R. DURAND-AUZIAS
20, Rue Soufflot, 20
1961

REVISTA
DO
TRIBUNAL DE CONTAS
DO
ESTADO DE SÃO PAULO

JURISPRUDENCIA
E
INSTRUÇÕES



CENTRE EUROPÉEN UNIVERSITAIRE — 3, Place Saint-James — NANCY

LES FINANCES
DANS
LES ÉTATS SOCIALISTES

par
LEON KUROWSKI
Professeur à la Faculté de Droit
de Nancy

PARIS
LIBRAIRIE GÉNÉRALE DE DROIT ET DE JURISPRUDENCE
R. PICHON ET R. DURAND-AUZIAS
20, Rue Soufflot, 20
1962

I - DOCTRINE

- Autonomie du Tribunal de Comptes en Belgique
par Prof. René Lévesque

II - CADRENO DE

PARCER

- Causas de Compendio: Fatores e condições

PARCERES SOBRE CONSULTAS

- Voto de representação, da interpretação de

ACORDAOS

Integridade de caráter: Fatores de caracterização em um caso

Laudo: Integridade de caráter

DELIBERAÇÕES

- Representação: Fatores de caracterização em um caso

- Análise e interpretação: Fatores de caracterização em um caso

- Análise e interpretação: Fatores de caracterização em um caso

- Análise e interpretação: Fatores de caracterização em um caso

III - CADRENO MUNICIPAL

ACORDAOS

- Representação: Fatores de caracterização em um caso

- Análise e interpretação: Fatores de caracterização em um caso

- Análise e interpretação: Fatores de caracterização em um caso

- Análise e interpretação: Fatores de caracterização em um caso

- Análise e interpretação: Fatores de caracterização em um caso

- Análise e interpretação: Fatores de caracterização em um caso

- Análise e interpretação: Fatores de caracterização em um caso

- Análise e interpretação: Fatores de caracterização em um caso

- Análise e interpretação: Fatores de caracterização em um caso

- Análise e interpretação: Fatores de caracterização em um caso

- Análise e interpretação: Fatores de caracterização em um caso

- Análise e interpretação: Fatores de caracterização em um caso

- Análise e interpretação: Fatores de caracterização em um caso

- Análise e interpretação: Fatores de caracterização em um caso

- Análise e interpretação: Fatores de caracterização em um caso

- Análise e interpretação: Fatores de caracterização em um caso

- Análise e interpretação: Fatores de caracterização em um caso

- Análise e interpretação: Fatores de caracterização em um caso

PUBLICAÇÕES
RECEBIDAS

Editorial.— El Control Fiscal en el Estado Moderno.	Pág. 7
Hector Grisanti Luciani.— Los Proyectos de Enmienda Constitucional.	23
Gustavo Pinto Cohen.— Vision General de la Agricultura Venezolana.	73
Elmer Staats.— La Inspección de Auditoría.	83
José Pedro Montero Traibel.— La Asociación Latinoamericana de Integración (A.L.A.D.I.)	97
Allan R. Brewer Carías.— Comentarios sobre el alcance y ámbito de la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos.	113
Guillermo Fariñas.— Tributos Petroleros Venezolanos, antes y después de la Nacionalización de tal industria.	135
Juan Colmenares Zuleta.— El Control de las Percepciones Tributarias contempladas en la Ley de Impuesto Sobre Sucesiones, Donaciones y demás ramos conexos.	149
Idelfonso Leal.— Memoria-Histórica Política-Geográfica. Relativa a la Independencia de América, publicada en 1872, por el antiguo intendente de Venezuela Don Vicente Basadre.	155

LIMA DECLARATION
OF GUIDELINES
ON AUDITING
PRECEPTS

DÉCLARATION
DE LIMA
SUR LES LIGNES
DIRECTRICES
DU CONTRÔLE
DES FINANCES
PUBLIQUES

DECLARACIÓN
DE LIMA
SOBRE
LAS LÍNEAS
BÁSICAS
DE LA
FISCALIZACIÓN

DEKLARATION
VON LIMA
ÜBER DIE LEITLINIEN
DER FINANZKONTROLLE

EXPERIENTIA MUTUA
OMNIBUS PRODEST

INTOSAI

CONTROL FISCAL

DEMOCRACIA E LIBERDADE

PUBLICAÇÃO BIMESTRAL

Propriedade: IDL — INSTITUTO AMARO DA COSTA

Administração, Direcção e Redacção — Av. Duque de Loulé, 94-4.º, Dt.º — 1000 Lisboa

DIRECTOR:

Eugénio Anacoreta Correia

CHEFE DE REDACÇÃO:

Maria Luisa Couto-Soares

CONSELHO DE REDACÇÃO: *António Montenegro, Fausto de Quadros, José Aranha, José Luis da Cruz Vilaça, José Ribeiro e Castro, Roberto Carneiro, Soma Godinho*

COLABORARAM NESTE NÚMERO:

António Pavan

Roberto Papini

Jean-Louis Allard

Joaquim Cerqueira Gonçalves

Maria Luisa Couto-Soares

Etienne Borne

Mário Emilio F. Bigotte Chorão

Arturo Ponsati

Pinharanda Gomes

As opiniões expostas nos trabalhos são da exclusiva responsabilidade dos seus autores.

Capa *Luis Moreira*

ASSINATURA (6 números)

Portugal

Geral 500\$00

Estudantes 400\$00

Europa

Geral 700\$00

Estudantes 600\$00

Outros países

Geral 750\$00

Estudantes 700\$00

PREÇO POR NÚMERO: 100\$00



Toda a correspondência destinada à Revista — incluindo pedidos de assinatura, pagamentos e outras informações — deve ser dirigida ao:

DEPARTAMENTO EDITORIAL E DE INFORMAÇÃO DO IDL

Av. Duque de Loulé, 94-4.º, Dt.º — 1000 Lisboa

Telef. 54 53 93

Composto e Impresso nas Oficinas Gráficas da Rádio Renascença

Distribuidora: Diórnal

Av. Joaquim António de Aguiar, 64-2.º-Dt.º — 1000 Lisboa

NOVEMBRO / DEZEMBRO 1982

I. EDITORIAL — *Maria Luisa Couto-Soares* 5

Nota Introdutória 7

Carta de João Paulo II ao Reitor da Universidade Católica do Sagrado Coração — Milão 9

II. ESTUDOS / ENSAIOS

Maritain: Introdução bibliográfica — *António Pavan* 13

Humanismo Integral: o Eco de uma grande sugestão — *Roberto Papini* 23

A Pessoa Humana e a Liberdade — *Jean-Louis Allard* 35

Jacques Maritain: um sentido de diferença e de universalidade — *Joaquim Cerqueira Gonçalves* 49

Jacques Maritain e a Cultura Moderna — *Maria Luisa Couto-Soares* 55

A Filosofia Política de Jacques Maritain — *Etienne Borne* 63

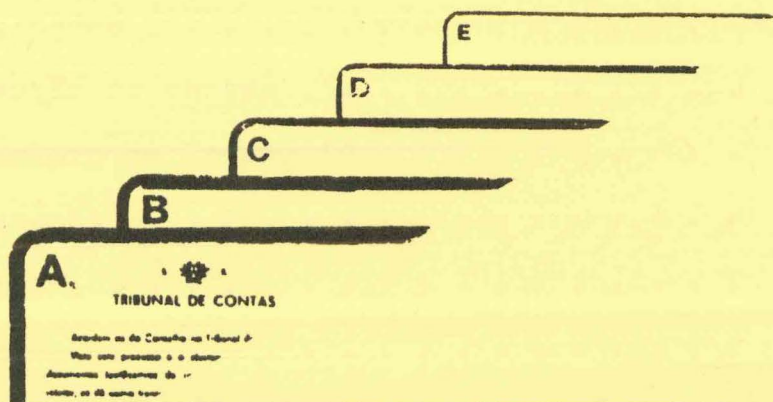
Sobre o Fundamento dos Direitos Humanos em Maritain — *Mário Emilio F. Bigotte Chorão* 77

Cultura Educação e Democracia no Pensamento de Jacques Maritain — *Arturo Ponsati* 85

Jacques Maritain e o pensamento político português — *Pinharanda Gomes* 101

III. DOCUMENTOS

Páginas de Raíssa e Jacques Maritain 125



FICHEIRO DE JURISPRUDÊNCIA

ÍNDICE DOS EXTRACTOS DAS DECISÕES E RESOLUÇÕES TOMADAS PELO TRIBUNAL DE CONTAS INSERTOS NO PRESENTE BOLETIM TRIMESTRAL

PROCESSOS DE CONTAS

	Pag.
Acórdão	5-6
Acta	1
Acumulações	3
Aprovação de contas	6
Assembleia de Freguesia	1
Competência	3
Compras	6
Contas	1
Despesas	1;3-4;6
Emolumentos	4
Gratificações	4
Infracção financeira	2;6
Juntas de Freguesia	4
Membro do Governo	2
Orçamento	5
Rectificação	2;5
Reposição	2
Responsabilidade financeira	5
Tesoureiro	2

PROCESSOS DE VISTO

	Pag
Acesso	32
Além Quadro	19;32
Anotação	19
Anulação de visto	32
Aplicação das leis no tempo	32
Assessor	7
Biblioteca Nacional	19
Cabimento de verba	7
Carreiras	7-8;19;
	33
Carreiras horizontais	20
Carreiras técnicas	8
Chefe de repartição	20
Chefe de secção	8;20
Classificação de serviço	20;33
Competência	9
Concursos	9-10;20-
	21;33-34
Contagem de tempo de serviço	10 ; 34;37
Contrato	21
Diploma de provimento	22
Direcção Geral de Previdência	11
Direcção Geral do Comércio Alimentar	11
Direitos adquiridos	11
Emolumentos	22

	Pag.
Escriturário-dactilógrafo	11-12;34
Forças Armadas	12;23
Funcionários	12;23-24
Função Pública	23;34
Técnico	24
Instituto de Apoio à Transformação e Comer- cialização dos Produtos Agrários e Alimen- tares	13
Interinidade	12;24;34
Inutilidade da lide	34
Lei permissiva	13;25
Licença	14
Macau	13;35
Ministério da Cultura	35
Ministério da Habitação e Obras Públicas .	25
Oficiais administrativos	35
Pessoal técnico superior	14
Promoções	14;25
Provimento	14-15;26
Reapreciação	15-16;26
Reclamação	36
Requisição	16;36
Requisitos pessoais	36
Retroação	27
Reversão de vencimento de exercício	16-17;27- 29;37
Substituição	16

Supremo Tribunal Administrativo	Pag. 29
Suspensão da instância	17
Técnico superior	29-30
Técnicos superiores de saúde	30
Telefonista	30
Tempo de serviço. Vide contagem de tempo de serviço	
Transferências	30
Transição	17; 31; 37-38
Universidades	18
Vencimento de exercício. Vide reversão de vencimento de exercício	
Vinculação	18
Visto	18; 31

CONSULTAS

Despesas	39
--------------------	----

JURISPRUDÊNCIA
DO
TRIBUNAL DE CONTAS

Seleccção de extractos das decisões e resoluções tomadas pelo Tribunal de Contas, de Outubro a Dezembro de 1982, elaborada pelo Exm^o Snr. Conselheiro Presidente

PROCESSOS DE CONTAS

A C T A

A falta da Acta da assembleia da freguesia que aprova a conta não integra infracção financeira.

(Acórdão de 12 de Outubro de 1982. Processo 6 472/78)

ASSEMBLEIA DE FREGUESIA

Constitue mera irregularidade, sem qualquer repercussão financeira na conta a falta de aprovação da conta de gerência pela Assembleia de Freguesia

(Acórdão de 19 de Outubro de 1982. Processo 6 372/78)

C O N T A

Não se destinando a satisfazer encargos com serviços da autarquia, não devem constar da conta das Juntas de Freguesia os subsídios concedidos pelos IFAS, para entrega por intermédio da junta.

(Acórdão de 26 de Outubro de 1982. Processo 164/81)

DESPESA

Na realização das despesas deve ter-se em atenção a importância orçamentada para a respectiva rubrica, que não poderá ser excedida.

(Acórdão de 26 de Outubro de 1982. Processo 1 817/80)

INFRACÇÃO FINANCEIRA

Integra infracção financeira o fazer suportar a despesa por dotação de verba imprópria.

(Acórdão de 19 de Outubro de 1982. Processo 3 115/77)

MEMBRO DO GOVERNO

O Tribunal de Contas é competente para conhecer das contas de gerência exercida pelo Membro do Governo no Fundo do Teatro, já que actuou despido da qualidade de agente político, como agente de facto, actuando por imperativo do bem público e face às circunstâncias.

(Acórdão de 19 de Outubro de 1982. Processo 61/78)

RECTIFICAÇÃO

Trata-se de mero erro material, a rectificar pelos juízes que firmaram o anterior acórdão, o ter-se indicado como data do fim da gerência o dia 30 de Novembro, em vez de 1 de Dezembro do mesmo ano.

(Acórdão de 26 de Outubro de 1982. Processo 547/81)

REPOSIÇÃO

A tardia reposição dos saldos de dotações orçamentais tem-se por sanada, logo que se efectue tal reposição.

(Acórdão de 6 de Outubro de 1982. Processo 1 556/80)

TESOUREIRO

Assinada a conta de gerência pelo tesoureiro de instituição, que entretanto faleceu, pode a conta de gerência ser também considerada como conta de responsabilidade do tesoureiro.

(Acórdão de 12 de Outubro de 1982. Processo 1 922/72)

ACUMULAÇÕES

O limite à remuneração por acumulação, durante o ano de 1968, abrangia o exercício das funções de professor da Faculdade de Medicina em acumulação com a de médico de Hospital dependente de uma Misericórdia.

(Acórdão de 16 de Novembro de 1982. Processo 168-A/68)

ACUMULAÇÕES

A retenção das importâncias a mais abonadas, no caso de acumulações, deve processar-se em relação ao cargo acumulado do causador do excesso.

(Acórdão de 16 de Novembro de 1982. Processo 168-A/68)

COMPETÊNCIA

Não cabe na competência do Tribunal de Contas a apreciação da falta da cópia da acta da assembleia de freguesia que aprovou as contas de gerência da junta.

(Acórdão de 23 de Novembro de 1982. Processo 6 527/78)

DESPESAS

Integra infracção financeira o fazer despesas para além da dotação orçamental.

(Acórdão de 2 de Novembro de 1982. Processo 602/80)

DESPESAS

A lei estabelece como regra a revelação de infracção financeira que consiste no pagamento duma despesa por verba diferente da que lhe respeita na classificação inscrita na respectiva divisão do orçamento.

(Acórdão de 2 de Novembro de 1982. Processo 1 661/72)

DESPESAS

Não é legalmente possível realizar despesas, seja qual for a sua natureza, não incluídas em orçamento aprovado pela entidade competente, constituindo as respectivas dotações orçamentais o limite máximo a utilizar na sua realização

(Acórdão de 2 de Novembro de 1982. Processo 2 465/80)

EMOLUMENTOS

Para o cálculo dos emolumentos é de atender também aos "juros de moratória" e "juros de empréstimo" que não podem deixar de se considerar receitas de participação, seja qual for o destino que depois lhes venha a ser dado.

(Acórdão de 16 de Novembro de 1982. Processo 1 178/80)

GRATIFICAÇÕES

Vencimentos e gratificações só podem ser concedidos desde que previamente fixados ou autorizados por lei.

(Acórdão de 16 de Novembro de 1982. Processo 1 582/80)

JUNTA DE FREGUESIA

A falta da cópia da acta da assembleia de freguesia que aprovou as contas da junta não integra infracção ou irregularidade financeira.

(Acórdão de 23 de Novembro de 1982. Processo 6 386/78)

ORÇAMENTO

Comete infracção financeira a Junta de Freguesia que, durante o ano, realiza e cobra receitas sem orçamento.

Na aplicação da sanção e determinação do grau de culpa, há que atender a que a elaboração do orçamento cabia aos autarcas do ano anterior.

(Acórdão de 2 de Novembro de 1982. Processo 2 465/80)

RECTIFICAÇÃO

Deve ser rectificado, por acórdão, o anterior em que se indicou, por erro de escrita, um saldo não coincidente com toda a documentação do processo.

(Acórdão de 23 de Novembro de 1982. Processo 1 031/80)

RESPONSABILIDADE FINANCEIRA

- I. - A absolvição em processo crime não leva à irresponsabilidade financeira do autor do alcance.
- II. - É ao Tribunal de Contas que compete fundamentar a existência de culpa e a sua qualificação ou graduação para condenar os responsáveis.

(Acórdão de 9 de Novembro de 1982. Processo 2 441/79)

ACÓRDÃO

Deve ser rectificado, por acórdão, o acórdão ainda que transitado, quando se torne necessário repor a realidade contabilística e tiver havido erro de escrita.

(Acórdão de 14 de Dezembro de 1982. Processo 2 411/81)

ACÓRDÃO

Deve ser anulado o acórdão transitado desde que se mostre que matéria de facto essencial não contava dos documentos em que se alicerçou, não fornecendo então ao processo elementos de informação precisos e correctos.

(Acórdão de 14 de Dezembro de 1982. Processo 171-A)

APROVAÇÃO DE CONTAS

As contas só podem ser aprovadas, depois de devidamente encerradas.

É irregular, embora não integre infracção financeira, a aprovação pela Junta de Freguesia da conta em sessão de 3 de Dezembro do ano económico a que dizia respeito.

(Acórdão de 7 de Dezembro de 1982. Processo 6 416/78)

COMPRAS

A compra de material de montante superior a 2.500\$00 por ajuste verbal, sem prévia consulta a três fornecedores, integra infracção financeira.

(Acórdão de 21 de Dezembro de 1982. Processo 352/75)

DESPESAS

Integra violação da lei a errada classificação orçamental.

(Acórdão de 21 de Dezembro de 1982. Processo 919/80)

INFRACÇÃO FINANCEIRA

A existência em cofre do saldo de dotações orçamentais não integra infracção financeira.

(Acórdão de 21 de Dezembro de 1982. Processo 1 965/72)

PROCESSOS DE VISTO

ASSESSOR

Pode ser provido como assessor da Direcção-Geral das Contribuições e Impostos quem completou 9 anos na carreira antes do início das provas de concurso, embora os não tivesse à data da abertura do concurso.

(Sessão de 19 de Outubro de 1982. Doutrina seguida, por maioria, no processo 56 798/82)

CABIMENTO DE VERBA

A classificação 01.02 é própria e exclusiva dos quadros aprovados por lei e enquanto se seja abonado por verbas dos respectivos quadros.

(Sessão de 19 de Outubro de 1982. Doutrina seguida, por unanimidade, no processo 60 913/82)

CARREIRAS

Tanto a letra como o espírito do artº 1º do Decreto-Lei nº 27 199 impõem a conclusão que a referencia à "categoria mais baixa" se reporta unicamente a lugares de entrada da respectiva carreira, não sendo aplicável a lugares intermédios.

(Sessão de 12 de Outubro de 1982. Doutrina seguida, por unanimidade, no processo 58 332/82)

CARREIRAS

O artº 6º do Decreto-Lei nº 191-C/79 apenas concede aos funcionários que tenham adquirido habilitações legais para o ingresso em carreira superior da mesma área funcional, a faculdade de se candidatarem aos lugares vagos nessas carreiras, não dispensando do concurso quando exigido.

(Sessão de 19 de Outubro de 1982. Doutrina seguida, por unanimidade, no processo 30 038/82)

CARREIRA

O arquitecto principal de uma Câmara Municipal que exerça, em comissão de serviço, funções de Director de G.A.T., não adquire a categoria funcional deste último cargo, mantendo o seu lugar de origem, não podendo ingressar directamente como arquitecto principal do GAT.

(Sessão de 19 de Outubro de 1982. Doutrina seguida, por unanimidade, no processo 57 643/82)

CARREIRA TÉCNICA

Os cursos complementares da Escola Náutica são cursos superiores, possibilitando a transição da carreira técnica para a carreira técnica superior.

(Sessão de 25 de Outubro de 1982. Doutrina seguida, no processo 52 146/82)

CHEFE DE SECÇÃO

Os primeiros oficiais não poderão ser providos em lugar de chefe de secção sem possuírem a habilitação literária do curso geral do ensino secundário ou equivalente.

(Sessão de 25 de Outubro de 1982. Doutrina seguida, por maioria, no processo 54 797/82)

CHEFES DE SECÇÃO

Por força do disposto no nº 3 do artº 11º do Decreto-Lei nº 191-C/79, de 25 de Junho, os primeiros oficiais só podem ser providos como chefes de secção quando se mostrem habilitados com o curso geral do ensino secundário ou equivalente.

(Sessão de 12 de Outubro de 1982. Doutrina seguida, por maioria, no processo 54 796/82)

COMPETÊNCIA

Cabe na esfera da competência do Tribunal de Contas conhecer da legalidade administrativa e da regularidade financeira dos actos submetidos a "Visto", incluindo a regularidade formal dos concursos e do processo de formação dos actos adminis -
trativos.

(Sessão de 26 de Outubro de 1982. Doutrina seguida,
por unanimidade, no processo 72 823/82)

CONCURSO

A circunstância de o interessado ter sido admitido a concurso e nele classificado não confere o direito à nomeação, já que o Tribunal de Contas tem competência para conhecer da regularidade dos concursos em que se fundamentam os actos administrativos sujeitos à sua fiscalização, bem como para apreciar se foram cumpridas todas as formalidades legais relativas ao concurso e se os interessados possuíam os requisitos legais para serem opositores aos mesmos.

(Acórdão de 6 de Outubro de 1982. Reapreciação 5/82)

CONCURSO

Concurso de prestação de provas e concurso documental são realidades bem diferenciadas. Cada uma tem o seu condicionalismo próprio para ser observado fielmente, não sendo legítimo fazer a abertura de uma daquelas modalidades e seguidamente adoptar o condicionalismo da outra.

(Acórdão de 6 de Outubro de 1982. Reclamação 4/82)

CONCURSO

Não tem apoio legal a limitação do concurso de provimento para técnico superior de 2ª classe do Departamento de Recursos Humanos da Saúde a licenciados em exercício de funções no Ministério dos Assuntos Sociais.

(Sessão de 25 de Outubro de 1982. Doutrina seguida, por unanimidade, no processo 398/82)

CONCURSO

A inobservância das disposições legais reguladoras do concurso acarreta a ilegalidade do acto administrativo em que se integra.

(Sessão de 26 de Outubro de 1982. Doutrina seguida, por unanimidade, no processo 72 825/82)

CONTAGEM DE TEMPO

A contagem de tempo prevista no nº 5 da Portaria nº 136/79, embora refira que o é "para todos os efeitos", não produz efeitos para a transição a operar nos termos do artº 4º do Decreto Regulamentar nº 63/80, já por este Diploma ser posterior, já por ser de grau superior na hierarquia das leis.

(Sessão de 26 de Outubro de 1982. Doutrina seguida, por unanimidade, no processo 31 594/82)

TEMPO DE SERVIÇO

Não é de contar no computo de 3 anos necessários ao provimento como assessor o tempo de serviço prestado por um técnico de 1ª. classe em comissão como técnico principal.

(Acórdão de 6 de Outubro de 1982. Reapreciação 5/82).

DIRECÇÃO-GERAL DO COMÉRCIO ALIMENTAR

A circunstância de se encontrar extinta a Direcção-Geral do Comércio Alimentar não impede o provimento de funcionários para o respectivo quadro, até à publicação do Decreto Regulamentar da nova Direcção-Geral do Comércio.

(Sessão de 19 de Outubro de 1982. Doutrina seguida, por unanimidade, no processo 65 192/82)

DIRECÇÃO-GERAL DE PREVIDÊNCIA

A integração ao abrigo do artº 4º do Decreto Regulamentar nº 53/80 apenas se aplica aos funcionários providos nas categorias de arquivistas de 1ª e 2ª classes.

(Sessão de 25 de Outubro de 1982. Doutrina seguida, por unanimidade, no processo 61 987/82)

DIREITOS ADQUIRIDOS

O artº 25º do Decreto-Lei nº 191-C/79 apenas salvaguarda os direitos adquiridos, não conferindo quaisquer expectativas de transição da carreira técnica para a carreira técnica superior sem se verificarem os pressupostos legais, nomeadamente as habilitações literárias exigidas por lei.

(Sessão de 25 de Outubro de 1982. Doutrina seguida, por unanimidade, no processo 52 151/82)

ESCRITURÁRIO DACTILÓGRAFO

O artº 28º do Decreto-Lei nº 49 410 não foi tácitamente revogado pelo artº 12º do Decreto-Lei nº 191-C/79.

(Acórdão, tirado por maioria, de 6 de Outubro de 1982. Reclamação 4/82)

ESCRITURÁRIO DACTILÓGRAFO

O recrutamento dos escriturários-dactilógrafos continua dependente da aprovação em concurso de prestação de provas.

(Sessão de 25 de Outubro de 1982. Doutrina seguida, por maioria, no processo 56 193/82)

FORÇAS ARMADAS

Não tendo sido publicado o Regulamento referido no nº 5 do artº 2º do Decreto-Lei nº 271/81, é legalmente possível proceder à promoção de funcionários do Estado Maior General das Forças Armadas, sem que se mostrem realizadas as provas de selecção exigidas pela alínea b) do nº 1 do citado Diploma.

(Sessão de 12 de Outubro de 1982. Doutrina seguida, por unanimidade, no processo 66 238/82)

FUNCIONÁRIO

O Decreto-Lei nº 395/80 não confere a qualidade de funcionário público ao pessoal dos Serviços Técnicos de Fomento que sejam extintos, apenas prevendo a sua transição para o quadro dos Gabinetes de Apoio Técnico (GATS)

(Sessão de 25 de Outubro de 1982. Doutrina seguida, por unanimidade, no processo 51 084/82)

INTERINIDADE

Não são possíveis, por ilegais, nomeações interinas para lugares de acesso que se encontrem vagos.

(Sessão de 26 de Outubro de 1982. Doutrina seguida, por unanimidade, no processo 73 140/82)

INSTITUTO DE APOIO À TRANSFORMAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO
DOS PRODUTOS AGRÁRIOS E ALIMENTARES

Pode ser provido em comissão de serviço como presidente do Instituto de Apoio à Transformação e Comercialização dos Produtos Agrários e Alimentares o Secretário da Universidade Técnica de Lisboa, na licença ilimitada, sem necessidade de prévia reassunção de funções já que à comissão pode ser posto termo a qualquer momento e para o cargo pode ser nomeado pessoa sem anterior vínculo à Administração.

(Sessão de 12 de Outubro de 1982. Doutrina seguida, por unanimidade, no processo 66 922/82)

LEI PERMISSIVA

O nº 4º do artº 8º do Decreto-Lei nº 171/82 é norma de carácter adjectivo que não possibilita por si só qualquer provimento.

(Sessão de 25 de Outubro de 1982. Doutrina seguida, por unanimidade, no processo 57 308/82)

LEI PERMISSIVA

O nº 1 do artº 1º do Decreto-Lei nº 146/71 não reveste a natureza de preceito legal permissivo de qualquer provimento, visando tão sòmente fixar a forma e não a fixação dos requisi-tos substanciais de provimento.

(Sessão de 26 de Outubro de 1982. Doutrina seguida, por unanimidade, no processo 57 897/82)

MACAU

Existe total autonomia entre o que dispõem os nºs 1 e 2 do artº 69º do Estatuto Orgânico de Macau.

(Acórdão de 12 de Outubro de 1982, tirado por maioria. Recusa 2/81)

LICENÇA

Até que seja publicado o despacho normativo a que alude o nº 2 do artº 9º do Decreto-Lei nº 166/82, a licença sem vencimento pode ser concedida ao abrigo do Decreto-Lei nº 414/74.

(Sessão de 19 de Outubro de 1982. Doutrina seguida, por maioria, no processo 65 845/82)

PESSOAL TECNICO SUPERIOR

O tempo de serviço prestado em Serviços da mesma área funcional é de contar para os efeitos do artº 8º do Decreto-Lei nº 191-C/79.

(Sessão de 25 de Outubro de 1982. Doutrina seguida, por unanimidade, no processo 65 175/82)

PROMOÇÕES

Não pode ser aplicado o regime fixado ao artº 1º do Decreto-Lei nº 27 199, que apenas se reporta a lugares de ingresso, à promoção de enfermeiros de 1ª classe a enfermeiro sub-chefe, reportando-se a vagas de enfermeiro-chefe.

(Sessão de 25 de Outubro de 1982. Doutrina seguida, por unanimidade no processo 67 758/82 .

PROVIMENTO

Não pode ser contratado como assistente estagiário, além do quadro, da Faculdade de Letras, um técnico auxiliar principal do quadro, de nomeação definitiva, que declara não pedir a exoneração deste último cargo.

(Sessão de 25 de Outubro de 1982. Doutrina seguida, por unanimidade, no processo 59 679/82)

PROVIMENTO

Não pode ser feito o provimento no lugar de escriturário-dactilógrafo de 1ª classe, quando o concurso respectivo se destinou ao preenchimento de lugares de escriturário-dactilógrafo de 2ª classe.

(Sessão de 25 de Outubro de 1982. Doutrina seguida, por unanimidade, no processo 60 020/82)

REAPRECIAÇÃO

É de indeferir o pedido de reapreciação da recusa de visto, quando o Membro de Governo não completa ou rectifica o ofício em que tal reapreciação era solicitada, dentro do prazo que lhe foi concedido pelo Relator.

(Despacho do Conselheiro Relator, de 4 de Outubro de 1982. Reapreciação 7/82)

REAPRECIAÇÃO

O pedido de reapreciação da recusa de visto deve, sob consignação de indeferimento liminar, ser subscrito pelo Membro do Governo que para tanto tenha legitimidade.

(Despacho do Conselheiro Relator, de 13 de Outubro de 1982. Reapreciação 33/82)

REAPRECIAÇÃO

Não são devidos emolumentos pela reapreciação feita ao abrigo da Lei nº 8/82, sendo, porém, devidos emolumentos pela oposição do "Visto", quando da sua procedência.

(Acórdão de 25 de Outubro de 1982. Reclamação 6/82)

REAPRECIAÇÃO

O despacho de admissão proferido nos termos do nº 1 do artº 4º da Lei nº 8/82 faz caso julgado no processo, não podendo o Tribunal vir a decidir em sentido contrário.

(Acórdão de 25 de Outubro de 1982, tirado por maioria.
Reclamação 6/82)

REQUISIÇÃO

Não pode deixar de se exigir uma determinada interdependência entre o lugar de origem e o lugar de requisição, traduzida num aferimento de aptidões profissionais e no respeito pelas respectivas categorias funcionais.

(Acórdão de 25 de Outubro de 1982. Reclamação 6/82)

REVERSÃO DE VENCIMENTO

Face ao disposto no nº 1 do artº 4º do Decreto-Lei nº 273/79, na redacção que lhe foi dada pelo Decreto-Lei nº 250/80, não pode o vencimento de exercício perdido pelo chefe de serviços administrativos de uma escola secundária deixar de reverter para o oficial administrativo de mais elevada categoria do respectivo quadro privativo ou do quadro de supranumerários, sendo irrelevante a sua renúncia ao exercício do cargo de chefia.

(Sessão de 12 de Outubro de 1982. Doutrina seguida, por unanimidade, no processo 57 013/82)

SUBSTITUIÇÃO

A invocação de "urgente conveniência de serviço" não pode justificar a rectroacção de efeitos ao despacho autorizador de substituição.

(Sessão de 25 de Outubro de 1982. Doutrina seguida, por unanimidade, no processo 56 575/82)

REVERSÃO DE VENCIMENTO

O disposto no nº 1 do artº 4º do Decreto-Lei nº 273/79 é de natureza imperativa insusceptível de ser postergado na sua aplicação, daí não ser legalmente possível fazer reverter para um terceiro oficial o vencimento de exercício perdido pelo chefe de serviços administrativos do quadro de uma escola, onde presta serviço um segundo oficial do quadro de supranumerários.

(Sessão de 12 de Outubro de 1982. Doutrina seguida, por unanimidade, no processo 26 765/82)

SUSPENSÃO DA INSTÂNCIA

Não há que suspender a instância em recurso de recusa de visto, vindo de Macau, aguardando decisão do Supremo Tribunal Administrativo, quando os actos administrativos integradores de um e outro recurso são autónomos e independentes.

(Acórdão de 12 de Outubro de 1982. Recusa 2/81).

TRANSIÇÃO

O Decreto-Lei nº 466/79, de 7 de Dezembro, aplica-se apenas à administração autárquica, não servindo para fundamentar a transição do quadro de pessoal da Câmara Municipal de Lisboa para o quadro do pessoal do Secretariado Nacional de Reabilitação.

(Sessão de 12 de Outubro de 1982. Doutrina seguida, por maioria no processo 54 791/82)

TRANSIÇÃO

Nos casos de transição, ao abrigo do Decreto-Lei nº 191-C/79, não há que exigir concurso.

(Sessão de 25 de Outubro de 1982. Doutrina seguida, por unanimidade, no processo 60 210/82)

UNIVERSIDADES

O nº 2 do artº 4º do Decreto-Lei nº 35/82 permite a nomeação de um técnico superior de 2ª classe, além do quadro, para as novas universidades criadas pelo Decreto-Lei nº 402/73, independentemente de concurso prévio.

(Sessão de 25 de Outubro de 1982. Doutrina seguida, por unanimidade, no processo 60 752/82)

V I S T O

O Tribunal só deverá proferir as suas resoluções sobre diplomas, despachos ou actos administrativos prévios e concretos, mas não quando os mesmos se apresentem eivados de imprecisão e dúvida.

(Sessão de 12 de Outubro de 1982. Doutrina seguida, por unanimidade, no processo 50 679/82)

V I S T O

O Visto não pode ser concedido quando os serviços tenham revelado o propósito de desrespeitar as decisões do Tribunal de Contas e de defraudar a lei.

(Sessão de 19 de Outubro de 1982. Doutrina seguida, por unanimidade, no processo 60 913/82)

VINCULAÇÃO

A vinculação ao poder autárquico não se tem por equivalente à vinculação à administração central, salvo nos casos expressamente contemplados na lei.

(Sessão de 25 de Outubro de 1982. Doutrina seguida, por unanimidade, no processo 63 207/82)

ALÉM QUADRO

- I - O artº 3º do Decreto-Lei nº 166/82 não abrange os contratos de progressão na situação de além quadro.
- II - Não é de exigir concurso para a progressão dos agentes nas categorias de além quadro.

(Sessão de 30 de Novembro de 1982. Doutrina seguida, por maioria, no processo 79 650/82)

ANOTAÇÃO

Carece de mera anotação o despacho que coloca um funcionário do Instituto do Comércio Externo numa delegação do Instituto no estrangeiro, mantendo o funcionário a mesma categoria.

Este despacho pode produzir efeitos antes da anotação.

(Sessão de 23 de Novembro de 1982. Doutrina seguida, por unanimidade, no processo 67 318/82)

BIBLIOTECA NACIONAL

Pode ser provido como contínuo de 1ª classe da Biblioteca Nacional o servente com mais de 5 anos de serviço, cujo lugar foi extinto.

(Sessão de 2 de Novembro de 1982. Doutrina seguida, por unanimidade, no processo 58 350/82)

CARREIRA

O artº 25º do Decreto-Lei nº 191-C/79 não confere ao funcionário a atribuição de quaisquer direitos de acesso, pois que tal preceito ao determinar que o diploma não prejudicará em caso algum a situação que o funcionário já detem, sòmente pretende salvaguardar os direitos adquiridos ou seja a situação concreta existente e não se pode reportar ao domínio de meras expectativas de acesso.

(Sessão de 16 de Novembro de 1982. Doutrina seguida, por maioria, no processo 70 545/82)

CARREIRAS HORIZONTAIS

Nas carreiras horizontais, o tempo de serviço sobrante relativamente ao necessário à determinação da categoria para o qual o funcionário transitou ao abrigo do nº 2 do artº 21º do Decreto-Lei nº 191-C/79 pode ser contado para início do período de serviço indispensável para acesso à categoria imediata.

(Sessão de 2 de Novembro de 1982. Doutrina seguida, por maioria, no processo 73 364/82)

CHEFE DE SECÇÃO

- 1 - O cargo de chefe de secção é, para todos os efeitos legais, o cargo de chefia da carreira administrativa.
- 2 - Para que o chefe de secção possa ser nomeado chefe de repartição deverá ter a habilitação mínima do curso geral do ensino secundário ou equiparado.

(Acórdão de 23 de Novembro de 1982, tirado por maioria. Reapreciação 12/82)

CLASSIFICAÇÃO

A classificação de Muito Bom pode provar-se independentemente do boletim de notação.

(Sessão de 30 de Novembro de 1982. Doutrina seguida, por unanimidade, no processo 80 816/82)

CONCURSO

A excepção contemplada no nº 2 do artº 7º do Decreto-Lei nº 165/82 não abrange as hipóteses de concursos abertos à data da publicação de tal Diploma, mas em que todos os concorrentes classificados já tenham sido colocados, ou concursos cujo período de validade já tenha cessado ou concursos que tenham ficado desertos.

(Sessão de 9 de Novembro de 1982. Doutrina seguida, por maioria, no processo 60 112/82)

CONCURSO

Ficaria sem qualquer conteúdo efectivo o normativo do artº 15º do Decreto-Lei nº 140/81, com a redacção do artº 2º do Decreto-Lei nº 285/81, se estivesse na dependência dos serviços o alargamento da área de recrutamento a funcionários e agentes dos outros quadros da administração, pois é precisamente essa obrigatoriedade permanente o verdadeiro conteúdo inovador do preceito.

(Acórdão de 23 de Novembro de 1982. Reapreciação 8/82)

CONCURSO

O artº 27º do Decreto-Lei nº 49 410 não foi revogado expressa ou tácitamente pelo artº 11º do Decreto-Lei nº 191-C/79

(Acórdão de 23 de Novembro de 1982. Reapreciação 11/82)

CONCURSOS

O Tribunal de Contas tem competência para conhecer da legalidade formal dos concursos e do processo de formação dos actos administrativos deles consequentes.

(Sessão de 16 de Novembro de 1982. Doutrina seguida, por unanimidade, no processo 71 094/82)

CONTRATO

Não carece de "Visto" o aditamento a contrato que altera o montante da renda, pedido pelo senhorio ao abrigo do disposto na Portaria nº 62/82.

(Sessão de 2 de Novembro de 1982. Doutrina seguida, no processo 73 165/82)

DIPLOMA DE PROVIMENTO

A regularização e actuação financeira que se pretende alcançar com um provimento que se não consubstancia através da investidura do cargo, visando apenas a atribuição de acréscimo remuneratório por período já decorrido, não pode merecer o Visto do Tribunal.

(Sessão de 16 de Novembro de 1982. Doutrina seguida, por unanimidade, no processo 79 108/82)

EMOLUMENTOS

O montante de emolumentos devido pelo visto é o da lei vigente quando da sua concessão, sendo indiferente a data do despacho visado e da primeira entrada do processo no Tribunal.

(Sessão de 9 de Novembro de 1982. Doutrina seguida, por unanimidade, no processo 102 688/80)

EMOLUMENTOS

O facto gerador da liquidação e pagamento dos emolumentos é a concessão do "Visto" aos respectivos diplomas de provimento. A lei aplicável terá de ser necessariamente a que vigora à data em que o "Visto" foi concedido pelo Tribunal.

(Sessão de 16 de Novembro de 1982. Doutrina seguida, no processo 24 693/82)

EMOLUMENTOS

Os emolumentos pelo "Visto" em contrato ou minuta são no montante fixado pela lei em vigor quando do "Visto", que não o fixado pela lei vigente à data da abertura do concurso.

(Sessão de 23 de Novembro de 1982. Doutrina seguida, por unanimidade, no processo 54 999)

FORÇAS ARMADAS

Pode ser feito o provimento, como contratado, para o lugar de escriturário-dactilógrafo de 2ª classe dos Serviços Sociais das Forças Armadas, sem previamente se terem realizado provas de selecção.

(Sessão de 16 de Novembro de 1982. Doutrina seguida por maioria, no processo 59 236/82)

FORÇAS ARMADAS

O artº 7º do Decreto-Lei nº 165/82 não é aplicável ao pessoal civil das Forças Armadas.

(Sessão de 30 de Novembro de 1982. Doutrina seguida, por unanimidade, no processo 72 595/82)

FUNÇÃO PÚBLICA

O funcionário de organismo de coordenação económica não se pode haver por vinculado à Administração Central, sendo-lhe consequentemente inaplicáveis num plano de relacionamento, as disposições gerais nomeadamente as de intercomunicabilidade que disciplinam o regime jurídico da função pública.

(Sessão de 2 de Novembro de 1982. Doutrina seguida, por unanimidade, no processo 73 097/82)

FUNCIONÁRIO

A circunstância de o interessado pertencer aos quadros do pessoal duma autarquia não lhe concede a qualidade de funcionário público.

(Sessão de 9 de Novembro de 1982. Doutrina seguida, por unanimidade, no processo 57 642/82)

FUNCIONÁRIO

A vinculação de um funcionário ou agente dos quadros do pessoal das autarquias locais não pode legalmente ser entendida como vinculação à função pública no sentido da Administração Pública de Estado.

(Sessão de 16 de Novembro de 1982. Doutrina seguida, por unanimidade, no processo 73 766/82)

GABINETE DE APOIO TÉCNICO

O curso de formação de serralheiro da Escola Técnica de Avelar Brotero, de Coimbra, não é habilitação literária bastante ao provimento como desenhador de 2ª classe, além do quadro, de Gabinete de Apoio Técnico GAT.

(Sessão de 9 de Novembro de 1982. Doutrina seguida, por unanimidade, no processo 38 004/82)

INTERINIDADE

Nos casos em que a forma normal do provimento é a promoção e se trate de lugar vago, não é aplicável o regime de nomeação interina previsto no artº 31º da lei de 14 de Junho de 1913.

(Sessão de 9 de Novembro de 1982. Doutrina seguida, por unanimidade no processo 30 422/82)

INTERINIDADE

Não são possíveis nomeações interinas para lugares de acesso que se encontrem vagos.

(Sessão de 16 de Novembro de 1982. Doutrina seguida, por unanimidade, no processo 79 737/82)

LEI PERMISSIVA

É bastante a invocação dos arts 7º nos 4 e 9, nos 1 e 3 na transição de fiscais de obras públicas de 2ª classe do quadro da Direcção Geral dos Recursos e Aproveitamentos Hidráulicos de quem exercia o cargo de fiscal auxiliar de obras públicas do mesmo quadro.

(Sessão de 16 de Novembro de 1982. Doutrina seguida, por unanimidade, no processo 55 547/82)

MINISTÉRIO DA HABITAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS

O artº 8º do Regime de Pessoal dos Serviços do Ministério da Habitação e Obras Públicas, aprovado pelo Decreto-Lei nº 171/82, como que se traduz numa providência de remédio ao dispor da Administração Central em ordem a superar certos impasses pontuais na gestão do pessoal, que não é aplicável a situações de interinidade.

(Sessão de 16 de Novembro de 1982. Doutrina seguida, por unanimidade, no processo 77 362/82)

PROMOÇÃO

O acesso à categoria de enfermeiro de 1ª classe, regulado na alínea c) do artº 32º do Decreto-Lei nº 414/71, é feito por concurso documental que não pode ser substituído por escolha.

(Sessão de 9 de Novembro de 1982. Doutrina seguida, por unanimidade, no processo 69 217/82)

PROMOÇÃO

Para a promoção em quadros circulares não são exigíveis concursos, dependendo apenas do decurso do tempo e classificação de serviço.

(Sessão de 16 de Novembro de 1982. Doutrina seguida, por maioria, no processo 74 363/82)

PROVIMENTO

Pode ser provido, em nomeação definitiva, o lugar vago pelo seu titular ter sido nomeado em comissão de serviço para outro cargo, sem conservar o direito de regresso ao lugar de origem.

(Sessão de 9 de Novembro de 1982. Doutrina seguida, por unanimidade, no processo 67 710/82)

PROVIMENTO

Do facto de o interessado ter sido aprovado em concurso público aberto em Novembro de 1981 não resulta a desnecessidade da obtenção dos despachos autorizadores do artº 2º do Decreto-Lei nº 166/82, se o despacho de provimento ocorreu na vigência deste Diploma.

(Sessão de 9 de Novembro de 1982. Doutrina seguida, por unanimidade, no processo 68 305/82)

REAPRECIAÇÃO

Tendo-se procurado ou tentado um provimento através da prática de 3 actos administrativos autónomos a que foi recusado o visto e solicitando-se a reapreciação de recusa quanto a todos, só há que atender às razões de facto em direito oposta à última das recusas.

(Acórdão de 30 de Novembro de 1982. Reclamação 18/82)

REAPRECIAÇÃO

O pedido de reapreciação de recusa de visto dirige-se única e exclusivamente à apreciação da legalidade do acto administrativo "quatale", isto é, a apreciar se tal acto se apresenta ou não em conformidade com as leis em vigor.

Só esse acto administrativo e não qualquer outro pode ser objecto de reapreciação.

(Acórdão de 30 de Novembro de 1982. Reclamação 45/82)

RETROACÇÃO

Não é legal a repetição dos efeitos retroactivos do nº 3 do artº 7º do Decreto Regulamentar 87/77, aditado pelo artº 1º do Decreto-Lei nº 378-A/78, a favor do mesmo interessado.

(Sessão de 9 de Novembro de 1982. Doutrina seguida, por unanimidade, no processo 63 198/82)

RETROACÇÃO

O artº 13º do Decreto-Lei nº 465/80 apenas visa fixar a data de entrada em vigor, não possibilitando retroacção de efeitos de transições operadas em 1982.

(Sessão de 16 de Novembro de 1982. Doutrina seguida, por unanimidade, no processo 64 602/82)

REVERSÃO DE VENCIMENTO

Não é legalmente possível a reversão de vencimento de exercício perdido pelo Chefe de Serviços Administrativos de uma Escola secundária a favor de um terceiro oficial, quando no quadro exista um segundo oficial, ainda que supranumerário

(Sessão de 9 de Novembro de 1982. Doutrina seguida, por unanimidade, no processo 62 761/82)

REVERSÃO DE VENCIMENTO

- I. - No Decreto-Lei nº 191-E/79 visou-se apontar o condicionalismo legal para que seja comedida a reversão de vencimento de exercício.
 - II. - Para haver lugar à reversão importa que um funcionário haja perdido o direito ao seu vencimento de exercício
 - III. - O funcionário que tenha perdido vencimento de exercício e possa beneficiar do disposto no artº 9º do Decreto com força de lei nº 19 478, de 18 de Março de 1931, não pode renunciar ao mesmo a favor de outro funcionário.
- (Acórdão de 9 de Novembro de 1982. Reapreciação 14/82)

REVERSÃO DE VENCIMENTO

Não é legalmente possível fazer reverter para um es-
criturário-dactilógrafo o vencimento de exercício perdido por
um 3º oficial, lugares integrados em carreiras distintas.

(Sessão de 16 de Novembro de 1982. Doutrina seguida,
por unanimidade, no processo 79 248/82)

REVERSÃO DE VENCIMENTO

A expressão "impedimento legal", do nº 3 do artº 5º
do Decreto-Lei nº 191-E/79, foi utilizada no seu sentido técni-
co-jurídico por contraposição a "vacatura", como se conclui do
confronto dos artºs. 4º e 5º, no primeiro dos quais se estabe-
lece uma nítida e justificada diferenciação destas duas reali-
dades, de impedimento legal nas alíneas b), c) e d) e a "vacatu-
ra" na alínea a) do artº 4º, diferenciação esta que necessària-
mente, até pela contiguidade dos dois preceitos, não pode dei-
xar de estar presente na interpretação do segundo de estes dois
artigos.

(Sessão de 16 de Novembro de 1982. Doutrina seguida,
por unanimidade, no processo 44 402/82)

REVERSÃO DE VENCIMENTO

Não é legalmente possível a reversão de vencimento de
exercício se o funcionário substituído tem categoria inferior
à do substituto.

(Sessão de 23 de Novembro de 1982. Doutrina seguida,
por unanimidade, no processo 81 372/82)

REVERSÃO DE VENCIMENTO

Não pode ser visado o despacho que mais não é que uma
segunda prorrogação da reversão de vencimento de exercício.

(Sessão de 30 de Novembro de 1982. Doutrina seguida,
por unanimidade, no processo 70 779/82)

REVERSÃO DE VENCIMENTO

Não pode reverter para escriturário-dactilógrafo - carreira de escriturários-dactilógrafos - o vencimento de exercício perdido por um terceiro oficial - carreira de oficiais administrativos.

(Sessão de 30 de Novembro de 1982. Doutrina seguida, por unanimidade, no processo 81 274/82)

SUPREMO TRIBUNAL ADMINISTRATIVO

Do Acórdão do Supremo Tribunal Administrativo que anulou o acto recorrido, para que fosse devidamente fundamentado, não pode a Administração concluir pela nomeação que o recorrente pretendia.

(Sessão de 9 de Novembro de 1982. Doutrina seguida, por unanimidade, no processo 59 953/82)

TÉCNICO SUPERIOR

O ingresso e a transição para as carreiras do pessoal técnico superior apenas é consentida aos licenciados e aos portadores de cursos superiores adequados nos precisos termos da lei.

(Acórdão de 23 de Novembro de 1982. Reapreciação 34/82)

TÉCNICOS SUPERIORES

Não pode ser contado o tempo de serviço de chefe de repartição como tempo de serviço útil para o acesso na carreira do pessoal técnico superior a quem iniciou as funções de chefe de repartição antes de possuir uma licenciatura.

(Acórdão tirado por maioria, de 30 de Novembro de 1982. Reclamação 42/82)

TÉCNICOS SUPERIORES

Reúne os requisitos legais para o provimento na categoria de técnico superior do quadro a que se acha vinculado (Direcção-Geral da Organização e Recursos Humanos) o Licenciado em Ciências Económicas e Financeiras que contava, na altura do provimento, mais de doze anos de serviço na categoria de chefe de repartição, com funções de natureza predominantemente técnicas.

(Acórdão de 30 de Novembro de 1982. Reclamação nº 40/82)

TÉCNICOS SUPERIORES DE SAÚDE

- I. - A Portaria nº 465/82 não criou vagas; adaptou o quadro anexo ao Decreto-Lei nº 99/72 às novas carreiras.
- II. - O artº 15º do Decreto Regulamentar nº 29/81, por si só, não autoriza a retroacção dos abonos a 1 de Abril de 1980, quando o despacho autorizador da transição é de 20 de Novembro de 1981, mas ela poderá ser possível face ao disposto no artº 7º e seus números do mesmo Diploma.

(Sessão de 23 de Novembro de 1982. Doutrina seguida, por unanimidade, no processo 62 807/82)

TELEFONISTA

Pode ser promovido a telefonista principal quem, não tendo embora 5 anos de serviço na categoria imediatamente anterior, é telefonista há mais de 10 anos.

(Sessão de 16 de Novembro de 1982. Doutrina seguida, por maioria, no processo 79 687/82)

TRANSFERÊNCIA

Só são viáveis as transferências de quadro para quadro.

(Sessão de 16 de Novembro de 1982. Doutrina seguida, por unanimidade, no processo 79 341/82)

TRANSIÇÃO

O pessoal além do quadro também beneficia do disposto no nº 1 do artº 6º do Decreto-Lei nº 377/79, mas sem alteração do vínculo que o liga à Administração.

(Sessão de 9 de Novembro de 1982. Doutrina seguida, por unanimidade, no processo 18 883/81)

TRANSIÇÃO

- I. - Podem ingressar, por transição, nas carreiras do pessoal técnico superior indivíduos não licenciados, desde que obedeçam às prescrições da própria lei.
- II. - O ingresso e a transição para as carreiras de pessoal técnico superior apenas é consentida aos licenciados e aos portadores de cursos superiores adequados em termos de lei.

(Acórdão de 23 de Novembro de 1982. Reclamação 34/82)

TRANSIÇÃO

Não é legalmente possível a transição para técnico auxiliar de 1ª classe, ao abrigo do artº 4º do Decreto Regulamentar nº 87/77 e nº 7.2 do despacho nº 208/80 de quem, à data do despacho autorizador do provimento, já não detinha a situação jurídico-funcional de preparador, exercendo funções de assistente estagiário, além do quadro, da Faculdade de Farmácia.

(Sessão de 30 de Novembro de 1982. Doutrina seguida, por unanimidade, no processo 82 924/82)

V I S T O

A concessão do "Visto" em sessão normal de visto, não impede o Tribunal de decidir, em casos análogos futuros, de maneira diversa, recusando o visto, quando entende que o procedimento anteriormente tomado não foi legalmente correcto.

(Acórdão de 30 de Novembro de 1982. Reclamação 18/82)

ACESSO

O artº 25º do Decreto-Lei nº 191-C/79 não consagra quaisquer direitos de acesso, mas a simples salvaguarda dos direitos já adquiridos e o respeito pela situação que o funcionário detenha.

(Acórdão de 7 de Dezembro de 1982, tirada por maioria. Reclamação 47/82)

ACESSO

O nº 3 do artº 4º do Decreto-Lei nº 191-C/79, de 25 de Junho, postula que o funcionário tenha exercido funções durante dois anos completos e consecutivos, e a classificação de muito bom terá de abranger esse período temporal.

(Acórdão de 14 de Dezembro de 1982. Reclamação 2/82)

ALEM QUADRO

Não é de considerar "novo contrato" o que dá forma à progressão dos agentes na respectiva carreira.

(Sessão de 7 de Dezembro de 1982. Doutrina seguida, por unanimidade, no processo 77 196/82)

ANULAÇÃO DE VISTO

A anulação do Visto quanto a diplomas e despachos que, tendo sido visados, não chegaram a ser publicados no Diário da República, compete aos juízes de turno.

(Resolução de 21 de Dezembro de 1982. Processo 60 026/82)

APLICAÇÃO DAS LEIS NO TEMPO

As regras de aplicação das leis no tempo cedem perante a extinção dos Organismos em que se pretende efectuar provimentos.

(Acórdão de 7 de Dezembro de 1982. Reclamação 16/82)

CARREIRA

As consequências da valorização da carreira de inspector operada pela Portaria nº 438/81, a serem atendidas no plano pessoal do interessado, deverão sê-lo por vias exclusivamente financeiras sem o recurso a provimentos administrativamente irregulares e ilegítimos.

(Acórdão de 14 de Dezembro de 1982. Reclamação 49/82)

CLASSIFICAÇÃO DE SERVIÇO

O Decreto Regulamentar 57/80 apenas iniciou a sua vigência no ano de 1981, com reportamento directo ao serviço prestado no ano anterior, ao de 1980.

Não sendo possível classificar o serviço de 1979 através dos critérios daquele Diploma, não pode ser concedido o benefício do nº 3 do artº 4º do Decreto-Lei nº 191-C/79.

(Acórdão de 21 de Dezembro de 1982. Reclamação 80/82)

CONCURSO

O concurso de habilitação ou provimento considera-se aberto pela data da publicação do aviso no Diário da República, que não pela do despacho que determina a sua abertura.

(Sessão de 7 de Dezembro de 1982. Doutrina seguida, no processo 82 795/82)

CONCURSOS

Cabe na esfera da competência do Tribunal de Contas conhecer da legalidade administrativa e da regularidade financeira dos actos submetidos a "Visto", incluindo a regularidade formal dos concursos e do processo de formação dos actos administrativos deles consequentes.

(Sessão de 7 de Dezembro de 1982. Doutrina seguida, por unanimidade, no processo 71 545/82)

CONCURSO

O Tribunal de Contas é competente para apreciar a regularidade formal dos concursos.

(Acórdão de 21 de Dezembro de 1982. Reclamação 73/82)

ESCRITURÁRIO DACTILOGRAFO

Não é de contar o tempo de serviço prestado como escriturário-dactilógrafo dos Serviços Municipalizados no cômputo necessário à promoção à 1ª classe de escriturário-dactilógrafo da Direcção-Geral das Contribuições e Impostos.

(Sessão de 7 de Dezembro de 1982. Doutrina seguida, por maioria, no processo 82 132/82)

FUNÇÃO PÚBLICA

A equiparação feita pela Portaria nº 270/80 basta para que se tenham os equiparados como vinculados à função pública.

(Sessão de 7 de Dezembro de 1982. Doutrina seguida, por unanimidade, no processo 86 820/82)

INTERINIDADE

Não são possíveis nomeações interinas para lugares de acesso que se encontrem vagos.

(Sessão de 7 de Dezembro de 1982. Doutrina seguida, por unanimidade, no processo 8 174/82)

INUTILIDADE DA LIDE

Torna-se inútil o prosseguimento de reclamação de recusa de visto se, entretanto, a interessada foi nomeada por novo despacho para o mesmo cargo e o respectivo diploma de provimento obteve o visto do Tribunal.

(Acórdão de 14 de Dezembro de 1982. Reclamação 66/82)

MACAU

O recrutamento levado a efeito com base no artº 69º do Estatuto Orgânico de Macau não está dependente da observância dos requisitos que, por ventura, estejam estabelecidos nos diplomas reguladores do recrutamento para o respectivo serviço, daí que o provimento alicerçado no seu nº 2 não esteja dependente da abertura do concurso.

(Acórdão de 14 de Dezembro de 1982. Processo 2/81)

MACAU

O nº 1 do artº 69º do Estatuto Orgânico de Macau abrange tam sòmente os funcionários e agentes dos quadros dependentes dos órgãos de soberania da República e não os servidores ou pessoal das empresas públicas.

(Acórdão de 14 de Dezembro de 1982. Processo 9/82)

MINISTÉRIO DA CULTURA

O Decreto-Lei nº 59/80 contém uma série ordenada, sistemática e seguida, de normas e regras de primeiro provimento por integração em quadros de todo o pessoal mencionado no seu artº 23º e não regras de aplicação permanente.

(Acórdão de 7 de Dezembro de 1982. Reclamação 17/82)

OFICIAIS ADMINISTRATIVOS

O nº 3 do artº 11º do Decreto-Lei nº 191-C/79 apenas abrange os funcionários já inseridos na carreira de oficiais administrativos à data da sua entrada em vigor e não também os funcionários inseridos na carreira de escriturário-dactilógrafo

(Acórdão de 21 de Dezembro de 1982. Reclamação 25/82)

RECLAMAÇÃO

- I. - Quando a Administração, recusado o visto ao diploma de provimento, volta a nomear o mesmo interessado para o mesmo lugar, embora com fundamentação legal diferente, há-de concluir-se que a Administração aceitou a recusa do primeiro dos dois actos, cuja reapreciação não poderá já requerer.
- II. - Deve pois o Tribunal abster-se de conhecer do pedido de reapreciação do primeiro dos actos antes referidos (Acórdão de 14 de Dezembro de 1982, tirado por maioria. Reclamação 35/82)
-

REQUISIÇÃO

- I. - Mantem-se inalterável a situação jurídico-profissional do servidor da função pública pertencente a um organismo ou serviço mesmo que, transitòriamente, se mantenha na situação de requisitado noutro serviço.
- II. - A promoção só se pode verificar no quadro de origem do requisitado.
- (Acórdão de 21 de Dezembro de 1982, tirado por maioria. Reclamação 73/82)
-

REQUISITOS PESSOAIS

A Lei nº 8/82, entrada em vigor em 31 de Maio de 1982, não tem aplicação a situações jurídico-administrativas constituídas no ano de 1980.

(Acórdão de 14 de Dezembro de 1982, tirado por maioria. Reclamação 21/82)

RECLAMAÇÃO

- I. - Quando a Administração, recusado o visto ao diploma de provimento, volta a nomear o mesmo interessado para o mesmo lugar, embora com fundamentação legal diferente, há-de concluir-se que a Administração aceitou a recusa do primeiro dos dois actos, cuja reapreciação não poderá já requerer.
- II. - Deve pois o Tribunal abster-se de conhecer do pedido de reapreciação do primeiro dos actos antes referidos (Acórdão de 14 de Dezembro de 1982, tirado por maioria. Reclamação 35/82)
-

REQUISICÃO

- I. - Mantem-se inalterável a situação jurídico-profissional do servidor da função pública pertencente a um organismo ou serviço mesmo que, transitòriamente, se mantenha na situação de requisitado noutro serviço.
- II. - A promoção só se pode verificar no quadro de origem do requisitado.
- (Acórdão de 21 de Dezembro de 1982, tirado por maioria. Reclamação 73/82)
-

REQUISITOS PESSOAIS

A Lei nº 8/82, entrada em vigor em 31 de Maio de 1982, não tem aplicação a situações jurídico-administrativas constituídas no ano de 1980.

(Acórdão de 14 de Dezembro de 1982, tirado por maioria. Reclamação 21/82)

REVERSÃO DE VENCIMENTO

O vencimento de exercício perdido por um funcionário só pode reverter a favor de funcionário de igual ou inferior categoria da mesma carreira.

(Sessão de 7 de Dezembro de 1982. Doutrina seguida, por unanimidade, no processo 81 612/82)

TEMPO DE SERVIÇO

As nomeações, feitas ao abrigo do Decreto-Lei nº 792/75, retroagem os seus efeitos a 1. de Outubro de 1975.

(Acórdão de 14 de Dezembro de 1982. Reclamação 62/82)

TRANSIÇÃO

Não cabe aos próprios serviços efectuar a transição para as carreiras e letras de vencimento a que se referem os Decretos-Lei nºs 191-C e 377/79 sem se mostrar que foi dado rigoroso cumprimento e se observaram as formalidades prescritas nos artigos 4º e 5º do último dos Diplomas referidos, nomeadamente sujeitar a "Visto" do Tribunal de Contas as listas de pessoal que transita para as categorias e carreiras previstas no seu mapa anexo. Não basta invocar-se uma Portaria que não se harmoniza com os referidos diplomas legais, de grau hierarquicamente superior, para se afirmar sem apoio legal, que o interessado detem a categoria que os Serviços lhe atribuíram.

(Acórdão de 7 de Dezembro de 1982. tirado por maioria. Reclamação 47/82)

TRANSIÇÃO

- I. - Não cabe aos próprios serviços proceder à transição para as carreiras e correspondentes letras de vencimento, a que se referem os Decretos-Lei nºs 191-C, e 377/79, sem se verificar que estão rigorosamente cumpridas as formalidades estabelecidas nos artºs 4º e 5º do Decreto-Lei nº 377/79, e sem sujeitar a Visto do Tribunal de Contas os diplomas ou listas, conforme os casos, de transição para as categorias e carreiras previstas no mapa anexo aquele citado Diploma Legal.
- II. - O técnico de 3ª classe só pode transitar e ingressar na carreira técnica superior se habilitado com licenciatura ou curso superior adequado, desde que se verificasse determinado esquema remuneratório praticado na carreira técnica anterior à publicação dos Decretos-Lei nºs 191-C e 377/79.
- (Acórdão de 21 de Dezembro de 1982, tirado por maioria. Reclamação 44/82)

CONSULTAS

DESPESAS

As despesas efectuadas com abastecimento estatal de harmonia com os preceitos contidos e previstos no Decreto-Lei nº 507/79, de 24 de Dezembro, são perfeitamente regulares.

(Sessão de 26 de Outubro de 1982. Doutrina seguida, por maioria, na consulta 3/82)

